

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

*Análisis de las élites de poder
en México y Estados Unidos*

Tesis para obtener el Título de Licenciatura en
CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PRESENTA:

MARÍA FERNANDA BARRAGÁN GARCÍA

ASESOR:

DR. MARIO MAGALLÓN ANAYA

Ciudad de México, junio de 2017



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos	5
Introducción	6

CAPÍTULO 1
LA NOCIÓN DE ‘PODER’ EN MICHEL FOUCAULT

1.1. Introducción	21
1.2. La constitución de los ejercicios de poder	25
1.2.1. <i>El castigo</i>	26
1.2.2. <i>La reclusión</i>	28
1.2.3. <i>La vigilancia</i>	29
1.2.4. <i>La transformación</i>	30
1.2.5. <i>El despliegue del poder en nuestros días</i>	31
1.3. Foucault y su oposición a los clásicos	32
1.3.1. <i>Contra el economicismo</i>	33
1.3.2. <i>Contra la posesión del poder</i>	35
1.3.3. <i>Contra la concepción negativa del poder</i>	36
1.3.4. <i>El poder por encima de la violencia</i>	37
1.3.5. <i>El poder como realización</i>	38

1.4. La naturaleza <i>extrajurídica</i> del poder	40
1.4.1. <i>Capitalismo</i> y medicalización	43
1.5. Conclusión	46
1.5.1. <i>La microfísica del poder</i> <i>frente a la macrofísica del Estado</i>	48
1.5.2. <i>Los métodos del poder</i>	49
1.5.3. <i>La rebelión del poder contra el poder</i>	50

CAPÍTULO 2

LOS EJERCICIOS DE PODER DE LA ÉLITE ESTADOUNIDENSE

2.1. La élite política estadounidense	57
2.1.1. <i>El intruso político</i>	59
2.1.2. <i>El control de la burocracia</i>	63
2.1.3. <i>Conclusión</i>	65
2.2. La élite empresarial de los Estados Unidos	66
2.2.1. <i>La red empresarial</i>	67
2.2.2. <i>El carácter selecto de la élite corporativa</i>	69
2.2.3. <i>La normalización empresarial</i>	71
2.2.4. <i>Conclusión</i>	75
2.3. La élite militar de los Estados Unidos	77
2.3.1. <i>El «giro militarista» de la política estadounidense</i>	78
2.3.2. <i>Otras militarizaciones:</i> <i>diplomacia, economía, educación</i>	79
2.3.3. <i>Conclusión</i>	85
2.4. La élite del poder	87
2.4.1. <i>Una «cuarta» minoría</i>	87
2.4.2. <i>Historia de la élite del poder</i>	89
2.4.3. <i>Actualidad de la élite del poder</i>	89
2.4.4. <i>Conclusión</i>	91

CAPÍTULO 3
EL EJERCICIO DE PODER DE LAS ÉLITES EN MÉXICO

3.1. La élite política mexicana	93
3.1.1. <i>La élite «presidencialista» mexicana</i>	95
3.1.2. <i>La burocracia</i>	96
3.1.3. <i>La hegemonía de la élite política mexicana</i>	98
3.1.4. <i>La élite política y el partido oficial</i>	100
3.1.5. <i>Conclusión</i>	101
3.2. La élite empresarial mexicana	102
3.2.1. <i>Antecedentes históricos</i>	103
3.2.2. <i>Los empresarios frente a la élite política</i>	107
3.2.3. <i>La influencia política sobre la élite empresarial</i>	110
3.2.4. <i>Conclusión</i>	111
3.3. La élite militar mexicana	114
3.3.1. <i>Antecedentes históricos</i>	114
3.3.2. <i>Transformación de la élite militar mexicana</i>	117
3.3.3. <i>El «poder militar» de la élite política</i>	120
3.3.4. <i>Conclusión</i>	124
 Conclusiones	 128
 Bibliografía	 136

AGRADECIMIENTOS

*Agradezco a mi familia por todo el apoyo brindado,
a mi madre María de los Ángeles García
y a mi hermana Renata Barragán.*

A mis maestros.

*A mi asesor,
Dr. Mario Magallón Anaya.*

*A mis sinodales y lectores,
Mtra. María de los Ángeles Nava,
Dra. Denhi Rosas Zárate,
Mtro. Pablo Trejo Romo
y Mtro. Tomás Tello Desiderio.*

A mis amigos.

*A José Luis Pérez Sandoval
que me ayudó en este proceso y con la edición final del trabajo.*

INTRODUCCIÓN

A partir del siglo XX, el fenómeno del poder político parece obedecer a una nueva lógica. Esta reconfiguración de las prácticas del poder en la actualidad puede hallarse determinada por dos causas, al menos: o bien nos encontramos ante el reordenamiento de las tradicionales redes de poder, cuya nueva organización nos resulta, por ende, inédita; o bien la renovación de los métodos de análisis nos ha permitido observar nuevos componentes en las viejas prácticas de poder. En cualquier caso, la dinámica del poder parece cobrar, en nuestros días, una serie de rasgos que lo distinguen de sus formas tradicionales.

La recíproca destrucción de las naciones europeas durante la Primera Guerra Mundial creó en el centro del mundo decimonónico un vacío de poder que varias fuerzas se apresuraron a ocupar. Por una parte, se encontraban las emergentes formaciones políticas con una visión extrema sobre la reorganización de los Estados europeos, proyectos que, al final, terminaron por conducir a la instauración de los regímenes fascistas. Por la otra, asomaban los Estados Unidos y la naciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las dos potencias protagonistas del siglo XX. Ya fuese para dar inicio a sus propios programas político-económicos, o bien, para extenderlos más allá de sus propios territorios, los nuevos actores compitieron entre sí con el objetivo de

alcanzar el mejor lugar en el reacomodo de fuerzas provocado por la «muerte» de Europa. Esta nueva disputa condujo, como se sabe, a una Segunda Guerra Mundial.

Nos encontramos, pues, frente a una nueva realidad política: una serie de relaciones de poder que ya no se organizan dentro de los límites del Estado ni a través de sus mecanismos tradicionales, sino por medio de fuerzas externas a él y que, incluso, lo han conducido a una severa crisis en medio de un mundo globalizado. Frente a este escenario, una recurrente pregunta ha surgido en el ámbito de la política: ¿Siguen siendo pertinentes los enfoques clásicos para explicar la dinámica del poder en nuestros días?

SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA

Con el fin de responder esa pregunta, nuestra investigación se concentrará en el análisis de las élites, uno de los actores de poder más representativos en la escena política. Con base en nuevas formas de control y dominación, las élites han reorganizado las prácticas de poder en nuestros días. Del amplio universo de élites que existen, nos concentraremos en tres de ellas: las minorías políticas, los grupos empresariales y las camarillas militares. Esta delimitación está relacionada con la idea del sociólogo estadounidense Charles Wright Mills, quien considera que son esos grupos en particular los que han configurado la actual estructura de poder característica de los Estados Unidos.

A su vez, nuestra decisión de estudiar la realidad política de los Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que sus prácticas de poder resultan representativas de la era actual, ya que, de entre los dos bloques de poder protagonistas del orden bipolar, fueron precisamente los Estados Unidos quienes sobrevivieron al siglo XX. En otras palabras, hemos preferido observar el desarrollo de las élites estadounidenses a lo largo del siglo XX porque son ellas las que continúan

actuando en nuestros días, mientras que los grupos de interés del mundo soviético —cuyo poder resultó *derrotado*— han desaparecido ya, o han asumido formas distintas.

Asimismo, analizaremos la forma en que se desenvuelven las élites políticas, empresariales y militares mexicanas. Esto responde a dos motivos. El primero tiene que ver con el interés de explicar la realidad política de nuestro país; el segundo radica en el intento de interpretar la dinámica del poder en México, en contraste con el mundo exterior. Así, este análisis tendrá por objeto los ejercicios de poder de las élites mexicanas que caracterizaron la escena política antes de la transición democrática del año 2000, en el entendido de que dicha transición podría constituir el límite temporal del siglo XX mexicano.

Por otro lado, nuestra investigación se concentrará en observar las prácticas de poder propias del siglo XX, sobre todo, de aquéllas que se gestaron tras la Segunda Guerra Mundial y resultaron protagónicas hasta la caída del muro de Berlín —en el caso específico de nuestro país, hasta la transición política del año 2000, como hemos señalado—. Si prescindimos de las manifestaciones de poder representativas del siglo XXI, es porque consideramos que éstas no pueden entenderse cabalmente sin aquéllas. Desde una perspectiva actual, puede resultar de mayor *interés*, en efecto, comprender las relaciones de poder que ocurren en este siglo, pero hay una mayor *necesidad* de comprender los poderes propios del XX, los cuales, en buena medida, le dan forma al «organigrama» del poder en nuestros días.

Finalmente, la actuación de las élites políticas, empresariales y militares de ambos países será interpretada a través de un conjunto de ideas propuestas por el filósofo francés Michel Foucault, que tratan de explicar, al margen de los enfoques tradicionales, la lógica del poder actual y el sentido de los ejercicios que, en torno a él, se producen en nuestras sociedades.

JUSTIFICACIÓN

La importancia del estudio de las élites radica en la influencia —muchas veces inadvertida— que éstas ejercen sobre la gestión y la toma de decisiones del Estado, tanto en su organización interna como en sus relaciones con otros países y agrupaciones políticas. Se sabe que el fin de dicha influencia consiste en satisfacer las necesidades propias de los grupos minoritarios —por ejemplo, mayores libertades políticas y económicas; mejores oportunidades de negocios; esquemas regulatorios menos estrictos, etc.— y el resultado más frecuente es la creación de un conjunto de leyes y políticas públicas elaboradas según sus intereses. Por ello, su estudio resulta útil para reconocer un factor de suma importancia al momento de evaluar el rumbo de la vida política.

Ahora bien, la influencia del poder no tiene que ver sólo con las luchas en torno al Estado, sino que, como era de suponerse, se extiende hacia toda la sociedad y afecta la vida de sus integrantes. Tal como lo ha señalado Charles Wright Mills (2013),

[l]os poderes de los hombres corrientes están circunscritos por los mundos cotidianos en que viven, pero aun en esos círculos del trabajo, de la familia y de la vecindad muchas veces parecen arrastrados por fuerzas que no pueden ni comprender ni gobernar. Los «grandes cambios» caen fuera de su control, pero no por eso dejan de influir en su conducta y en sus puntos de vista. La estructura misma de la sociedad moderna los limita a proyectos que no son suyos, sino que les son impuestos por todos lados, y dichos cambios presionan a los hombres y las mujeres de la sociedad de masas, quienes, en consecuencia, creen que no tienen objeto alguno en una época en que carecen de poder. (Pág. 19)

Es en el ámbito del poder donde se determina el rumbo que ha de seguir la sociedad en su conjunto, afectando en mayor o menor medida,

para bien o para mal, su desarrollo, su calidad de vida, su bienestar. Un asunto de tal importancia no debería ser ignorado por una ciencia que busca encontrar la mejor forma de organizar políticamente a la ciudadanía. Así pues, el fenómeno del poder —con sus excesos, sus equilibrios, sus minorías que lo ejercen y sus mayorías que lo padecen— debe ser abordado siempre con el interés propio de una sociedad que trata de entender la situación en que se encuentra y busca tomar el control de su vida, pues resulta

innegable que [...] la concentración del poder en las élites bloquea de manera decisiva la participación de la mayor parte de los ciudadanos en la toma de decisiones que se lleva a cabo en nuestras sociedades. (Zapata, 2013, pág. 13)

MARCO TEÓRICO

A lo largo de la historia del pensamiento político, es posible encontrar diversos estudios sobre el fenómeno del poder, así como diferentes ideas y conceptos que buscan no sólo entenderlo, sino encauzarlo. También podemos encontrar un importante número de análisis que intentan explicar la esencia y la conformación de las élites sociopolíticas, y, sobre todo, la forma en que éstas se desenvuelven. Sin embargo, aún no es posible encontrar estudios que expliquen la actuación de esas minorías desde la lógica propuesta por Michel Foucault, un conjunto de ideas para entender cómo se ejerce el poder y cuáles son las consecuencias de tales prácticas.

A partir de ideas clave como *relaciones de poder*, *naturaleza extrajudicial del poder*, *capacidad productiva del poder*, *normalización*, *transformación*, etc., Foucault interpreta el poder, tal y como se manifiesta en la realidad social en que vivimos. Y advierte que sus manifestaciones no sólo ocurren en el ámbito *macrofísico*, esto es, el ámbito conformado por

el Estado y sus instituciones, sino a través de la *microfísica* del poder, la condición que en cada uno de los miembros de la sociedad hace posible la existencia del poder. De esta forma, las ideas de Michel Foucault, desarrolladas en nuestro primer capítulo, nos permitirán interpretar el poder *en acción*, tal como ocurre en nuestra sociedad, sin restringir su existencia al ámbito *jurídico* del Estado y sus instituciones. Todo esto nos dará la posibilidad de comprender muchas prácticas de poder político que nacen más allá de los márgenes del Estado y determinan la forma y el actuar de sus instituciones.

Así, nuestra investigación nos exige encontrar los aspectos que caracterizan la formación y composición de las élites estadounidenses y mexicanas para interpretarlas a la luz del pensamiento de Foucault y determinar la dinámica a la cual responden. Para ello, será necesario retomar la noción de «élite», cuyo sentido será desarrollado lo largo de nuestro *marco histórico*.

Posteriormente, nos apoyaremos en las observaciones de Charles Wright Mills con el fin de alcanzar, en nuestro segundo capítulo, una visión general del comportamiento de las élites representativas de los Estados Unidos. Allí veremos cómo las manifestaciones del poder de las minorías políticas, los grupos empresariales y las camarillas militares encuentran una suerte de equilibrio, de armonía entre sí. Esto se debe, en gran medida, al hecho de que los integrantes de esas élites cohabitan dentro de los tres ámbitos de poder referidos, pasan de uno a otro, entran y salen de ellos sin poner en riesgo los intereses de cada uno, de tal manera que las tres minorías poseen la misma capacidad para desplegar su poder, a veces limitándose de modo recíproco, a veces impulsándose entre sí.

A partir de la Segunda Guerra Mundial la administración interna de los Estados Unidos habría de experimentar una fuerte reorganización, como resultado del nuevo liderazgo internacional que el país debía afrontar. Tal situación histórica abrió la puerta a los principales grupos minoritarios para reconstruir la élite de poder, una minoría

selecta, una élite de élites que se alza como el principal sujeto de poder al interior de la sociedad estadounidense. Todo esto nos permitirá, asimismo, comprender la flexibilidad de la red de poderes que enmarca la política de aquel país.

Por último, para observar la actuación de las élites mexicanas, a partir del tercer capítulo, tendremos en cuenta las descripciones de varios especialistas de los ámbitos político, empresarial y militar de nuestro país. Al final, podremos ver cómo, a diferencia de lo que ocurrió en los Estados Unidos, la actuación de los grupos empresariales y militares mexicanos estuvo condicionada por la influencia de las minorías políticas, especialmente de la llamada «élite presidencial», razón por la cual la red de poderes en México resultaba más rígida. Hasta el momento de la transición electoral del año 2000, los pocos cambios experimentados en la estructura de poder de nuestro país dependieron de la aprobación de los cuerpos políticos que detentaban el poder.

Si bien el siglo XX mexicano no fue liderado por una dictadura (menos aún, por una dictadura de carácter militar), el Partido Revolucionario Institucional estuvo a la cabeza de la administración del país durante setenta años, produjo a la «élite presidencial» y mantuvo el monopolio sobre prácticamente todos los instrumentos para el ejercicio del poder. El pensamiento de Foucault nos permitirá entender cómo este flujo de poder se ejerce a través de procesos como la producción, la normalización o la transformación, prácticas de poder mediante las cuales la élite presidencial «construyó» a las generaciones siguientes, las cuales ocuparían los puestos de mando dentro del Estado y perpetuarían el dominio de la élite sobre las decisiones nacionales.

Así, podemos adelantar que durante el siglo pasado la característica principal del poder en los Estados Unidos radicó en la existencia de una amplia variedad de contrapesos entre sus distintas élites, multiplicidad de contrapesos ocasionada, en lo fundamental, por la necesaria convivencia de tales minorías; este «balance de poder» resultó, pues,

una tendencia inevitable. Por el contrario, en el México del siglo XX la llamada «élite presidencial» fue la que determinó la dinámica de los ejercicios de poder, en buena medida gracias a la casi absoluta ausencia de contrapesos; tal minoría gozó de una capacidad prácticamente hegemónica para condicionar la actuación de sus «rivales».

MARCO HISTÓRICO

a) *La noción de élite*

La palabra *élite* cuenta con una historia relativamente reciente:

[C]omenzó a usarse corrientemente en Francia en el siglo XVI para indicar las mercancías más selectas. *Marchandises d'élite* eran los productos más estimados que se vendían en los comercios. Pero en el curso de los siglos siguientes, el término fue refiriéndose cada vez más a personas y no a mercancías, hasta llegar al significado actual de grupo o categoría, de minoría dentro de la sociedad, que se reconoce socialmente como superior en algún aspecto y que puede dominar o controlar algunos o todos los sectores de la sociedad. (Demarchi y Ellena, 1986, tomo 2, s. v. «Élite», págs. 596-597)

Sin embargo, la idea de *élite* aplicada a la esfera política y entendida, por tanto, como una minoría gobernante, es aún más antigua. El propio Platón «especulaba en su *República* sobre la creación de una clase de filósofos que pudiese regir el Estado» (Demarchi y Ellena, 1986, tomo 2, s. v. «Élite», pág. 597).

En el pensamiento político moderno, «la teoría de las élites nació como instrumento de praxis política antisocialista; históricamente, fue la respuesta de la vieja burguesía conservadora a la amenaza

marxista» (Demarchi y Ellena, 1986, tomo 2, s. v. «Élite», pág. 598). En este sentido, ya el propio Gaetano Mosca pensaba que la mejor forma de organización política del Estado sólo podría alcanzarse en la medida en que los métodos de estudio del realismo político superasen la influencia del socialismo y sus inclinaciones metafísicas y optimistas sobre la sociedad de aquella época (Demarchi y Ellena, 1986, tomo 2, s. v. «Élite», pág. 598).

En la actualidad, algunos de los principales teóricos han explicado la existencia de las élites como el resultado o la consecuencia de una forma específica de organización política de las sociedades, que se basa en un sistema de gobierno oligárquico; en otras palabras, la élite es considerada una *selecta minoría gobernante*. A través de esta interpretación, relacionada con la del ejercicio del poder, ha sido posible hablar, a su vez, «de una distinción neta entre gobernantes y gobernados, entre una minoría que detenta y ejerce el poder y una mayoría que no participa del mismo» (Demarchi y Ellena, 1986, tomo 2, s. v. «Élite», pág. 597).

b) *La interpretación de las élites en Pareto, Mosca y Michels*

En su *Tratado de sociología general*, Wilfrido Pareto observó que las sociedades están caracterizadas por una doble división. En primer lugar, los miembros de la sociedad pueden agruparse en dos estratos claramente distintos: uno *inferior*, conformado por la clase *no elegida*, y otro *superior*, integrado por la clase *elegida*. En segundo lugar, Pareto considera que la clase elegida se divide, a su vez, en un grupo *dirigente*, por una parte, y en otro *no dirigente*, por la otra. Como puede observarse, esta división de las sociedades en un estrato superior y otro inferior responde al criterio de *dirigencia*, de participación en las decisiones de *gobierno* o, en última instancia, de *elección* para gobernar (Demarchi y Ellena, 1986, tomo 2, s. v. «Élite», pág. 597).

Asimismo, Gaetano Mosca, en su obra *La clase política*, señaló que

[e]ntre las tendencias y los hechos constantes que se encuentran en todos los organismos políticos, aparece una cuya evidencia se le impone fácilmente a todo observador: en todas las sociedades, empezando por las más medianamente desarrolladas, que apenas han llegado a los preámbulos de la civilización, hasta las más cultas y fuertes, existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. La primera, que es siempre la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él. En tanto, la segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera de una manera más o menos legal, o bien de un modo menos arbitrario o violento, y a ella le suministra, cuando menos aparentemente, los medios materiales de subsistencia y los indispensables para la vitalidad del organismo político. (Mosca, 1984, pág. 106)

En esta definición clásica, el criterio de Mosca para entender la presencia de las élites en la sociedad resulta muy parecido al de Pareto: la existencia de un grupo con mayor (y mejor) capacidad de gobernar, frente a otro grupo, más numeroso, pero menos capacitado para el gobierno.

La explicación de las élites en el pensamiento de Robert Michels responde, en cambio, a otra razón. Si bien coincide con Pareto y Mosca al señalar la existencia de un grupo selecto y minoritario, la conformación de esta minoría tendría que ver con una mayor capacidad de *organización*. Es precisamente esta capacidad organizativa el núcleo de su *ley de hierro de la oligarquía*: en el carácter *organizado* de la minoría radica su fuerza para imponerse sobre el resto de la sociedad. Al decir de Franco Demarchi y Aldo Ellena (1986), «Michels [...] trata de definir la élite en el ámbito más restringido y limitado de la organización», y por ello, «el ejemplo que [...] tiene presente es el de los partidos políticos,

en los que las exigencias de la organización contribuyen a la formación de una oligarquía» (pág. 597).

Como se puede apreciar, estos tres pensadores conciben la existencia de las élites con base en un criterio «numérico»: la élite es siempre una minoría, y su forma de identificarla es por contraste con el resto de la población, que es multitudinaria. Pero el estudio de Michels permitió comprender la estrecha relación que existe entre la condición minoritaria de las élites y su capacidad organizativa, de tal forma que podría afirmarse que gracias a su organización, al hecho de perseguir una tendencia única, el liderazgo y la influencia de las minorías organizadas termina por imponerse de modo prácticamente irreversible a los intereses de la mayoría (Demarchi y Ellena, 1986, tomo 2, s. v. «Élite», pág. 598).

Finalmente, frente a estas concepciones de la *élite*, existe otra en la cual se destaca el carácter «cohesionado» de los grupos minoritarios, además del número de sus integrantes.

c) Charles W. Mills y la *élite de poder estadounidense*

En su estudio sobre las élites, el sociólogo estadounidense Charles Wright Mills descubre la existencia de una *élite de poder* conformada por un selecto grupo de hombres provenientes de las minorías políticas, empresariales y militares de los Estados Unidos. El autor piensa que las formas y los alcances del poder en la sociedad de aquel país provienen de la organización y la actuación de dicha élite y no de las acciones concretas de cada grupo minoritario en particular. Para Mills, la capacidad de cohesión presente en las élites se debe al carácter *unívoco* de los objetivos de sus integrantes, con lo cual la homogeneidad de tales fines hace posible la unidad de sus relaciones mutuas. Ahora bien, Mills (2013) concibe a la élite, en términos generales, como el conjunto «de los hombres que ocupan los puestos de mando»

(pág. 341), y entre los factores que le brindan cohesión encuentra los siguientes, según la lectura de Demarchi y Ellena (1986):

- 1) sus miembros provienen de un estrato social común;
- 2) debido a lo anterior, existe una homogeneidad entre sus intereses (habilidades prácticas), actitudes y valores;
- 3) mantienen un mismo conjunto de relaciones familiares e interpersonales («contactos»);
- 4) al interior de la élite, es posible el «intercambio» de sus miembros sin poner en riesgo la estabilidad del proyecto común;
- 5) este mismo intercambio de «personal» es posible no sólo al interior de una élite determinada, sino entre diversas élites, y puede ocurrir a través de los distintos niveles (sobre todo, en la cima) de cualquier institución, ya sea de naturaleza política, económica o militar. (Pág. 598)

De esta forma, al carácter *numérico* o *cuantitativo* de las primeras interpretaciones sobre las élites debe añadirse un par de cualidades nuevas: por un lado, el aspecto «organizativo» propuesto por Michels, y, por otro lado, el rasgo «cohesionador» observado por Mills. En todo caso, las teorías sobre la élite nos muestran que las sociedades se encuentran divididas entre quienes forman parte del ejercicio del poder (la élite gobernante) y quienes son gobernados (la *no-élite*). La influencia que la *no-élite* puede provocar en la toma de decisiones de la minoría gobernante constituye otro tema ampliamente debatido. Mientras algunos creen que la élite está abierta a la influencia de la población general —una influencia mínima, pero posible—, otros consideran que constituye un grupo cerrado en sí mismo y, por ende, inaccesible a la participación de agentes externos.

d) *Las élites en México*

El estudio de las élites en nuestro país posee un rasgo particular que condiciona nuestra comprensión sobre sus ejercicios de poder. En comparación con el caso estadounidense, el análisis de las élites mexicanas se complica por la dificultad de recoger datos sobre su conformación, sus alcances, sus relaciones internas y externas, etc. Esto desemboca, además, en la conocida «complicación empírica» del estudio de las élites, pues, en la actualidad, éstas suelen «tomar decisiones de manera informal y extraoficial, restringiendo el acceso a los observadores externos» (Camp, 2008, pág. 23).

El especialista Roderic Ai Camp se pregunta si realmente existe una élite de poder en nuestro país, y condiciona su respuesta de la siguiente manera. Afirma que

[s]i consideramos la estructura de poder como una red de organizaciones y papeles responsables de mantener la estructura general de la sociedad y de dar forma a las nuevas políticas dentro de una sociedad, y a la élite como un grupo reducido de personas que son actores individuales dentro de esa estructura de poder, las cuales también comparten acceso directo e informal a otros actores de la élite en su ámbito de influencia, entonces es posible identificar claramente una élite del poder en México, (Camp, 2008, pág. 23)

pero advierte que

[s]i consideramos que la estructura de poder es una red de personas que ocupan posiciones traslapadas o tienen papeles de influencia directa en dos o más sectores de la sociedad [...] entonces resulta muy claro que en México *no* hay una élite del poder. (Camp, 2008, pág. 23 [Énfasis nuestro])

Más allá de estas observaciones, el autor no ofrece alguna otra indicación que nos permitiera comprender esta distinción de criterios para determinar la existencia de élites en nuestro país.

Sin embargo, otro autor, Francisco Suárez Farías, afirma que «[u]na de las principales características de las élites es su lugar estratégico en posiciones de toma de decisión», y concluye: «Las élites son grupos de personas con poder para afectar individual, regular y eficientemente las políticas de las organizaciones» (1991, pág. 42). Cabe señalar que en esta definición «el poder es simplemente visualizado como la habilidad de alterar la conducta de otras personas» y que, ante las objeciones que enfatizan la incapacidad de aprehender o cuantificar esa «clase» de poder, el propio autor, apoyándose en las observaciones de Steven Lukes, responde:

Aunque el poder no se puede observar directamente o medirse cuidadosamente, se asume —sujeto a prueba en contrario— que está concentrado en las posiciones superiores de las organizaciones y la sociedad. (Suárez, 1991, pág. 42)

A partir de la revisión de todos estos datos, debemos establecer un criterio mínimo que, dentro de los límites de la presente investigación, nos permita reconocer la presencia de una élite y nos brinde la posibilidad de describir sus prácticas de poder. Ese criterio mínimo es el que entiende a la élite como un grupo caracterizado por dos rasgos. Por una parte, el aspecto *cuantitativo*, que hace de la élite un grupo *minoritario*; por la otra, el carácter *cualitativo*, que hace de la élite una minoría *organizada* y, asimismo, *cohesionada*. De esta forma, a lo largo de este trabajo asumiremos la idea de que

una élite es una minoría selecta [Pareto, Mosca], organizada [Michels] y cohesionada [Mills], minoría que, al detentar los puestos de mando y poseer la capacidad de influir en los procesos de

toma de decisiones, resulta uno de los principales actores de poder en el escenario político.

Todos estos aspectos nos permiten establecer una clara distinción entre la élite y el resto de la población o *no-élite*. Y gracias también a ellos, los ejercicios de poder de las élites poseen características discernibles, y serán esos rasgos distintivos los que abordaremos durante nuestra investigación.

Finalmente, para comprender el fenómeno del poder nos apoyaremos en las observaciones de Michel Foucault, las cuales representan un intento por superar las tesis clásicas y alcanzar una renovada interpretación de la naturaleza del poder. Esto implica, desde luego, abandonar la perspectiva que condujo a los clásicos a localizar el epicentro del poder en el conjunto formado por el Estado y sus instituciones. El siglo XX descubriría, en cambio, un poder cuyo despliegue desbordaría los límites de las instituciones jurídicas tradicionales y pondría en crisis la existencia misma de los Estados. Las reflexiones de Foucault apuntan hacia esa dirección y advierten en las prácticas de poder, nuevas características, como su capacidad para *producir* actores, y para determinar a las instituciones estatales desde el ámbito *extrajurídico*.

HIPÓTESIS

La hipótesis de esta investigación sostiene que

La dinámica de las élites estadounidenses y mexicanas hacia finales del siglo XX puede interpretarse a partir de la lógica del poder propuesta por Michel Foucault, lo cual constituye una alternativa viable a los estudios tradicionales sobre las élites.

OBJETIVOS

El objetivo *general* que persigue nuestro trabajo consiste en

interpretar la actuación de las élites en el siglo XX a partir de las ideas en torno al poder propuestas por Michel Foucault.

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá, a su vez, alcanzar los siguientes objetivos *particulares*:

- *Comprender la actuación de las élites mexicanas y estadounidenses a lo largo del siglo XX, así como sus posibles interacciones y sus influencias recíprocas;*
- *analizar los ejercicios de poder de las élites de una forma distinta a la elaborada por los estudios clásicos; y*
- *presentar la lógica del poder propuesta por Michel Foucault como una opción viable para entender el comportamiento de las élites en nuestro tiempo.*

CAPÍTULO 1

LA NOCIÓN DE 'PODER' EN MICHEL FOUCAULT

1.1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del siglo XIX, muchos intelectuales provenientes de diversas disciplinas tropezaron con un problema que quisieron explicar, resolver o justificar mediante múltiples discursos: la miseria, la explotación económica de una clase por otra, la generación de riqueza a costa de la miseria de los trabajadores. Sin embargo, Foucault cree que el verdadero problema que subyace a aquellas dificultades socioeconómicas radica en los regímenes políticos —como el fascismo y el estalinismo—, caracterizados por un *exceso de poder*: «Los campos de concentración [...] fueron para el siglo XX lo que las famosas ciudades obreras, los famosos tugurios obreros, la famosa mortalidad obrera, eran para los contemporáneos de Marx» (Foucault, 2012, pág. 69).

El siglo XIX heredó al XX un conjunto de instrumentos de análisis con los cuales se podría estudiar el poder, siempre y cuando se le entendiera como un fenómeno socioeconómico, pues «se nos había prometido que, el día que se resolvieran los problemas económicos, quedarían resueltos todos los efectos complementarios de un poder excesivo» (Foucault, 2012, pág. 69). No obstante, la historia resultó distinta: el siglo XX había pasado de los regímenes capitalistas o fascistas a los socialistas o estalinistas, y en ellos «el exceso de poder del aparato de Estado, de la burocracia, [...] de los individuos unos sobre

otros, constituía algo absolutamente repelente, tan repelente como la miseria del siglo XIX» (Foucault, 2012, pág. 69).

Antes de 1955 podría decirse que los excesos del fascismo y el estalinismo estaban justificados por las crisis económicas entre 1929 y 1940. Pero a mediados de los cincuenta, Michel Foucault descubre el problema del poder excesivo en toda su desnudez: la invasión soviética contra Hungría —muerto ya Stalin— y la guerra con que el capitalismo francés prescindió de su colonia argelina. En ambos casos el poder surgía sin necesidad de justificaciones económicas. Así, Foucault se encuentra con las dos caras del problema: a) el poder se presenta como un fenómeno que *debe* ser estudiado, pero b) no existen instrumentos para analizarlo en sí mismo (Foucault, 2012, pág. 70).

Esta experiencia enmarca el encuentro de Foucault con el tema central de su investigación: las *relaciones de poder*. El propio autor señala:

Durante mucho tiempo creí que [...] corría detrás de una suerte de análisis de los saberes y los conocimientos tal como estos pueden existir en una sociedad como la nuestra: ¿qué se sabe de la locura, qué se sabe de la enfermedad, qué se sabe del mundo, de la vida? Sin embargo, ahora no creo que mi problema fuera ese. El verdadero problema que me movía era uno que, por otra parte, es hoy el problema de todo el mundo, el del poder. (Foucault, 2012, pág. 69)

Para Foucault, el análisis político *tradicional* ha fracasado en su búsqueda por explicar los problemas políticos de las sociedades actuales. Ante esta crisis, nuestro autor propone «resituar los análisis políticos [...] no tanto en el marco de una teoría coherente como contra el telón de fondo de una historia real» (Foucault, 2012, pág. 40). Ésa es la importancia que el *empirismo de las historias* tiene en su obra.

Al valerse de los hechos concretos a lo largo de la historia, Foucault renuncia a explicar el poder por medio de los conceptos y las

categorías que habían utilizado los analistas clásicos, y prefiere captarlo a través de situaciones que muestren su comportamiento. Para ello, el contexto práctico, real, empírico es importante, pues «las individualidades están siempre constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, de imaginación, de producción de discursos, que inciden en los individuos, pero siempre de forma histórica» (Savater, 2010, pág. 376).

¿Por qué resultó tan importante para el pensamiento de Foucault la existencia de hechos o casos concretos donde observar el fenómeno del poder? Alrededor de 1955, y luego de estudiar filosofía, Foucault trabajó en un hospital psiquiátrico, y de tal experiencia, concluyó:

Las relaciones entre médicos y enfermos, las formas de institución, al menos en los hospitales psiquiátricos, me asombraron por completo, me sorprendieron, incluso hasta la angustia. En el fondo, la pregunta que me hice no fue tanto saber qué pasaba por la cabeza de los enfermos sino qué pasaba entre éstos y los médicos. ¿Qué pasa entre esa gente, a través de las paredes, los reglamentos, los hábitos, las restricciones, las coerciones, también las violencias que podemos encontrar en los hospitales psiquiátricos? [...] Esa relación tan dramática, tan tensa. Aun cuando un discurso científico le dé forma, la justifique, no deja de ser una relación muy extraña... de lucha, de enfrentamiento, de agresividad. (Foucault, 2012, pág. 30)

Escribe, entonces, la historia de los locos, es decir, cómo la sociedad moderna había creado una forma de diferenciación entre sus miembros. Con el paso del tiempo, Foucault descubre otras formas de diferenciación: desde las divisiones del trabajo y de las clases sociales, hasta las de los enfermos/sanos, los locos/cuerdos, los normales/anormales...

Por otra parte, la fase *historicista* de Foucault tiene su origen en una reflexión de carácter político: las formas de ejercer el poder en nuestra sociedad, es decir, el «[p]oder de la razón sobre la locura; [...] de los médicos sobre los enfermos; [...] del aparato judicial sobre los delincuentes, poder sobre la sexualidad de los individuos» (Foucault, 2012, pág. 40).

En el ámbito del poder, busca explicar, a través de la *genealogía*, de qué manera el hombre se ha constituido en sujeto de acción «que influye y que controla a los demás, cómo se va desarrollando esa figura del sujeto de la acción sobre los otros» (Foucault, 2012, pág. 40), hasta entender las formas en que se manifiesta el poder hoy en día.

1.2. LA CONSTITUCIÓN DE LOS EJERCICIOS DE PODER

Caracterizar los elementos que conforman la idea de poder en Foucault resulta complicado, pues sus distintos momentos se presentan no de manera aislada. Un hecho como la *medicación*, por ejemplo, ocurre en el contexto de la *reclusión* o de la *transformación*; la *reclusión*, a su vez, permite formas de *vigilancia* y *disciplina* más eficientes. Pero a pesar de su complejidad, esta caracterización nos permite comprender mejor la naturaleza sistemática del poder: la «eficiencia» político-económica de la *vigilancia*, la cual repercute en la eficacia transformadora del castigo y condiciona la «calidad» político-económica de la *reclusión* y la *transformación*. Todos los elementos del poder se posibilitan y condicionan recíprocamente: el poder tiene una conformación sistemática. De ahí que el poder constituya, al decir de Foucault, una *red* cuyos diversos hilos/elementos, todos ellos de igual importancia, se entretejen.

1.2.1. *El castigo*

En la Europa de los siglos XVIII y XIX la ley estaba encarnada en la persona misma del rey —en su figura y en su cuerpo— de tal modo que transgredir la ley significaba lesionar el poder y la figura del monarca, y por esa razón, el castigo contra los infractores era aplicado de forma tan solemne como severa. Además, el castigo superaba en fuerza al delito, con la finalidad de grabarlo en la mente de los espectadores. Ése fue el origen del suplicio. Con ello se buscaba provocar, al menos, dos efectos: impedir que los crímenes se repitieran y consolidar el poder superior de la autoridad. El castigo era interpretado como un acto directo del rey, y por ese motivo existía la necesidad de que todos los castigos resultaran «ejemplares».

Sin embargo, surgió un problema: el rey no podía *multiplicarse* para castigar todos los delitos que se cometían, por lo que la *ejemplaridad* del castigo (su severidad y su efecto) podía perderse ante la posibilidad de evadirlo: la cantidad de delitos que se cometían hacía posible que muchos de ellos pasaran inadvertidos. Entonces, las monarquías debieron diseñar un sistema capaz de «racionar» los castigos, sin dejar pasar la oportunidad de aplicar sanciones, pues esto menguaba el poder y la imagen del rey. Así surgió uno de los productos más importantes de lo que Foucault llama «tecnología política»: la *vigilancia* (Foucault, 2012, pág. 57).

El castigo era aplicado contra el cuerpo, de tal forma que, durante la época de las monarquías, el cuerpo del rey funcionaba como principio organizador del poder; pero dejó de serlo hacia el siglo XIX, con la desaparición de la mayor parte de las monarquías. El castigo como principio organizador debió trasladarse al *cuerpo social*. Con ello, los métodos del castigo tuvieron que transformarse: las tecnologías para restaurar la autoridad del monarca fueron sustituidas por la *asepsia social*. Ésta consistió en el estudio de la criminalidad, la expulsión de

los *degenerados*, la transformación de los *anormales*. Así, las formas médicas sustituyeron al suplicio (Foucault, 1979, pág. 103).

Donde no hay delito, no hay necesidad de castigar. La eficiencia del poder estribó en *prevenir* el delito, más que en *castigarlo*. Y si lo que se castigaba era la *anormalidad*, había que *producir* a los individuos mediante un proceso de *normalización*. De esa manera, el poder busca controlar nuestros comportamientos e ideas —desde el sistema educativo hasta el aparato laboral— con el fin de no tener que echar mano del terror.

Esta *normalización* puede suministrarse mejor con controles mentales y espirituales que con castigos físicos. El control espiritual produce personas normales, y garantiza el respeto irrestricto al orden establecido. En última instancia, el cultivo de ciudadanos *normales* prolonga —o, al menos, eso es lo que espera la clase dominante— la «normalidad» de la *estructura de poder*, y aleja la posibilidad de revertir el orden. Esta es la importancia del castigo como fundamento de la transformación social.

Hemos visto que en las épocas monárquicas, el castigo es un ejercicio espectacular; el suplicio representaba un circo donde se atormentaba al delincuente a través de la carne. Este acto consistía, además, en una exposición (gráfica) del poder superior de la autoridad. Pero aquella época demandaba una dosis de «civilidad» y decencia, a causa del nuevo espíritu de la Ilustración: la época de los remordimientos llevó a la búsqueda de cambios y correcciones. Diversas sociedades se transformaron y modificaron sus discursos; el sistema penal también buscó transformarse, redimirse, y corrigió su camino al «corregir» a los delincuentes. Ya no se trataba de descharlos, de sustraerlos de la sociedad y destruirlos; era el tiempo de curarlos, de enderezar sus vidas, de transformarlos. El castigo se *civilizó* (Díaz, 2010, págs. 99-100).

Hoy en día, el poder se ejerce de modo más sutil y, en apariencia, más eficaz: por medio de una estrategia de control y transformación

social, se pretende eliminar la necesidad del castigo clausurando la posibilidad de cometer una infracción.

1.2.2. *La reclusión*

A partir del siglo XIX, las relaciones de poder se organizaron con el fin de alcanzar una nueva meta: la *transformación* de los miembros de la sociedad. Así, el poder comenzó por excluir a los individuos, confinándolos en diversas instituciones, como los manicomios y los hospitales, las prisiones y las fábricas, las escuelas y toda clase de internados... En el caso específico de los presidios, el sistema penal moderno encontró en su población una minoría aislada que podía utilizarse para provocar miedo en el resto de la población.

Así, las clases dominantes produjeron una estrato social minoritario consciente de su marginalidad y capaz de actuar contra la población mayoritaria; es decir, dentro de la organización política de la sociedad, las minorías desempeñaban una función racionalizadora: algunas veces, como fuerza contra la población general (crimen, grupos de choque, etc.), y en otras, como advertencia del poder de la clase dominante, pues el castigo funcionaría como régimen disciplinario para las mayorías (Foucault, 2012, págs. 56-58).

A través de la reclusión, el *anormal* (el loco, el ladrón, el enfermo) adquiere una categoría *permanente* con la cual la sociedad puede definirlo. Foucault piensa que mientras la sociedad siga viendo en categorías como «normal/anormal» una forma adecuada para organizar a sus integrantes, la reclusión no dejará de existir (Foucault, 2012, pág. 60).

1.2.3. *La vigilancia*

A finales del siglo XVIII, la justicia penal vio como indigno el teatro del suplicio y el castigo levantado a su alrededor. El suplicio se interpretó, entonces, como un vulgar despliegue de poder, y el castigo, como una tarea engorrosa. Foucault descubre que a partir de entonces se da un cambio paulatino en los fines y las técnicas del ejercicio penal. En cuanto a los fines, la idea imperante de *destruir* al delincuente abre paso, como hemos dicho, al propósito de *transformarlo*. En cuanto a las técnicas, la violencia sobre el cuerpo de los condenados da paso a las estrategias de vigilancia. El castigo seguirá aplicándose contra los delincuentes, pero no como una festividad en la plaza pública, sino en la intimidad de una celda. La sociedad deberá seguir viendo en el castigo una pedagogía, pero no por la violencia del castigo, sino por la *certeza* de ser castigados.

La nueva forma del castigo consiste en la sustitución del estatus jurídico del anormal. Se le recluye para vigilarlo y controlar sus actividades; se aprovecha su encierro y sus privaciones para someterlo a la disciplina y al trabajo; se regula y se controla su tiempo. La vigilancia constituye la etapa preparatoria para la transformación del anormal (Díaz, 2010, pág. 100).

A lo largo del siglo XVIII la vigilancia constituyó una forma de *racionalización* del poder a través de técnicas políticas que organizaban los múltiples medios de dominación. Por medio de patrones jerárquicos que garantizaban su continuidad, la vigilancia imprimió disciplina a las sociedades y racionalizó sus comportamientos de modo eficiente.

Pero la naturaleza disciplinaria y vigilante del poder no es consecuencia tan sólo de una imposición por la voluntad de las clases dominantes, sino de la propia sociedad general que, en aras de mantener ciertas formas de organización, ha encontrado en la reclusión y la vigilancia métodos para la «corrección» de sus miembros más *inestables*. El poder, pues, ha tenido la capacidad de constituirse alrededor

de una necesidad social: la organización de sus integrantes a partir de métodos disciplinarios (Foucault, 2012, pág. 56).

1.2.4. *La transformación*

En las nuevas condiciones surgidas a partir de la *reforma* del castigo, la antigua transformación a que fue sometido el poder ya no será útil. También los instrumentos y los asistentes deben transformarse, pues el cambio de los fines exige un cambio de los medios. Así, el verdugo y el descuartizador de miembros cederán su lugar al vigilante/celador, al médico, al educador, al psiquiatra para normalizar a los reclusos. Los instrumentos de tortura —cuyo fin era maximizar el dolor infligido contra un cuerpo real— son apartados en favor de la horca y la guillotina, con la finalidad de cumplir una sentencia legal contra un cuerpo simbólicamente jurídico. Las leyes se refinan (Díaz, 2010, pág. 100).

A lo largo del siglo XIX la transformación de los anormales entra en una nueva dinámica: se *inmaterializa*. El objeto de la transformación no es solamente el cuerpo físico, presente y material, sino el alma. Los carnavales sangrientos contra la *materialidad* del cuerpo se vuelven inadecuados, en cierta medida. No puede renunciarse por completo al cuerpo, pues constituye la «puerta de acceso» al alma; pero, si la fuerza ya no persigue sólo al cuerpo y, en cambio, desea alcanzar el alma, debe abstraerse. La prisión, el manicomio, la escuela, la fábrica, el hospital... buscan atravesar el cuerpo para apuntar hacia el alma con el fin de reformar al individuo y producir un sujeto «normal».

La transformación de los anormales comienza en el ámbito *microfísico*, con el fin de que repercuta en el resto de la sociedad, en una travesía ascendente. Salvo en algunos casos excepcionales, la configuración del poder ha cambiado desde los días de la tortura hasta los nuestros. La organización vertical del poder que cae y se derrama

desde la cima, es sustituida por una configuración multidireccional cuyo objeto es el ámbito *macrofísico* (Díaz, 2010, págs. 100-101).

1.2.5. *El despliegue del poder en nuestros días*

Los ejercicios de poder adquieren formas tan complejas, que no resulta fácil advertir su funcionamiento. Uno de los aciertos de Foucault consiste en darse cuenta de que, dentro de las reglas de la clase dominante, el castigo puede ser no una solución, sino una *coartada*. Por ejemplo, el castigo penitenciario —que pretende readaptar a los delincuentes— podría funcionar, igualmente, como creador de una de una *minoría delictiva*. En la reclusión y el castigo podemos ver estrategias valiosas para la transformación de los individuos, pero también podríamos interpretarlo como generadores de *macrodelincuencia*, al transformar la *microdelincuencia* latente en todo integrante de la sociedad. Nadie había reparado en la «utilidad» de los criminales que el castigo puede producir, a conveniencia de las condiciones de poder imperantes, y en esto consiste el acierto de Foucault (2012, pág. 58).

Entendida como estrategia, la racionalización del poder ha generado nuevas formas de organización social. Si se piensa en la locura, por ejemplo, los diversos sectores de la sociedad (la población *normal*, la *enferma* y la *dominante*) encuentran en el manicomio un medio eficaz y rentable de *convivir* con el problema:

1) Por medio de la reclusión de los *anormales*, el poder resguarda a la población *normal* de la *amenaza* de los locos sueltos. (La resguarda en dos sentidos al menos: por una parte, de agresiones contra su integridad física, y por otra, de pervertir sus instituciones, las instituciones de la cordura/razón/normalidad.)

2) Por medio de la institución del manicomio, el poder ofrece a los enfermos la posibilidad de *transformarse* para su

reintegración en la sociedad normalizada.

3) Por medio de la institución psiquiátrica, el poder da al médico una función sancionadora con la cual imponer *su* disciplina dentro de una lógica social. (Foucault, 2012, pág. 61)

Occidente ha sabido depurar sus métodos de poder. Para Foucault, existe un creciente vínculo entre el grado de racionalización de la dominación conforme avanza la historia y el surgimiento de nuevas formas de organización social. Con el tiempo, los mecanismos de poder se vuelven más sutiles y eficientes: «Se advierte toda una serie de finalidades, técnicas, métodos: la disciplina reina en la escuela, el ejército, la fábrica» (Foucault, 2012, pág. 60).

1.3. FOUCAULT Y SU OPOSICIÓN A LOS CLÁSICOS

Las formas clásicas del análisis del poder creyeron haber encontrado en la noción de *pacto* la razón por la cual el poder entraba en periodos de acuerdo, en algunas ocasiones, o de inestabilidad, en otras. Para Foucault, en cambio, el estudio de las relaciones de poder le permite sacar nuevas conclusiones sobre ese fenómeno. A través de la observación en torno a distintos patrones disciplinarios (prácticas de carácter militar, escolar, laboral, penitenciario...) advierte que, en las relaciones de fuerza, el poder:

- 1) atraviesa los cuerpos de dominantes y dominados;
- 2) no se *posee*, sino que se *ejerce*; y
- 3) su fin fundamental es *producir*, no *reprimir*. (Foucault, 2012, pág. 102)

Para entender mejor aún la distancia entre Foucault y los clásicos, debemos valorar una serie de reservas que el autor opone a ciertos

postulados del estudio tradicional sobre el poder:

1) el *postulado de la propiedad*, porque niega que el poder sea propiedad de una clase, de algún grupo o de un sujeto en particular;

2) el *de la localización*, con el cual acepta que el poder es *local*, pero niega que sea *localizable*, sino *difuso*, pues no se le puede localizar en un lugar único;

3) el *postulado de la subordinación*, pues el autor pone en duda la idea de un poder subordinado a la infraestructura;

4) el *de la esencia o del atributo*, porque Foucault piensa que el poder no tiene esencia, pues su ser consiste en *realizarse* y, por ello, no puede atribuírsele a nadie ni ser atributo de alguien;

5) el *postulado de la modalidad*, mediante el cual el autor duda de que la finalidad última del poder sea la *represión*, y prefiere verlo como una fuerza *productora*; y

6) el *de la legalidad*, pues Foucault niega que el poder se ejerza sólo a través de las leyes, y plantea la existencia de los *ilegalismos*, los *paralegalismos*, aquello que podríamos denominar el «carácter *extrajurídico* del poder». (Díaz, 2010, págs. 104-106)

A partir de estos postulados, Foucault está en condiciones de emprender un estudio *positivo* del poder, cuyo resultado será el hallazgo de la propiedad *productiva* del poder. A continuación, vamos a detenernos en algunas de estas reacciones del pensamiento foucaultiano contrarias a los estudios clásicos en torno al poder.

1.3.1. *Contra el economicismo*

La tradición jurídica veía en el poder un bien que, por esa razón, podía transferirse o alienarse mediante un acto jurídico. Esta idea

representó la versión fundadora del Estado moderno: los ciudadanos ceden su poder individual para constituir una soberanía estatal.

Posteriormente, la tradición marxista vio en el poder una fuerza capaz de mantener el orden de las relaciones de producción y la apropiación de la productividad laboral. En este sentido, el poder representaba una *funcionalidad* de carácter económico.

En ambos casos, el poder se entendía desde el economicismo: ya fuese como una cuasi-mercancía objeto de intercambios o como un principio que actualizaba las formas de organización económica.

Foucault, por su parte, reacciona contra estas tradiciones en torno al poder. Se rehúsa a toda clase de subordinación, por lo que busca deshacerse de los métodos de estudio de las tradiciones jurídicas, políticas y económicas. Niega el poder como *bien* o *mercancía* que puede ser objeto de intercambio, y, en cambio, afirma que el poder es primordialmente un *acto*, y que, por ello, no puede intercambiarse, sino que se *ejerce*. Finalmente, niega que el poder mantenga o reproduzca una determinada organización económica, sino que el poder es, ante todo, una *relación de fuerzas*: el ámbito del poder no es la economía, sino la guerra. Invierte, así, la afirmación de Clausewitz («la guerra es la política continuada por otros medios»), y dice: «[E]l poder es la guerra, la guerra continuada por otros medios» (Foucault, 1979, págs. 134-135).

De esta forma, el poder es entendido por Foucault como un conjunto de relaciones de fuerza, una *red* de todo tipo de luchas. El poder no está ausente en las relaciones de fuerza económicas, políticas o jurídicas, pero tampoco se reduce a ellas: el poder es un campo de batallas violentas y sutiles, perceptibles e ignoradas, macrofísicas y microfísicas, económicas y extraeconómicas, políticas y extrapolíticas, jurídicas y extrajurídicas (Foucault, 1979, pág. 158).

Tomemos como ejemplo lo que Foucault llama «inflación del poder». Antes de 1956, muchos analistas propusieron explicar el aumento del poder en las instituciones del Estado a partir de la idea de

burocracia, partiendo de la observación directa de la *configuración* estatal. Foucault, en cambio, busca esos incrementos de poder en todos los sectores de la sociedad: desde las manifestaciones de la vida cotidiana —como las relaciones familiares, matrimoniales, amistosas— hasta las elaboraciones últimas de la *tecnología social* —las relaciones entre locos y psiquiatras, entre enfermos y médicos, entre presos y autoridades—. El resultado fue que «la inflación de poder, en una sociedad como la nuestra, no tiene un origen único que podamos identificar como el Estado y su burocracia» (Foucault, 2012, pág. 78).

1.3.2. *Contra la posesión del poder*

Una de las más acentuadas características del pensamiento de Foucault radica en su idea de que el poder no es un objeto que se adquiere o una propiedad que se conquista: el poder no es una posesión. En ese sentido, podríamos pensar, por ejemplo, en la imagen de un hombre que lleva un cetro en la mano; ésta sería una imagen del poder que, en todo caso, podría ser válida, siguiendo a Foucault, sólo como *símbolo*, como metáfora de la realidad.

Ahora bien, por medio del estudio de los hechos concretos, puede observarse que, más que una apropiación por parte de ciertos individuos —aquéllos a quienes se considera los dominantes o poderosos—, el poder es una *estrategia*, una disposición —incluso anímica—, una táctica que tiene como fin utilizar y valerse de las fuerzas que conforman el diagrama de las relaciones de poder. El poder no es un privilegio que detenta una cierta clase social, sino el aprovechamiento que tal clase hace de las fuerzas entre las que se encuentra (Foucault, 2010, pág. 36).

Por eso, Foucault «prefiere estudiar las instituciones a partir de la manera en que en ellas se ejerce el poder y no el poder a partir de las instituciones. Éstas últimas se determinan por sus diagramas de

fuerza», porque las relaciones de poder sólo pueden conocerse a través de su *acción*, es decir, en cuanto se *ejercen* (Díaz, 2010, pág. 102).

1.3.3. *Contra la concepción negativa del poder*

Durante la etapa *arqueológica* de su pensamiento, Foucault denuncia la concepción *negativa* del poder, es decir, aquella idea del poder como represión de los individuos, del poder vinculado a una ley que sólo sabe decir *no*. Porque esta idea del poder represivo nos permitiría observar los resultados del fenómeno que llamamos poder, pero no el fenómeno mismo, es decir, no nos permite ver la manera en que *funciona* el poder.

Otra característica de la idea del poder como represión implica que el poder se entiende sólo dentro del área de *lo jurídico*, e ignora la otra característica fundamental del poder: que su función principal no es reprimir. Porque «si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera nunca otra cosa que decir que *no*, no se le obedecería» (Díaz, 2010, pág. 84. [Énfasis nuestro]). Foucault advertirá que la noción represiva del poder resulta poco adecuada para entender su carácter *productivo*.

Para Foucault, los autores clásicos han exagerado la naturaleza represiva del poder en detrimento de su función productiva. Hechos como la represión o la censura pueden ser contrarrestados en todo momento, por lo cual esa representación del poder nos muestra un aspecto frágil de él. Esto resulta, además, un tanto contradictorio, pues si algo caracteriza al poder es, precisamente, su fuerza: el poder es poderoso. Foucault advierte la fuerza del poder en su capacidad de producir efectos positivos cuando se ejerce. La producción de un saber sobre el cuerpo —la fisiología o la anatomía, por ejemplo— surgió del ejercicio del poder disciplinario y regulatorio sobre aquél. La represión explica los efectos del poder en *quien lo padece*, pero

deja fuera de la explicación los efectos del poder en *quien lo ejerce* (Foucault, 1979, págs. 106-107).

1.3.4. *El poder por encima de la violencia*

En una serie de conferencias en Stanford, decía Foucault:

Nuestra civilización ha desarrollado el sistema de saber más complejo, las estructuras de poder más sofisticadas: ¿qué ha hecho de nosotros esa forma de conocimiento, ese tipo de poder? ¿De qué manera esas experiencias fundamentales que son la locura, el sufrimiento, la muerte, el crimen, el deseo y la individualidad están ligadas, incluso aunque no tengamos conciencia de ello, al conocimiento y al poder? (Citado en Savater, 2010, pág. 377)

Entre las fuerzas que conforman un *diagrama* podemos encontrar dos formas diferentes:

- 1) la fuerza-violencia, que va dirigida a objetos, con el fin de destruirlos, modificar su naturaleza o sustituirlos por otros; y
- 2) la fuerza-poder, cuyo fin es otra fuerza, por lo cual su ser consiste en *relacionarse*.

En efecto, el sujeto del poder es *el poder*, y su objeto es *otro poder* dentro de la red de fuerzas. Por ello, el poder tiene la característica de la *multiplicidad*: mientras que el *saber* es una *forma* o un *juego de formas*—donde se entrelazan lo visible y lo enunciable—, el poder es un *juego de fuerzas* (Díaz, 2010, pág. 101).

Así, el poder se desarrolla (y puede encontrarse) a lo largo de un diagrama a través del tiempo y del espacio. Estos diagramas resultan

representativos de cada época y producen discursos en torno al orden de cada sociedad. Las sociedades antiguas se caracterizaron por someter a prueba su entorno y ejercieron ampliamente la investigación: he ahí su diagrama representativo. El diagrama característico de nuestra época es el *examen*, al cual se somete a las personas desde la oposición normal/anormal (Díaz, 2010, pág. 110).

1.3.5. *El poder como realización*

Foucault se dispuso a pensar nuestra época moderna «como el intento de construir una sociedad disciplinaria mediante tecnologías de control y constitución de identidades. El poder no apareció, entonces, como una fuerza de *represión*, sino también como posibilidad de *realización*» (Savater, 2010, págs. 376-377. [Énfasis nuestro]). Es decir, que el poder hace del hombre un *sujeto*.

Incluso el castigo —en tanto que constituye una forma de poder— demuestra producir sujetos; sin embargo, Foucault observa que «la prisión, lejos de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve más que para fabricar nuevos criminales o para hundirlos todavía más en la criminalidad» (Foucault, 1979, pág. 90). El castigo de la cárcel produce un sujeto delincuente:

Foucault dice que la civilización occidental empezó, a partir de cierto momento, a desplegar políticas de exclusión —la exclusión del loco, la del delincuente, la del enfermo— y a desarrollar instituciones para efectivizar esas políticas —el manicomio, el hospital, la cárcel—. Foucault insiste sobre la idea de que lo importante de estas instituciones y sus políticas no eran los individuos afectados, sino la justificación de las exclusiones, que constituyen a la sociedad como su otro: nosotros —los que no estamos encerrados en esas instituciones— somos, así, los cuerdos, los honestos,

los sanos; es decir, los normales. Se constituye así, perversamente, una identidad social.

Foucault asegura que de esta manera se va desplegando un sistema de control social, y describe cómo se va haciendo más necesario y más represivo. Y cómo vamos todos a convertirnos de alguna manera en cómplices y en soportes de ese control social que se expresa privilegiadamente en esas instituciones [el manicomio, el hospital, la cárcel]... (Savater, 2010, págs. 378-379)

No está de más recordar que para Foucault el castigo respondía, en primer lugar, a la venganza, y sólo después funcionaría como «método pedagógico» para aleccionar sobre *lo ejemplar* (Díaz, 2010, pág. 86).

El paso del castigo a la vigilancia estuvo marcado por un *reajuste* de las relaciones de fuerza. Pero allí donde ciertas interpretaciones han visto una *humanización* de las penas —recordemos, por ejemplo, que los altos costos del *espectáculo* de la muerte se volvieron incosteables—, Foucault encuentra la conveniencia, para los empresarios, de cerrar las fábricas donde los obreros se aglomeraban, junto con las mercancías, cuyos cuidados y vigilancia alcanzaron costos demasiado altos (Díaz, 2010, pág. 109).

Las instituciones sociales —como las prisiones, las escuelas, las fabricas, los hospitales...— constituyen formas de organización, es decir, *imprimen* una determinada constitución a los sujetos que las ocupan, volviéndose estos últimos la *materia* de las relaciones de poder (Díaz, 2010, pág. 109). Nuestros actuales sistemas penales juzgan, y a través del juicio someten a los sujetos a un proceso de *normalización*, y junto con ella se ha incrementado el número de instituciones extrajurídicas (Díaz, 2010, págs. 109-110).

1.4. LA NATURALEZA *EXTRAJURÍDICA* DEL PODER

Según Foucault, tradicionalmente se pensaba que para estudiar el poder sólo era necesario comprender las formas jurídicas alrededor de las cuales se organizaba la sociedad: el Derecho y las leyes que producía, las cuales resultaban una nueva forma de ejercer el poder en la sociedad. Sin embargo, al lado del Derecho —es decir, de *lo jurídico*— encontramos lo *extrajurídico*: un conjunto de formas de poder mucho más complejas que el Derecho, al cual complementan y complican. Así, Foucault observa al margen de lo jurídico el surgimiento de una serie de poderes extrajurídicos «que pesan sobre los individuos y atraviesan el cuerpo social» (Foucault, 2012, págs. 40-41).

En nuestras sociedades, los mecanismos de dominación son muchos y de naturaleza distinta, y no se agotan en el aparato jurídico-legal. Lo jurídico —el Derecho, la norma, la legalidad, la jurisprudencia, la *judicialidad*, la ley— y lo extrajurídico constituyen dos distintos mecanismos de poder y dos diferentes formas de dominación. Asimismo, en todos los ámbitos de la sociedad, lo jurídico y lo extrajurídico conviven y se relaciona. Foucault llama *relaciones de poder* a la estructura que forman; es decir, entiende las relaciones de poder como la compleja convivencia e interacción de los poderes jurídicos y los extrajurídicos:

las relaciones de poder son las que los aparatos de Estado ejercen sobre los individuos, pero asimismo la que el padre de familia ejerce sobre su mujer y sus hijos, el poder ejercido por el médico, el poder ejercido sobre el notable, el poder que el dueño ejerce en su fábrica sobre sus obreros. (Foucault, 2012, pág. 42)

Por ejemplo, en franca oposición contra el soviétismo, que no pudo acabar con la noción de Estado, dice Foucault:

el poder no está localizado en el aparato de estado, y [...] nada cambiará en la sociedad si no se transforman los mecanismos de poder que funcionan fuera de los aparatos de Estado, por debajo de ellos, a su lado, de una manera mucho más minuciosa, cotidiana. (Foucault, 1979, pág. 108)

Por otro lado, nuestro autor propuso el pensamiento *médico* como «una manera de percibir las cosas que se organiza alrededor de la norma», es decir, buscó «deslindar lo que es *normal* de lo que es *anormal*, que no son del todo, justamente, lo *lícito* y lo *ilícito*» (Foucault, 2012, pág. 35. [Énfasis nuestro]). Esta última distinción, entre lo lícito y lo ilícito, es objeto de lo que él llama pensamiento *jurídico*, mientras que el pensamiento médico intenta discernir entre lo normal y lo anormal. Con ello, el pensamiento médico «busca asignarse medios de corrección que no son exactamente medios de castigo, sino medios de transformación del individuo, toda una tecnología del comportamiento del ser humano que está ligada a ese fin» (Foucault, 2012, págs. 35-36).

Lo extrajurídico, por su parte, es aquello que se encuentra fuera de la regulación legal, esto es, los mecanismos de poder y los procedimientos de dominación ajenos al Derecho. Porque los ejercicios del poder entre los miembros de la sociedad no se agotan en el Derecho, en lo jurídico, sino que a veces surgen —y otras veces continúan— en lo extrajurídico. Por ejemplo,

cuando un médico psiquiatra impone a un individuo una internación, un tratamiento, un estatus, cuando lo pone en un estatus que no es el de ciudadano con todas las de la ley, sale del derecho, aun cuando algunos de sus actos estén protegidos por él [...]. [L]o jurídico [...] sale de lo jurídico y entra en lo médico... (Foucault, 2012, pág. 41)

Lo médico es, por tanto, una forma de lo extrajurídico.

Foucault cree que desde la Edad Media hasta el siglo XVIII las sociedades occidentales habrían logrado constituirse en torno al «derecho, la ley, la legitimidad, la legalidad», es decir, habrían alcanzado el Estado de Derecho (2012, pág. 34). Pero en el transcurso del siglo XIX ocurrió «algo que abrió las puertas a la sociedad de la norma, la salud, la medicina, la normalización que es nuestro modo esencial de funcionamiento en la actualidad» (Foucault, 2012, pág. 35). Por ejemplo, en el caso específico de la locura, ésta

se comenzó a anexar a la medicina [...], a considerar que la locura era una forma de enfermedad [...]. Esta medicalización es en realidad un aspecto de un fenómeno más amplio que es la medicalización general de la existencia. (Foucault, 2012, pág. 34)

Organizada en torno a la *norma* —y no a la *ley*—, la medicalización

llega a crear una especie de jerarquía de individuos capaces o menos capaces, el que obedece a una norma determinada, el que se desvía, aquel a quien se puede corregir, aquel a quien no se puede corregir, el que puede corregirse con tal o cual medio, aquel en quien hay que utilizar tal otro. (Foucault, 2012, pág. 36)

Para el propio Foucault, la distinción de los individuos según su adecuación a las normas es «uno de los grandes instrumentos de poder en la sociedad contemporánea» (2012, pág. 37).

Ahora bien, ¿qué sucede cuando los aspectos de nuestra vida se vuelven objetos *medicalizables*? Según Foucault, somos remitidos con un especialista «capaz» de intervenir en nuestra conducta; como hemos visto, esta intervención no necesariamente quiere castigar nuestras acciones, sino que puede interesarle sólo transformarlas. Cuando nos aqueja algún problema o alguna incomodidad «nos derivan al psiquiatra, al psicoanalista, al psicólogo, al sexólogo, al

terapeuta» (Foucault, 2012, pág. 45). Estas profesiones y los especialistas que las ejercen funcionan como interventores que encauzan nuestras conductas conforme a una norma.

1.4.1. *Capitalismo* y medicalización

Foucault piensa que entre los siglos XV y XVI se desarrollaron «prácticas de devoción, prácticas de confesión, de dirección de conciencia, de examen de conciencia, que demuestran el intenso interés que pone la Iglesia Católica en los individuos...» (Foucault, 2012, pág. 37). Sin embargo, este interés no consistía únicamente en *controlar* la conducta de los individuos (a través, por ejemplo, de un esquema lícito/ilícito, o sea, de un orden de carácter jurídico), sino que, para lograr un control «eficiente», era necesario conocer las creencias y las motivaciones —la *vida interior*— de los feligreses. La finalidad era organizarlos con base en un orden de carácter médico.

Así, a partir del siglo XVI, Occidente comenzó a preocuparse «mucho por la educación, no sólo la educación de los clérigos, sino asimismo la educación de las personas que estarán destinadas a ser mercaderes, comerciantes, hombres de ley» (Foucault, 2012, pág. 38). Desde entonces, esta educación —que había constituido un privilegio de la clase alta— se popularizó, y empezó a proporcionarse a otros sectores de la población. También en aquella época vemos nacer los métodos disciplinarios entre los miembros del ejército. En síntesis, se trata de la manera en que la sociedad no sólo organiza a sus ciudadanos, sino cómo los «diseña». Es un proceso que tiene diversos orígenes y procedimientos, pero que puede verse organizado y en crecimiento a partir del desarrollo del capitalismo.

Para Foucault, el desarrollo de nuevos ejercicios de poder está relacionado con el crecimiento del sistema capitalista. Si retrocedemos a la época feudal, veremos que el poder político no necesitaba la

figura del individuo, porque «lo que existía a ojos del señor era su tierra, era su aldea, eran los habitantes de su aldea, eran como mucho las familias, pero los individuos, en concreto, no caían bajo el ojo del poder» (Foucault, 2012, pág. 36).

Sin embargo, al abrirse paso el capitalismo entre las sociedades, fue necesario atender las actividades de los individuos específicos, organizarlos alrededor de ciertas tareas, según las reglas de la división del trabajo, con el fin de desarrollar una producción intensa y eficaz. En otras palabras,

cuando [...] fue necesario que hubiera personas capaces de hacer esto y otras de hacer aquello, cuando apareció también el miedo de que movimientos populares de resistencia, de inercia o de rebelión derrocaran todo ese orden capitalista que estaba naciendo, fue menester entonces una vigilancia precisa y concreta sobre todos los individuos... (Foucault, 2012, pág. 36)

Aunado a lo anterior, el advenimiento de la burguesía trajo consigo nuevas preocupaciones en torno al cuerpo, la salud (física y mental), la educación..., es decir, ocasionó una nueva *normalidad*. Bajo esta innovación, la sociedad experimentó, al iniciar el siglo XIX, el apogeo de la industria, lo cual produjo un alto índice de mortalidad debido a las duras condiciones de vida entre la clase obrera. Para Foucault, el miedo a una posible sublevación del proletariado, así como su muerte —traducida en una disminución de la fuerza laboral—, generaron nuevas preocupaciones entre la clase dirigente, pues «el material humano constituido por la clase obrera comenzó a considerarse poco a poco como un recurso precioso del que no había que abusar» (Foucault, 2012, pág. 39). La nueva *normalidad*, aplicada primeramente al interior de la propia burguesía, se extendió hasta el proletariado para mantener cierto orden en la sociedad, porque de ello dependía la fuerza y la salvación de la clase dominante.

A partir de aquellos días, los diversos mecanismos de poder y los numerosos procedimientos de dominación han logrado organizarse alrededor de un gran actor histórico: la burguesía. Desde luego, esto no quiere decir que la clase burguesa haya inventado los poderes y sus relaciones. Las diversas formas de poder y dominación (que podríamos dividir en dos grandes grupos: jurídicos unos, extrajurídicos otros) tienen, a su vez, distintos orígenes: no proceden de una fuente única. Y esas formas de poder y dominación están *presentes* en algunas épocas, y *latentes* en otras; a veces giran en torno a ciertos actores y no entorno a otros. En nuestra época, se organizan alrededor de la burguesía, que «los aprovecha, los utiliza, los modifica, trata de intensificar algunas de sus relaciones de poder o, al contrario, de atenuar algunos otros» (Foucault, 2012, pág. 42).

Si para la tradición hay un solo poder y una sola fuente de origen, para Foucault hay diversos poderes, y «no hay [...] un foco único del que todos ellos salgan como si fuera por emanación, sino un entrelazamiento [de ellos] que, en suma, hace posible la dominación de una clase sobre otra, de un grupo sobre otro» (Foucault, 2012, pág. 42).

Así, bajo el régimen de medicalización capitalista, las relaciones de poder han podido organizar a la sociedad en un ambiente opresivo, a través de un orden social en constante vigilancia (policial, sanitaria, ideológica, etc.) que permite a la clase dominante mantener el control de la población. Como estrategia, se han desplegado sistemas de vigilancia —penitenciarios, sanitarios, etc.— que la ciudadanía acepta a causa del miedo suministrado por la clase dominante a través del cine, la prensa, la televisión.

No obstante, el sistema capitalista parece encerrar, según nuestro autor, una paradoja, pues pretende combatir el crimen por medio de un sistema carcelario que no hace sino producir criminales. De esa forma, el capitalismo produce aquello que busca eliminar. Sin embargo, esta paradoja desaparece cuando reparamos en el hecho de que quien entra en la cárcel como miembro «inestable» de la sociedad

se vuelve un proxeneta, un capo o un esbirro al servicio del mejor postor. Con esto, el sistema capitalista se encargaría de *producir* una delincuencia de la cual obtiene alguna clase de provecho. Y, en lugar de una paradoja, tenemos una muestra de la capacidad productiva del poder (Foucault, 2012, pág. 58).

En este sentido, instituciones como la cárcel, el manicomio o el hospital sirven para marcar y excluir de modo permanente a un sector de la sociedad, de modo tal que, según las observaciones de Foucault, la *reinserción* no existe, pues el encierro cumple la función puntual de atemorizar, de amedrentar. La reinserción sólo sería posible en una sociedad donde el miedo no gobernara. Por ello, las relaciones de poder burguesas del capitalismo no pueden ofrecer la readaptación de ciertas minorías, sino su *desocialización* (Foucault, 2012, pág. 59).

1.5. CONCLUSIÓN

Entonces, ¿qué es el poder para Foucault? Creemos que el conjunto de las ideas del autor en torno a ese tema puede expresarse de la siguiente manera: el poder es una red conformada por el entrelazamiento de *diversos mecanismos de influencia sobre la constitución y la conducta de los demás* y *numerosos procedimientos para su dominación*. Como hemos visto, las relaciones de poder son capaces de organizar a la sociedad, pues recluyen, vigilan, medican, disciplinan y transforman a sus distintos integrantes.

Para Foucault el poder es un diagrama en el cual confluyen distintas fuerzas —unas, activas; otras, reactivas—. A este fenómeno lo llamará *relaciones de poder*, constituidas todas ellas por las diversas formas en que el poder actúa y reacciona. Lo anterior es el resultado de la renuncia de nuestro autor a tratar el asunto del poder desde meros conceptos o categorías, para favorecer su estudio desde la constatación de hechos concretos a lo largo de la historia: la *genealogía del*

poder (Díaz, 2010, pág. 85). La red de fuerzas que observa Foucault se caracteriza por tener como finalidad otras fuerzas con las cuales se relaciona, y no sólo —no siempre— la destrucción del objeto sobre el cual se despliegan. Esta relación de fuerzas es siempre tensa: ellas van y vienen, se repelen, y en ocasiones se invierten.

Por ello, la idea foucaultiana del poder debe entenderse, pues, tomando siempre en consideración las *prácticas* de poder efectivas y concretas, es decir, las relaciones de poder que pueden observarse en la cotidianidad. A su vez, no deben considerarse sólo aquellas prácticas de poder ocurridas en momentos históricos determinados, sino en relación con los ejercicios de poder —así como con sus dispositivos de castigo, control, transformación, vigilancia, etc.— propios de nuestros días. En otras palabras, en el pensamiento de Foucault el poder no es sólo un concepto, más o menos complejo, sobre el cual deba reflexionarse con métodos renovados, sino que, además de todo ello, constituye un ejercicio, un despliegue concreto que se *realiza* en todas y cada una de nuestras relaciones sociales.

Asimismo, esta noción foucaultiana debe entenderse a partir de su oposición a las consideraciones clásicas en torno al poder, y de sus observaciones sobre la condición positiva, productiva de él. No sólo como una fuerza represiva —característica ésta que, en todo caso, corresponde a algunos de sus dispositivos de reclusión y castigo—, sino como una capacidad creadora, como una *matriz* productora de sujetos, y que determina, en una dirección u otra, las formas de convivencia social.

Finalmente, es necesario tener en cuenta siempre la condición *extrajurídica* del poder foucaultiano. Porque para nuestro autor, el poder no se limita a surgir, desplegarse y producir sus peculiares efectos —negativos algunos, y positivos otros, volvemos a decirlo— dentro de los estrictos límites de las instituciones jurídicas, sino que sus alcances desbordan el ámbito del Derecho, la ley y *lo jurídico*. El poder, pues, atraviesa los cuerpos, los cuerpos humanos, desde luego,

pero también los cuerpos institucionales, y atraviesa igualmente lo legal y lo ilegal, los cuerpos privados y los públicos. En suma, el poder constituye una red que abraza a las instituciones jurídicas, sin constreñirse necesariamente a ellas.

Con estas consideraciones en mente, ensayaremos ahora una conclusión que nos permita «sintetizar» el pensamiento de Foucault, procurando mantener en todo momento su originalidad, y que nos resulte útil, además, para interpretar, en los próximos capítulos, la dinámica con que se interrelacionan las élites y la lógica de sus ejercicios de poder. Comenzaremos por destacar la observación foucaultiana en torno a la *microfísica* del poder y sus rasgos más sobresalientes.

1.5.1. *La microfísica del poder frente a la macrofísica del Estado*

El ejercicio del poder se ha asociado, tradicionalmente, a la dominación de los aparatos estatales y se ha pretendido localizarlo dentro de las instituciones del Estado. Hablar de poder significaba, pues, hablar del ejército, de la policía o de las instancias judiciales que imparten justicia. Aquí radica la *macrofísica* del poder, esto es, el poder estatal, jurídico, institucional. Sin embargo, Foucault descubre que las prácticas de poder pueden ubicarse en muchos otros ámbitos:

[h]ay relaciones de poder entre un hombre y una mujer, entre el que sabe y el que no sabe, entre los padres y los hijos, en la familia. En la sociedad hay millares y millares de relaciones de poder y, por consiguiente, de relaciones de fuerzas, y por tanto de pequeños enfrentamientos, microluchas, por llamarlas de algún modo. (Foucault, 2012, pág. 76)

De esta forma, la *macrofísica* del poder (es decir, el conjunto de las prácticas de poder realizadas por el Estado, la policía, el ejército, las

cortes de justicia...) sólo es posible en tanto que existe en cada individuo una configuración que lo convierte en objeto/sujeto de fuerza y, por tanto, de poder. La «dimensión» macrofísica del poder sólo es posible cuando se interrelaciona con la *microfísica* del poder, una «condición» que se localiza en cada uno de nosotros:

¿Qué sería del poder del Estado, el poder que impone el servicio militar, por ejemplo, si en torno de cada individuo no hubiese todo un haz de relaciones de poder que lo ligan a sus padres, a su empleador, a su maestro: al que sabe, al que le ha metido en la cabeza tal o cual idea?

En lo que tiene de general, de abstracto y hasta de violento, la estructura del Estado no lograría sujetar así, continuamente [...], a todos los individuos, si no se enraizara, si no utilizara, como una especie de estrategia, la totalidad de las pequeñas tácticas locales e individuales que envuelven a cada uno de nosotros. [h]ay relaciones de poder entre un hombre y una mujer, entre el que sabe y el que no sabe, entre los padres y los hijos, en la familia. En la sociedad hay millares y millares de relaciones de poder y, por consiguiente, de relaciones de fuerzas, y por tanto de pequeños enfrentamientos, microluchas, por llamarlas de algún modo. (Foucault, 2012, pág. 76)

1.5.2. *Los métodos del poder*

Ahora bien, los métodos y técnicas específicos del poder *macrofísico* difieren de los del poder *microfísico*. El propio Foucault explica que

hay [...] todo un método, toda una serie de procedimientos por los cuales se ejerce el poder del padre sobre los hijos, toda una serie de procedimientos por los cuales, en una familia, vemos

tramarse las relaciones de poder, del padre sobre los hijos, pero también de los hijos sobre los padres, del hombre sobre la mujer, pero también de la mujer sobre el hombre, sobre los hijos. Todo esto tiene sus métodos y su tecnología propios. (Foucault, 2012, págs. 76-77)

El poder se ejerce, pues, según ciertos grados: hay relaciones de poder extremas y otras sutiles, y las tecnologías del poder van modificándose con el paso de una época a otra. Pero lo más importante es que los enfrentamientos en que se resuelve el poder no son absolutos, ninguno de ellos resulta en una victoria inevitable. Esto se debe a la condición *reversible* del poder.

1.5.3. *La rebelión del poder contra el poder*

La capacidad de oponer resistencia al poder y la posibilidad de construir un contrapoder es una constante en la historia del pensamiento político. Quizá su origen se encuentre en la intuición de que exista un poder absoluto que termine por ejercer un control total sobre nuestras vidas, lo que limitaría seriamente nuestro deseo de ser libres. O quizá radique en la incapacidad de saber dónde se encuentran los límites de un fenómeno envuelto casi siempre de un halo de invisibilidad. En todo caso, la reflexión sobre el poder —y sobre las condiciones que lo hacen legítimo— conduce, tarde o temprano, a la idea de rebelarse en su contra. Desde luego, esta percepción del poder como amenaza no sólo ha tenido lugar en el pensamiento de Michel Foucault.

Un ejemplo de ello se encuentra en las reflexiones de Jean-Jacques Rousseau, cuando presenta la cultura «como el barniz de la corrupción e instrumento de coacción directa por parte del poder» (Béjar, 1982, pág. 72). Por ello, considera que la cultura y su manifestación

más representativa, la *opinión pública*, surgen de la desigualdad entre los hombres y tienden a perpetuarla.

Como sabemos, Rousseau ubica el nacimiento de la opinión pública en la segunda fase del estado de naturaleza, cuando se produce el fin del nomadismo y se crean los primeros asentamientos grupales. Así, la opinión que surgió durante ese periodo es la «opinión [...] realmente *pública* por ser colectiva, muy lejos de la opinión minoritaria» establecida por la élite de la Ilustración (Béjar, 1982, pág. 73 [Énfasis nuestro]).

Pero en cuanto se intensifican las primeras relaciones tribales, aparecen nuevos motivos de discordia, de tal manera que, ante el resto del grupo, el hombre empezará a desear «mostrarse» como *no es*. En otras palabras, en ese momento comienza su ansiedad por agradar a la opinión de los demás,

la necesidad de acumular bienes y fama, la urgencia por mostrar el propio valor; la vida entera se convierte en un don para la opinión pública que, por otra parte, ya no es el grupo reunido en torno al fuego colectivo, sino que está formada por ciertos individuos: aquellos que juzgan en función del poder (traducido principalmente en propiedad) que tienen. De este modo, [...] la opinión primitivamente pública de la comunidad se transforma en opinión privada de los poderosos que hacen valer sus criterios al conjunto de la sociedad. Hay, en este sentido, una permanente «traición» a la colectividad, que se siente enajenada de su voluntad y juicio por la imposición de unos criterios que, no siendo los suyos, pretende representarla en lo más espontáneo de su existencia. (Béjar, 1982, págs. 74-75)

Según las reflexiones de Rousseau este conflicto sólo se resolverá a partir de la consecución de la sociedad contractual, con la construcción de una nueva ciudadanía basada en la *voluntad general* que habrá

de expresarse a través de una opinión pública renovada y donde el poder perseguirá la realización del interés colectivo.

Si a las propias dudas de Rousseau aunamos la observación del comportamiento político de las élites a través de la noción de poder foucaultiana podríamos preguntarnos si, en nuestros días, dicha «voluntad general» reside efectivamente en el pueblo o si no se trata, más bien, de una voluntad producida, diseminada y sostenida de modo permanente por los grupos minoritarios. En los Estados Unidos, por ejemplo, la dominación de los grupos militares no hubiese sido posible sin la creación de una cultura de las armas, una metafísica militar que sustituyó a los valores civiles entre los ciudadanos y dotó al ejército de un aura de prestigio, lo cual creó, a su vez, las condiciones idóneas para la justificación de los intereses belicistas en el espacio público estadounidense.

Por otra parte, en nuestro país el surgimiento del Partido Revolucionario Institucional y su hegemonía a lo largo del siglo XX —sobre todo, a partir del liderazgo de la «élite presidencial»— fue amoldando los intereses tanto de las demás fuerzas minoritarias como de la ciudadanía en general, y los encauzaron hacia el fin «supremo» de mantenerse en el poder. Así, los fines particulares de la minoría política fueron difundidos y consolidados como si se tratara de la voluntad de toda una nación.

Ahora bien, si el poder fuese inevitable, ¿por qué las clases dominantes reforzarían sus métodos para preservarlo, de acuerdo con sus intereses? Podríamos responder que lo hacen no para preservar su dominio *del* poder, sino para ampliarlo, con lo cual su preservación estaría asegurada. Sin embargo, la historia muestra ejemplos de cómo, con el paso del tiempo, las relaciones de poder se vuelven contrarias a los intereses de las clases dominantes. Piénsese en las monarquías, por ejemplo: para mantener su influencia, han tenido que convivir con otros grupos —iglesias, ejércitos, parlamentos—, dentro de una cambiante dinámica de confrontaciones.

Contra la posibilidad de cambio o cese en las estrategias de dominación, los dominadores buscarán reforzar, ampliar y profundizar las estructuras del poder que respondan a sus intereses. No nos encontramos, pues, ante una dominación perpetua y estable, sino dentro de una *red* de conflictos permanentes: «Estamos en lucha en todas partes [...], y a cada instante pasamos de rebelión a dominación, de dominación a rebelión» (Foucault, 2012, pág. 77). *Lo irreversible* no se encuentra propiamente en las estructuras de poder, sino en su siempre posible modificación.

Por último, si nos preguntamos cuáles son los hechos en donde Foucault encuentra el poder, podríamos enumerar los siguientes: «incitar, inducir, desviar, facilitar, dificultar, ampliar o limitar, hacer[los] más o menos probables. [...] Las relaciones de poder se caracterizan por la capacidad de unos para poder “conducir” las acciones de otros» (Díaz, 2010, pág. 101).

Unas décadas antes, Max Weber habría ofrecido una noción de poder muy parecida a ésta. Para el sociólogo alemán, el poder consiste en «la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad». Para él, sin embargo, esta noción de poder resultaba «amorfa», razón por la cual propuso, además, el concepto de *dominación*, que resultaba «más preciso» y por el cual entendía «la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas» (Weber, 2002, pág. 43). En esto se parece Foucault a los estudiosos «clásicos» del poder.

Pero el descubrimiento de la productividad del poder puso a Foucault en contra de dos tradiciones profundamente arraigadas en su época: por una parte, la tradición jurídica, que veía en el poder una forma de prohibición; por otra, la tradición psicoanalítica, que encontraba en él poco más que una represión (Díaz, 2010, pág. 103). Aunado a ese descubrimiento, el giro genealógico de su pensamiento lo llevo a establecer una estrategia para abordar el problema del poder: 1) había

que observar si el poder constituía al sujeto y en qué medida; 2) era necesario atender a los efectos del poder sobre el cuerpo del sujeto; 3) debía comprender las fuerzas del poder no desde la «conciencia» de los sujetos o de las sociedades, sino desde el actuar mismo de los individuos; y 4) había que mostrar las consecuencias productivas (genéticas) del poder en los sujetos: la forma positiva de un poder pensado tradicionalmente sólo como negativo.

Así surgió en la obra de Foucault una *categoría* que abarca sus diversas preocupaciones: la *microfísica del poder*, una indagación *ascendente* que va tras el poder, lo descubre y lo rehace, y observa en él lo que la tradición no había podido apreciar: un poder que no es una fuerza de unos sobre otros —o, al menos, no es sólo eso— sino una interrelación de fuerzas que se despliegan a través de todos los miembros de la sociedad, porque

el poder nos involucra a todos y [...], si bien hay zonas de la red más densas y zonas más tenues, nadie es ajeno a esa trama. De modo que siempre es posible tensar la red en algún punto y hacer temblar toda la estructura. (Savater, 2010, pág. 376)

En síntesis, para la tradición existía *el* poder; para Foucault, *los* poderes. La tradición situaba el poder en el ámbito jurídico, con sus consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales...; Foucault, en cambio, ubica el poder en el ámbito jurídico y, también, en el extrajurídico, es decir, en todos los ámbitos de la sociedad. La tradición formulaba *conceptos* en torno al poder; Foucault observa el *fenómeno* del poder en las escenas donde *ocurre*. Para la tradición, el poder resultaba siempre presente; para Foucault, unos poderes están *presentes*, mientras que otros permanecen *latentes*.

Así, las ideas de Foucault que hemos expuesto nos ofrecerán la posibilidad de entender cómo en el escenario político estadounidense las

élites despliegan sus ejercicios de poder en diferentes ámbitos, sin limitar su influencia a un único espacio de dominio. Por ello, es posible apreciar cómo el poder de esas minorías fluye entre todas ellas, va de una a otra, y traspasa sus límites, hasta alcanzar el proceso de toma de decisiones. En el caso de México, el pensamiento de Foucault en torno al poder nos permitirá entender el comportamiento de la élite política de nuestro país desde su capacidad hegemónica para condicionar la influencia de empresarios y militares y establecer sus límites.

En ambos casos, todo este cúmulo de manifestaciones de dominio por parte de las élites desvanece los límites entre lo jurídico y lo que está fuera de ello, es decir, lo extrajurídico. Si bien muchas de sus decisiones apuntan hacia el Estado, e incluso se realizan en participación con él, también es cierto que otras tantas no requieren de su colaboración ni persiguen sus objetivos: en estos casos, el poder ejercido por las élites se basta a sí mismo cuando busca alcanzar sus propios fines. Esto nos empuja a ver el escenario político del siglo xx desde otra perspectiva, desde el protagonismo de quienes representan a las élites, capaces todos ellos no sólo de ocupar puestos políticos, sino de incidir en las decisiones económicas y en la organización de las sociedades. De esta manera, al tiempo que se ilumina y subraya el protagonismo de las élites, se puede poner en duda el presunto carácter esporádico, «anónimo» y aislado de su poder.

La noción de poder foucaultiana nos permite, pues, subrayar el carácter difuso del poder. Para empezar, nos advierte sobre la tendencia tradicional que localiza el poder en un ámbito específico (lo institucional) o como posesión de un actor único (el agente exclusivamente político); a partir de ello, nos conmina a considerar la realidad del poder como un tejido, una trama de prácticas de poder y dominación que se extiende a través de todos los ámbitos de la sociedad, una red que puede estar en manos de diversos actores y, por ende, aparecer en todos los espacios del quehacer político.

Así, podemos concluir que no hay mejor escenario para constatar esta descripción del poder que el «universo» conformado por las élites. Porque las definiciones de poder tradicionales nos llevarían a considerar que ese mundo de las minorías se halla liderado por un solo actor o una instancia única que detentaran el poder; además, nos instarían a pensar que los ejercicios de poder de tal actor o instancia se encuentran siempre circunscritos a la esfera de la legalidad, es decir, al ámbito conformado por el Estado y sus instituciones. Pero al ser analizado con mayor detalle, ese universo nos permite apreciar la *movilidad* del poder: la variedad de formas en que se realiza, la multiplicidad de intereses que persigue, el carácter heterogéneo de los actores que lo ejercen y su propia capacidad de «producir» nuevos agentes y de generar circunstancias idóneas para su éxito. Todos estos rasgos representan aspectos de la realidad política que nos remiten al pensamiento de Michel Foucault: una concepción del poder ciertamente heterodoxa, pero que por esa misma razón nos permite apreciar la *plasticidad* del poder en el escenario social y político.

Subrayar este carácter difuso del poder y señalar la riqueza de formas que adopta en la práctica política de las élites será nuestro objetivo en los próximos capítulos.

CAPÍTULO 2

LOS EJERCICIOS DE PODER DE LA ÉLITE ESTADOUNIDENSE

2.1. LA ÉLITE POLÍTICA ESTADOUNIDENSE

En ninguna élite pueden observarse más ejercicios de poder *productivo* como en la «familia» política. Para empezar, sostiene Mills que

[e]s preciso entender de qué modo se han cruzado la biografía y la historia para trazar el curso de la política norteamericana, pues cada época elige y forma sus políticos representativos, así como la imagen de ellos que debe prevalecer. (Mills, 2013, pág. 267)

Todo proceso de *normalización* es producido a lo largo de un periodo histórico determinado, y, con base en él, se produce un cierto tipo de actor político. (Un aspecto importante acerca de este proceso consistiría en determinar en qué medida la *normalidad* de cada época es producida, a su vez, por la élite política, con lo cual nos encontraríamos frente a un interesante caso de «autoproducción»: si los políticos crean *normalidad* y ésta crea políticos, concluiríamos que los políticos son una creación de sí mismos.)

Este cariz productivo del poder —es decir, su capacidad para constituir sujetos que se desempeñen en el quehacer político— puede rastrearse a lo largo de toda una tradición, pues «muchas de las imágenes

de políticos que dominan hoy proceden, en realidad, de épocas anteriores» (Mills, 2013, pág. 267).

Así, es claro que el político estadounidense del siglo XX posee ciertos rasgos que lo asemejan al antiguo estadista del XIX (Mills, 2013, pág. 268). No obstante, «durante el siglo XX y sobre todo después de la primera Guerra Mundial, otras fuerzas han modificado en grado considerable el contenido y la importancia de las instituciones políticas en los Estados Unidos» (Mills, 2013, pág. 268). Esto implicaría que, aun siendo producto de los procesos de *normalización*, los estadistas del siglo XX en Estados Unidos se han visto transformados por un conjunto de prácticas de poder surgidas en épocas recientes. Frente a nuevos *telares* de poder, surgen nuevos sujetos capaces de ejercerlo.

En efecto, durante el siglo XX los nuevos actores de la política estadounidense han debido *compartir* el poder con otras élites. Con ello, «[l]a organización política [...] ha adquirido mayor coherencia y más alcance relacionándose más y más con todas las instituciones sociales que comprende», lo cual nos haría suponer un detrimento del estatus de la élite política al verse influida por las necesidades y las luchas de poder de otras minorías (Mills, 2013, pág. 268). Sin embargo, esta situación ha generado un fenómeno muy interesante: la *deslocalización* del poder. Por una parte, son cada vez más las instituciones que requieren la asistencia del poder estatal, lo cual ha enriquecido la *fisonomía* del Estado. Por la otra, cada una de las élites competidoras, ciertamente, ha ganado una nueva «parcela» de poder, desdoblado su monopolización hacia otros sectores y, por tanto, «disolviendo» la *centralidad* del poder hacia los márgenes. Así, nuevos hilos han enriquecido —y complicado— la *textura* del poder.

Esta visión de un poder en constante cambio quizá se deba al hecho de que la tradición insistía en estudiarlo como un objeto centralizado, único e inmutable: la naturaleza del poder correspondía, más bien, a la naturaleza del instrumento que lo estudiaba. Pero nunca como ahora, el poder puede percibirse como una verdadera *red* de ejercicios y

prácticas que, lanzados desde múltiples centros, se entretajan en todos los espacios de la vida social, en persecución de distintas finalidades, limitándose y posibilitándose entre sí, develando la verdadera trama que producen y a la cual pertenecen todos por igual. Ciertamente existe otra posibilidad: que el poder nunca haya sido así, en realidad, y sólo en nuestros días las relaciones de poder hayan alcanzado los niveles de complejidad que hoy pueden atribuírsele.

En cualquier caso, la élite política ha comenzado a producir una clase de sujeto

cuya carrera se ha desarrollado en los sectores administrativos del gobierno, y que se hace «político» en la medida en que se alza sobre la rutina del servicio civil y penetra en los círculos en donde se hace política. (Mills, 2013, pág. 269)

Esta práctica muestra lo pertinente de la aseveración que dice que el político «se hace», y apoya la idea de que la esencia del poder consiste en *ejercerse*. Ninguna élite podrá «arrebatar» el poder a los políticos, pues no se trata de un báculo, sino de una «puesta en práctica».

2.1.1. *El intruso político*

En el centro de las nuevas circunstancias imperantes en el ejercicio político estadounidense ha surgido, entonces, un nuevo actor del poder. Este nuevo sujeto proviene del exterior de los círculos de la política tradicional, y lo caracteriza el hecho de que «[s]u experiencia profesional es apolítica, su carrera y sus relaciones pertenecen a otros círculos y [...] se halla arraigado en otros sectores institucionales» (Mills, 2013, pág. 269). Sin embargo, «estos intrusos pueden convertirse en expertos burócratas consagrando mucho tiempo a la labor administrativa e identificando así sus carreras y sus aspiraciones con el gobierno;

pueden llegar a ser políticos de partido cultivando su papel dentro de un partido y llegando a cimentar su poder y su carrera en sus relaciones políticas», e incluso «pueden penetrar [...] en un círculo más secreto como consejeros oficiales y hombres de confianza de algún personaje en el poder, al que deben la influencia política de que disfruta» (Mills, 2013, págs. 269-270).

Debe notarse que durante el siglo XX también la organización política tradicional de los Estados Unidos ha experimentado un cambio. El Congreso ha dejado de ser el motor de la vida política, para dar paso al nuevo protagonismo del Poder Ejecutivo. En este contexto, «el sector ejecutivo del Estado no sólo se ha ampliado extraordinariamente, sino que ha llegado a centralizar y utilizar al propio partido que lo coloca en el poder» (Mills, 2013, pág. 270). Si bien es cierto que el intruso político podría «anidar» en las instituciones tradicionales y afianzarse en ella, también lo es que sus nuevas capacidades le permitirían, en algún momento, «atravesar» los límites de la política «antigua» e instalarse en la cercanía del grupo presidencial, porque

es en los locales del Ejecutivo, y en los organismos y autoridades y departamentos y comisiones que se extienden tras ellos, donde se han resuelto muchos conflictos de intereses y luchas por el poder, más que en la liza de la política al viejo estilo. (Mills, 2013, pág. 270)

De hecho, puede observarse una tendencia histórica que favorece la aparición paulatina del político advenedizo, en detrimento del político tradicional de la vieja guardia, pues

hasta la Guerra Civil, los hombres de gobierno dedicaban más tiempo a la política que a otra clase de actividades. Desde esa época, el miembro típico de la minoría política ha trabajado muchos más años fuera de la política que dentro de ella. (Mills, 2013, pág. 272)

E incluso el propio autor observa que

«[l]as carreras estrictamente políticas alcanzaron su auge en la generación de 1801-1825, que consagró a esa actividad 65% de su vida de trabajo. Las actividades ajenas a ese campo llegaron al máximo en la Era Progresista, de 1901 a 1922; entonces parece que profesionales y reformadores ocuparon altas situaciones políticas, mientras que 72% de la vida activa de esa generación se dedicó a actividades apolíticas». (Mills, 2013, pág. 272)

De esta forma, existe una tendencia que favorece la proliferación de nuevos ejercicios de poder y que marca la decadencia de las prácticas políticas anteriores.

Esta tendencia puede sintetizarse en los siguientes puntos:

- 1) «la iniciación de la minoría política en el plano nacional, dejando al margen los puestos locales y estatales;
- 2) «la falta de servicio en las entidades legislativas nacionales;
- 3) «carrera política por nombramiento más que por elección; y
- 4) «dedicar a la política una proporción menor del total de vida activa». (Mills, 2013, pág. 272)

Todo ello nos permite hablar del inicio de una nueva etapa del quehacer político estadounidense, y significa

la «burocratización» de la política y [...] la ausencia de hombres que son políticos profesionales en el sentido anticuado de llegar a la cumbre de la jerarquía política por elección», lo cual constituye «el auge del *intruso político*. (Mills, 2013, pág. 272. [Énfasis nuestro])

Así, dadas la esencia y la deslocalización del poder, podemos interpretar el caso de este nuevo actor como el de «un hombre que ha pasado

la mayor parte de su vida activa fuera de las organizaciones estrictamente políticas y que [...] se ve introducido en ellas, o se abre camino, o entra y sale en el campo político» (Mills, 2013, pág. 269).

Podemos, incluso, «descomponer» la denominación usada por Mills y analizarla con mayor detalle, y decir que: 1) es *político* porque con su capacidad de practicar el poder, forma parte de la toma de decisiones; y 2) es *intruso* porque forma parte, no de las instituciones políticas tradicionales, sino que proviene de otros espacios donde se practican las relaciones de poder y que influyen en la política «central». Es un político producido fuera del marco jurídico, pero con capacidad de adentrarse en él: he aquí un fenómeno que arroja luz sobre esa parte del poder a menudo relegada —quizá por hallarse al margen—: *lo extrajurídico*.

Durante las últimas décadas, la administración de los Estados Unidos se ha visto conformada, en sus aspectos más esenciales, por

un círculo interno de intrusos políticos que han ocupado los puestos claves del mando administrativo; se compone de miembros y agentes de la riqueza corporativa y del alto mando militar, en difícil alianza con un grupo selecto de políticos de partido, de profesionales que forman parte del Congreso, y cuyos intereses y asociaciones están difundidos en diversas sociedades locales. (Mills, 2013, pág. 272)

Este advenedizo ocupa tres cuartas partes del gobierno de los Estados Unidos, y se encuentra vinculado fuertemente a la élite corporativa de aquel país, de tal forma que resulta inevitable concluir que la población estadounidense está gobernada por una minoría selecta, una élite que extiende su poder lo mismo en el ámbito privado que en el público (Mills, 2013, págs. 276-277).

2.1.2. *El control de la burocracia*

El advenimiento del intruso político y, sobre todo, su control de la mayor parte de las funciones administrativas del Ejecutivo ha generado, desde luego, varias consecuencias. Una de las más importantes ha sido la descomposición de los procesos burocráticos y su progresiva sustitución por los de una «pseudo-burocracia». Porque «lo mismo que en el caso de la ascendencia militar, el problema que el auge del intruso político crea al teórico demócrata es, antes que nada, el de admitir la ausencia de una *auténtica* burocracia» (Mills, 2013, pág. 277. [Énfasis nuestro]). Por *burocracia auténtica* entiende Mills «una jerarquía de autoridades y expertos organizados dentro de la cual cada función y cada categoría se reduce a sus tareas especiales» (Mills, 2013, pág. 277).

En principio, la burocracia constituye «una de las formas más eficientes de organización humana», y su utilidad como recurso político «depende de que sobreviva [...] a los cambios en la administración política» (Mills, 2013, págs. 277-278). La característica principal de toda burocracia «virtuosa» consiste, pues, en la *neutralidad* política, es decir, en mantenerse en funcionamiento con independencia del origen político de los gobernantes en turno. En este sentido, existe un tipo de *normalidad* política a través de la cual se conforma al burócrata *verdadero*. Éste será aquel sujeto capaz de servir

a una nueva administración y sus métodos tan lealmente como a la antigua. Ése es el significado político de la verdadera burocracia. Pues el burócrata, como tal, no hace política; suministra información respecto a los distintos sistemas políticos y aplica el que se adopta oficialmente. (Mills, 2013, pág. 278)

Así, la *lealtad política* no es la *lealtad burocrática*, pues ésta última «sólo es *leal* a los sistemas cuya aplicación se le confía» (Mills, 2013, pág. 278. [Énfasis nuestro]).

Sin embargo, al decir del propio Mills, la política estadounidense nunca ha podido consolidar una burocracia genuina ni «un servicio civil auténtico, en el sentido fundamental de una carrera segura, o de una burocracia autónoma y al margen de la presión de los partidos» (Mills, 2013, pág. 281). Esto tiene que ver con las dificultades de manipular toda burocracia verdadera, pues, como hemos dicho, ésta será una organización de carácter *apolítico* y neutral, cuya razón de ser no podría consistir en plegarse a los intereses de un partido específico. La élite política estadounidense, por el contrario, ha subordinado a sus propios intereses las funciones originales de la burocracia, de tal forma que, antes que la *eficiencia* de la organización burocrática, busca su *lealtad* al partido. La función de la burocracia genuina ha quedado atrapada en el bipartidismo estadounidense y su competencia por el poder. Desde la perspectiva del partido demócrata, por ejemplo, «no hay duda de que se han utilizado los métodos de “investigación de seguridad” para disfrazar la sustitución de los demócratas *desleales* por republicanos *leales*» (Mills, 2013, pág. 281. [Énfasis nuestro]).

De esta manera, la élite política de los Estados Unidos ha puesto en marcha un profundo proceso de transformación del personal de los espacios burocráticos, cuyo resultado representa una crisis de la función pública, ya que «[n]o será posible encontrar personal intelectualmente preparado para formar parte de una burocracia auténtica» ni se podrá «contar con personal moralmente capacitado si ha de trabajar en una atmósfera de desconfianza, endurecida por las sospechas y el miedo», esto es, «si el servicio civil continúa en esa situación de inseguridad política, pues así sólo se atraen mediocridades que se avienen a una conformidad ciega» (Mills, 2013, pág. 281).

2.1.3. *Conclusión*

Todas las prácticas de la élite del poder en Estados Unidos están plagadas de ejercicios de *control*, *transformación* y *producción* de individuos, y el grupo de la política no es, por supuesto, la excepción. Esta minoría despliega tal capacidad productiva que, como hemos visto, le ha permitido crear un político nuevo: el intruso. Aunado a ello, la minoría política ha sido capaz de transformar las tradicionales vías de acceso y realización del poder, en nuevos espacios por medio de los cuales va adecuando, conforme a sus propios intereses, el papel de la administración pública. El resultado de estas prácticas ha implicado un desplazamiento del «centro» de poder tradicional y una sustitución de la *vieja* política —incluyendo su burocracia *auténtica*— por una pseudo-burocracia.

Hay al menos dos razones que explican el despliegue de la pseudo-burocracia de nuestros días. Por una parte, la actual competencia por el poder permite a los partidos el uso de los cargos administrativos del sector público en forma de «indemnizaciones», recompensas o premios a la lealtad de los allegados políticos, lo cual entorpece el desarrollo de una burocracia eficaz basada en las capacidades del personal que la integra (Mills, 2013, pág. 282).

Por otra parte, en la medida en que el gobierno ha incrementado el control sobre el desarrollo de los negocios, los funcionarios públicos comienzan a relacionarse mucho más con diversos empresarios y a articular con ellos nuevas alianzas, ya que «un puesto gubernamental constituye un eslabón de la carrera de negocios o jurídica en el mundo corporativo», de tal manera que los nuevos burócratas sólo deben servir «una temporada en el organismo relacionado con la industria en la que se desea entrar» (Mills, 2013, pág. 282).

Esto ha convertido a la función pública estadounidense en una suerte de «antesala» para ingresar al mundo corporativo.

En suma, se puede concluir que

ni los ejecutivos ni los políticos quieren en realidad un grupo de administradores expertos ajenos a toda consideración de partido, y que, por su educación y experiencia, sean depositarios de los conocimientos precisos para juzgar meticulosamente las consecuencias de las distintas políticas. (Mills, 2013, pág. 282)

Así, el mejor retrato de la situación en que se encuentra la política estadounidense en la actualidad es que «[e]n los centros ejecutivos donde se toman las grandes decisiones no hay ahora políticos de partido profesionales, ni burócratas de profesión. Dichos centros se hallan en manos del directorio político de la élite del poder» (Mills, 2013, pág. 283).

2.2. LA ÉLITE EMPRESARIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

Tal como ha ocurrido con otras élites, los ejercicios de poder del mundo empresarial han debido modificarse a causa de la aparición de nuevas formas organizativas en el sistema económico capitalista. En este sentido, es comprensible que «[d]entro del sistema de empresa privada libre» de los Estados Unidos haya surgido «un equipo de directivos completamente diferentes de los “rudos y anticuados empresarios” formados en los despiadados procedimientos de un capitalismo muerto hace ya mucho tiempo» (Mills, 2013, pág. 148).

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, los altos directivos de las más importantes empresas estadounidenses han sido quienes, en su condición de «hombres económicos» ejercen el poder para *transformar* la realidad social hasta entonces imperante, y *producir* una nueva. Al mando de las grandes empresas de la actualidad, son los artífices de una «revolución [...] [que] [...] ha transformado la

propiedad de una herramienta de obrero en un complicado instrumento mediante el cual se controla su trabajo y se extrae de él una utilidad» (Mills, 2013, págs. 149-150).

Además de poseer grandes edificios corporativos, fábricas, industrias y enormes fortunas, la élite empresarial es la propietaria de un extraordinario poder productivo que le brinda no sólo la capacidad de generar bienes y servicios de toda índole, sino la posibilidad de «capitalizar» el futuro. Esto es así porque, en la medida en que «[l]a economía de los Estados Unidos se ha organizado casi toda en sociedades anónimas, [...] sus directivos han aprisionado las innovaciones técnicas, han acumulado las grandes fortunas existentes y otras mucho menores y esparcidas» (Mills, 2013, pág. 155).

Los ritmos de la tecnología, el valor de los bienes, las condiciones laborales, en pocas palabras, una buena parte de la forma que ha de adoptar el día de *mañana*, se acuerda dentro de las salas de junta de los grandes corporativos estadounidenses.

2.2.1 La red empresarial

Una de las características más notorias de la élite empresarial estadounidense consiste en la *deslocalización* de sus ejercicios de poder, ya que éstos no se han constreñido al ámbito estatal o jurídico, sino que se han extendido hacia muchas otras zonas de la sociedad entera. Por ello, se dice que los empresarios

son los responsables del refrigerador que está en la cocina y del automóvil que está en el garaje, así como de los aeroplanos y las bombas que actualmente protegen a los norteamericanos contra el peligro inminente. (Mills, 2013, pág. 148)

Y de ahí también que su eficaz ejercicio del poder los lleve a autoproclamarse como los más aptos para la administración del Estado, con lo cual extenderían sus redes de poder desde el ámbito económico hasta el político, el social, el cultural, etc., *atravesando* la escena pública desde el ámbito privado.

Esto último puede reforzarse recordando que la élite empresarial ha sabido trasladar su dominio sobre las empresas particulares hasta llegar a dirigir el rumbo de la industria en general. Esa transición de lo particular a lo general «es facilitada por el hecho de que la propiedad corporativa está, aunque limitadamente, diseminada» (Mills, 2013, pág. 151). El carácter limitado de esa diseminación consiste, según el propio Mills, en que ocurre en un pequeño círculo entre la élite empresarial. Es decir, la propiedad corporativa está difundida entre algunos integrantes de la élite, con lo cual el poder corporativo no podría localizarse, estrictamente hablando.

Las grandes corporaciones que lideran al ámbito económico-industrial de Estados Unidos no son un puñado de empresas perfectamente separadas del resto, sino que

están unidas entre sí por asociaciones explícitas, dentro de sus respectivas industrias y regiones. [...] Esas asociaciones organizan la unidad entre la élite directiva y otros individuos de la clase de los ricos corporativos. (Mills, 2013, pág. 152)

Gracias a esos vínculos, las empresas son capaces de convertir sus «pequeños» poderes en una *red* de intereses «que abarcan toda su industria y toda su clase, y usan tales poderes [...] en el frente económico [...] y [...] en el frente político» (Mills, 2013, pág. 152). Es decir, que el poder se disemina a través del cuerpo de las industrias individuales para configurarse en una *red* a lo largo de toda la comunidad industrial.

Esa extensión de las redes de poder es viable, en buena medida, gracias a un proceso de *normalización, transformación y control* de los miembros —y de las instituciones en las cuales participan— que van integrándose a la élite; sobre todo, los candidatos más jóvenes, quienes podrán ganar prestigio y privilegios al asumir como propia la visión de los líderes de la élite, o intentar adaptarse a ella. Mills (2013) ha sido capaz de ver este fenómeno con toda claridad: «[p]ara que se autoperpetúe la compañía, creen los altos directivos que deben perpetuarse ellos mismos u hombres como ellos» (pág. 171). Pero, antes de ahondar en lo relativo al proceso de *normalización* de los miembros de esta élite, vamos a describir algunos rasgos que caracterizan al mundo empresarial.

2.2.2 *El carácter selecto de la élite corporativa*

Uno de los elementos característicos del universo corporativo radica en el aura de *prestigio* con que ha sabido coronarse. Mills considera que una de las funciones más importantes del prestigio, en la actualidad, consiste en reforzar al poder, «convirtiéndolo en autoridad y protegiéndolo contra todo reto social» (Mills, 2013, pág. 115). Por su parte, Gustave Le Bon considera que «[e]l prestigio [...] puede perderse [...] si se le somete a discusión», y agrega que «[d]esde el momento en que se le pone en duda, deja de ser prestigio. Los dioses y los hombres que han conservado su prestigio durante mucho tiempo, no han tolerado nunca que se les discuta. Para que la muchedumbre lo admire, debe mantenerse a distancia» (cit. en Mills, 2013, págs. 115-116). En este sentido, la búsqueda del poder encuentra en «la satisfacción que produce el prestigio» su fundamento psicológico (Mills, 2013, pág. 116).

Por ello, la élite ha buscado en todo momento la *exclusión*, el distanciamiento en relación con la *muchedumbre*, porque

[e]xcluir a los demás permite al elevado y poderoso montar y sostener una serie de mundo privados en que se pueden discutir, y se discuten, diferentes cuestiones con las que preparan informalmente a sus jóvenes en el temple necesario para tomar decisiones. (Mills, 2013, pág. 115)

Puede explicarse el carácter exclusivo del mundo empresarial por el hecho de que sus líderes «no son, ni lo han sido nunca, una colección miscelánea de norteamericanos: son un tipo social absolutamente uniforme que ha gozado excepcionales ventajas de origen y educación» (Mills, 2013, pág. 158).

Así, la élite empresarial resulta un grupo selecto cuyos miembros se caracterizan por ser estadounidenses «urbanos y blancos» que «nacieron en familias de la clase alta o del estrato superior de la clase media», «predominantemente protestantes» y cuyos padres «fueron principalmente hombres de empresa», de tal forma que «[e]ste origen de hombres de empresa hace claramente de los directivos un grupo aparte» (Mills, 2013, págs. 158-159). El propio Mills (2013) añade una nota que nos permite apreciar la naturaleza *selectiva* de esta élite empresarial: de entre sus integrantes, «[s]ólo 12% son hijos de asalariados y de empleados modestos» (pág. 159).

Estas características de *origen* compartidas por los miembros del mundo corporativo representan la base que les permite tener acceso a otra ventaja formal:

están bien educados, en el sentido formal de su instrucción universitaria y postuniversitaria. Que los factores de origen fueron las llaves de sus ventajas educativas resulta claro del simple hecho de que entre ellos —como entre cualquier grupo que estudiemos—, los de origen más alto han tenido las mejores oportunidades de educación formal. (Mills, 2013, pág. 160)

Las oportunidades educativas de que gozan los futuros empresarios refuerzan el carácter *exclusivo* (y *excluyente*) de la élite que los arropa.

2.2.3. *La normalización empresarial*

Además de la *exclusividad* —en el sentido de su autoexclusión frente al resto de la ciudadanía—, existe otro factor que ha propiciado el prestigio de la clase empresarial. Si se acepta que «[e]l mundo corporativo [...] ha seleccionado y creado ciertos tipos humanos que han aparecido con él y dentro de él», reconoceremos que ese otro factor es la «idea» de sí mismos que los empresarios han sabido implantar entre la población: la imagen exitosa del emprendedor contemporáneo (Mills, 2013, pág. 157).

En principio, «[l]a expresión “empresario” sugiere la imagen de un hombre que ha corrido todos los riesgos, que funda modestamente una empresa y la alimenta con solicitud hasta convertirla en una gran compañía» (Mills, 2013, pág. 164). Así, el «nuevo» prestigio de los emprendedores puede explicarse por la *admiración* con la cual ha sido aceptado por los ciudadanos afuera del círculo empresarial. Pero, en realidad, esta admiración hacia los empresarios tiene que ver más con los éxitos materiales alcanzados durante su vida que con el peso de su perfil cultural. En efecto, los grandes empresarios estadounidenses

[c]uando llegan a los 50 o 60 años de edad, la mayor parte de los altos directivos tienen casas impresionantes, por lo general en el campo, pero no demasiado lejos de «sus ciudades». [...] [T]ienen grandes ingresos, constituidos por sus sueldos y por dividendos que pueden ascender a otro tanto o más. [...] Muchos adquieren grandes haciendas y se dedican a criar ganado de lujo. [...] El ocio de muchos altos directivos lo ocupan el campo y la caza. (Mills, 2013, pág. 164)

En cuanto a los limitados alcances de su prestigio cultural, puede apreciarse el siguiente «retrato». La revista *Fortune* observa que «[l]a mayoría de los altos directivos casi nunca lee teatro, buena novela, filosofía ni poesía», y «[l]os que se aventuran a hacerlo [...] son, decididamente, una mutación del tipo directivo, y sus colegas los miran con una mezcla de temor e incredulidad» (cit. en Mills, 2013, pág. 161). A partir de estas observaciones, Mills (2013) concluye que

[n]o es característico de los directivos norteamericanos leer libros, a no ser de dirección de negocios y policiacos. [...] Los círculos directivos no tienen muchos contactos con los artísticos o literarios. Hay entre ellos quienes se disgustan si tienen que leer una información o una carta de más de una página, y ese deseo de evitar palabras es general. Parecen un tanto desconfiados de los discursos de gran aliento, salvo cuando ellos son los oradores, y no tienen, naturalmente, tiempo para serlo. Pertenecen por completo a la época de los resúmenes, de las condensaciones, de los memorandos en dos breves párrafos. Las lecturas que tienen que hacer, con frecuencia las delegan en otros que las recortan y abrevian para ellos. Prefieren hablar y oír a leer o escribir. Mucho de lo que saben lo aprenden al vuelo en la mesa de conferencias o de amigos que viven en otras esferas. (págs. 161-162)

Sin embargo, más allá de las limitaciones de su cultura, y debido a sus constantes éxitos materiales, la admiración hacia la élite produce en la ciudadanía el deseo de *imitarlos*, un impulso que, al ser explotado hábilmente por los altos directivos de las corporaciones, facilita el proceso de *normalización* y *producción* de los futuros empresarios.

Como todas las élites, la empresarial necesita desenvolverse en ambientes altamente controlados, y dado que sus corporaciones son cada vez más grandes y numerosas, el poder practicado sobre ellas debe refinarse de forma constante, pues

[l]a productividad ha aumentado y aumentará aún fabulosamente, en especial cuando haya medios automáticos que permitan conectar varias máquinas de tal suerte que se elimine la necesidad de gran parte del control humano en el volumen de producción que nuestro tiempo exige. (Mills, 2013, pág. 154)

Por ello, es necesario sustituir el «factor humano» con sistemas automatizados y máquinas capaces de reproducir a la perfección las órdenes recibidas. De ahí que no sea raro encontrar declaraciones como las de John L. McCaffrey —directivo de International Harvester—: «Lo peor de la industria es que está llena de seres humanos» (cit. en Mills, 2013, pág. 167).

Pero, dado que hasta ahora ha sido casi imposible prescindir de los seres humanos para perpetuar la élite, y ésta, por tanto, ha tenido que recurrir a personas para extender el orden a través del corporativo, la *reproducción* de sí misma se lleva a cabo por medio de una rigurosa tecnología: la «fabricación» de sus propios empleados. Una de las prácticas de poder mediante la cual se relacionan las élites empresariales posee el efecto —o la finalidad— de infundir «en las filas de los pequeños hombres de negocios las opiniones de los grandes hombres de negocios» (Mills, 2013, pág. 152). Es decir, puede observarse una «transferencia» del pensamiento empresarial, para modificar la *visión del mundo* de la futura élite directiva, en beneficio del corporativo.

Los futuros directivos son seleccionados e incluidos en una lista de candidatos, para recibir educación y cultura gerenciales durante cierto periodo. Un ejemplo de ello puede encontrarse en la manera como «la General Electric recibe todos los años más de 1000 graduados universitarios y se les hace seguir cursos» gratuitos, impartidos por sus propios empleados, por lo cual puede decirse que «[l]a instrucción en “Relaciones humanas” informa todo el programa», aun cuando el «humanismo» que se ofrece en esas fábricas resulte sumamente peculiar (Mills, 2013, pág. 177).

Además, en acuerdo con distintas universidades, éstas ofrecen una variedad cada vez mayor de cursos gerenciales, pues «se dice fidedignamente que los muchachos universitarios están “dispuestos a ser lo que las empresas quieran que sean [...]. Esperan con ansiedad indicaciones”» (Mills, 2013, pág. 177). Este reclutamiento coincide con la *reclusión* propuesta por Foucault, ya que el corporativo se encarga de que la *minoría del mañana* encuentre en la empresa el hábitat «natural» que satisface todos sus requerimientos socioculturales: capacitación y diversión, «cooperación» y competitividad, relaciones personales y relaciones profesionales (Mills, 2013, pág. 178).

El proceso de *normalización* de los futuros empresarios consiste en adaptarse a los principios y valores que reflejan la mentalidad directiva: «El que se adapta sobrevive, y adaptación no significa competencia formal —probablemente no hay tal cosa para los altos puestos directivos— sino conformidad con los criterios de quienes ya han triunfado» (Mills, 2013, pág. 174).

Sin embargo, las normas implícitas en tales criterios «no son claras ni objetivas; parecen completamente incomprensibles, y con frecuencia son totalmente subjetivas. A los que ocupan situaciones inferiores les parecen ambiguas muchas veces» (Mills, 2013, pág. 172). Es decir, se trata de una normatividad caprichosa, pero cuyo valor absoluto no radica en ella misma, sino en haber sido decretada por los altos mandos. El aprendiz solo debe observar esos lineamientos y habrá encontrado el camino a la *normalidad*, pues parte del talento *directivo* que debe caracterizarlo consiste en «ser útil para los que están por encima de uno, para los que controlan los ascensos» (Mills, 2013, pág. 173).

Con ello, el talento *común* se ha transformado en un talento especial, en un talento *normal*, es decir, que refleja la normatividad de la empresa:

[s]er compatible con los hombres de la cumbre es actuar como ellos, parecer como ellos, pensar como ellos, ser de ellos y para

ellos, o por lo menos presentarse ante ellos de manera que se produzca esa impresión. (Mills, 2013, pág. 174)

Cualquier desacuerdo debe ser traducido como una falta de talento por parte de los aspirantes.

Incluso la aplicación a perpetuidad de este «método» para (re)producir a la élite parece obedecer a un patrón de transformaciones perfectamente establecido:

[l]os que han empezado desde arriba han sido formados desde sus comienzos por hombres sólidos y preparados para serlo. No tienen que preocuparse de tener que parecer hombres sólidos. Sencillamente, los son; en realidad encarnan las normas de la firmeza. (Mills, 2013, pág. 175)

Así, a través de un férreo control sobre *su* personal y sus métodos de producción, los altos directivos han creado una organización social acorde con sus intereses, un tramado de poderes que, de modo *latente*, les permite reproducirse y perpetuarse, en detrimento de los ejercicios de poder del Estado y de la sociedad.

2.2.4. Conclusión

Las minorías corporativas tienen, pues, la posibilidad de *transformar* el conjunto de la realidad social —desde los fenómenos que la constituyen, hasta los valores que la determinan y los sujetos que la pueblan— y, con ello, adaptarla a sus propias necesidades de supervivencia. Sus altos dirigentes no sólo «dominan las materias primas y las patentes de inventos para convertirlas en productos acabados», sino que «disponen de las inteligencias jurídicas más caras, y, por lo tanto, las mejores del mundo, para inventar y refinar sus defensas y su estrategia»

además de que «emplean al hombre como productor y hacen que compre como consumidor lo mismo que produce; lo visten y lo alimentan e invierten su dinero; hacen las cosas con que combate en las guerras y financian la alharaca de la propaganda y la charlatanería ofusadora que le rodean durante las guerras y en los intervalos entre ellas» (Mills, 2013, pág. 155).

En otras palabras, el empresariado estadounidense tiene la fuerza suficiente para determinar las condiciones tanto *materiales* como *culturales* de la vida en sociedad. Su potencia para *formar* las condiciones de existencia de la población —o *transformarlas*, si es necesario— puede verse reflejada en el hecho de que «[s]us decisiones privadas [...] determinan la magnitud y la forma de la economía nacional, el nivel del desempleo forzoso, el poder adquisitivo del consumidor, los precios que se dan al público y las inversiones que se canalizan» (Mills, 2013, pág. 155).

Por estas razones, Mills (2013) considera que el poder sobre la economía estadounidense no debe *localizarse* en ella ni a ella restringirse. El de los empresarios no podría considerarse *mundo* si se limitara al ámbito de la industria o al del sector financiero. Su poder, al contrario, ha sabido diseminarse por todo el tejido y atravesar otros ámbitos. Y toda vez que ha logrado posicionarse frente a la élite política, la minoría empresarial es capaz, incluso, de modificar las condiciones de vida propias del Estado, pues,

[e]n la actualidad, el éxito de la compañía depende en gran medida de disminuir todo lo posible su tributación, llevando al máximo sus proyectos especuladores mediante fusiones, controlando los organismos reglamentadores del Estado y ejerciendo influencia sobre las legislaturas de los estados y sobre el Congreso nacional. (pág. 163)

2.3. LA ÉLITE MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS

Junto con los políticos y los empresarios, la élite militar forma un extendido mosaico de ejercicios de poder, lo cual nos confirma que éste consiste en un conjunto de prácticas que no podría localizarse en un solo sitio ni ser posesión de un solo grupo. Los integrantes de la milicia han influido tanto en la toma de decisiones de carácter político y económico, así como en la conformación de una ideología (casi una *estética*) que suscita un prestigio a las armas entre la ciudadanía civil, porque

tienen ahora más medios de ejercer su poder en muchas zonas de la vida norteamericana que antes eran dominadas por civiles; tienen más relaciones, y actúan en una nación cuya élite y cuya población de base han aceptado lo que sólo puede llamarse una definición militar de la realidad. (Mills, 2013, pág. 237)

Esta definición de la realidad suministrada por la élite castrense es lo que Mills llama la «metafísica militar».

Pero esta élite ha desarrollado una peculiar característica: su influencia es *maleable*, pues no sólo ha dotado de militarismo la vida cotidiana de la sociedad estadounidense, sino que ellos mismos han adoptado las «virtudes» más emblemáticas de otras élites. Puede apreciarseles como directivos competentes, y su dominio de temas sociopolíticos puede ser mayor que el de los congresistas de procedencia civil. Es una élite capaz de adaptar su entorno, pero, también, de adaptarse ella misma a él. Quizá esta maleabilidad de *su* poder haya sido provocada por la necesidad de «abrir» a los ojos de la sociedad la reclusión histórica en la cual tenía que formarse el ejército, pues la carrera militar ha sido siempre, necesariamente, una de las más reservadas.

Si es correcta la apreciación de que la «confianza en sí» es uno de los rasgos más significativos del soldado, no es extraño que la élite

militar haya creado un complejo sistema de *confianzas* con los miembros de otros sectores, constituyendo, así, «una reserva de individuos preparados en actividades directivas, pero no abiertamente identificados con ningún interés privado» (Mills, 2013, pág. 239). Esto último puede entenderse si recordamos lo difícil que resultaría modificar el carácter de un soldado *diseñado* por la academia de West Point.

2.3.1. El «giro militarista» de la política estadounidense

Desde que los Estados Unidos se convirtieran en una potencia mundial e iniciaran una competencia con otros países con el fin de mantener una posición hegemónica frente a ellos, la vida estadounidense ha experimentado, en el transcurso del siglo XX, un profundo cambio en todos sus aspectos. El intento por alcanzar la hegemonía ha acentuado las tensiones en el ámbito político, lo cual permitió a la élite militar hacerse de nuevos espacios de poder, espacios que hasta entonces se habían considerado propios del gobierno civil. Todo ello se ha entrelazado, además, con otro fenómeno, uno que permite comprender las razones fundamentales de la reorganización del poder en los Estados Unidos: el «giro militarista».

Por su permanente convivencia con las élites empresariales y, sobre todo, con las políticas, el ejército ha impregnado la realidad de los Estados Unidos con una peculiar *metafísica militar*, una forma de interpretar el mundo y sus acontecimientos debida al tipo de preparación y a las experiencias de los militares de profesión (Mills, 2013, pág. 241). Así, «[e]s de acuerdo con esta situación como debemos comprender los procedimientos políticos de los altos jefes militares y la alta influencia que ahora empiezan a ejercer dentro de la minoría del poder de los Estados Unidos» (Mills, 2013, pág. 241).

Desde una perspectiva civil, el personal militar permanece instrumentalizado por la política y queda reducido a un medio auxiliar al cual

se recurre en procesos de negociación o de estricta defensa (tal como ocurriera en el caso mexicano bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas). Pero desde una perspectiva castrense —esto es, cuando la realidad es interpretada a través del sistema de valores de la milicia—, los términos suelen reajustarse y la estrategia militar adquiere una fuerza prioritaria. Entonces, «si se acepta la metafísica militar, a la cual se adhiere actualmente la minoría civil, la guerra es, por definición, la única realidad, es decir, la necesidad de nuestro tiempo» (Mills, 2013, págs. 241-242).

Esta influencia del pensamiento militar sobre los asuntos civiles puede explicar, a su vez, la postura que los Estados Unidos han asumido durante el siglo XX en materia de política internacional. Porque «[a] ser aceptadas por la minoría ciertas definiciones militares referentes a la realidad mundial, el diplomático profesional, tal como lo hemos conocido o imaginado, perdió toda eficacia en los círculos más elevados» (Mills, 2013, pág. 245).

La «visión» militar ha modificado los viejos cauces del ejercicio político. La tradición definió con cierta claridad los dominios propios de la milicia en el ámbito de la guerra, y los de la diplomacia internacional en la persecución de la paz. Sin embargo, «ahora que la guerra se ha hecho por lo visto total y permanente, [...] los códigos diplomáticos de honor entre naciones se han derrumbado» (Mills, 2013, pág. 245). La metafísica de las armas interpreta los tiempos de paz como preámbulos de una guerra. Si «la paz no es ya cosa seria» y «sólo la guerra lo es», entonces «el papel activo del diplomático carece de significado [...] y [...] es sustituido por el señor de la guerra» (Mills, 2013, pág. 246).

2.3.2. Otras militarizaciones: diplomacia, economía, educación

Además de la implantación de una metafísica militar, otro factor que ha propiciado el desplazamiento de la «metafísica civil» tiene que ver con

el descuido o la incapacidad de la élite política en, al menos, dos áreas. Por una parte, sus miembros han olvidado discutir cuáles habrían de ser las mejores políticas que debieran llevarse a cabo para organizar idóneamente la vida social. Por la otra, han degradado las funciones de una *auténtica* burocracia (tal como lo hemos visto en 2.1.2). Por ello, «[e]n muchas de las decisiones internacionales de gran importancia se ha dejado de lado a los diplomáticos profesionales; y los asuntos han sido resueltos por camarillas de militares de altas graduaciones y el personal político» (Mills, 2013, pág. 250).

El propio autor señala algunos ejemplos de la «intromisión» militar en cuestiones diplomáticas, por cuya pertinencia nos permitimos citarlos *in extenso*:

En los acuerdos de defensa firmados por los Estados Unidos y España en septiembre de 1953, lo mismo que al disponer en 1945 y 1946 de las islas del Pacífico occidental capturadas a los japoneses, los militares establecieron normas diplomáticas sin o contra el consejo de los profesionales. El tratado de paz japonés no fue hecho por diplomáticos, sino por generales; no se ha firmado tratado de paz con Alemania: sólo ha habido alianzas y acuerdos entre ejércitos. En Panmunjom el fin de la guerra coreana fue «negociado» no por un diplomático sino por un general de cuello *sport* y sin corbata. «Los servicios norteamericanos —escribe el *Economist* de Londres— han implantado con éxito la idea de que existen factores puramente militares y que las cuestiones referentes a ellos no pueden ser asesoradas de modo idóneo por un civil». (Mills, 2013, pág. 250)

En tanto que ejercicio burocrático *auténtico*, la diplomacia se ha visto denigrada, y su «rescate» ha sido el resultado de los procesos de militarización. Y siendo esta militarización una práctica que sustituye a la burocracia diplomática, sus alcances no se limitan a la esfera

meramente local, sino que trastocan la realidad internacional. De esta forma, incluso los esfuerzos diplomáticos de una institución como la Organización de las Naciones Unidas se han visto supeditados por las prácticas beligerantes de la milicia estadounidense, lo cual ha marcado el inicio de una suerte de crisis para la actual diplomacia. Al respecto, Mills (2013) cree que «[e]l arrinconamiento de la ONU en los conflictos más importantes de Oriente-Occidente y su debilitamiento político general constituyen uno de los aspectos de la decadencia de la diplomacia en el periodo de la posguerra» (pág. 251).

Contrariamente a lo que ocurre con las burocracias auténticas, «la diplomacia no ha sido nunca cultivada con éxito en los Estados Unidos como arte por profesionales capaces y bien adiestrados, y los que se han consagrado a ella no han podido aspirar a los primeros puestos diplomáticos disponibles, porque éstos se otorgaron, en gran parte, de acuerdo con los dictados de la política y de los negocios», y, al tiempo que se presentan estos desequilibrios en el ejercicio civil de la política internacional, «los militares se han movido y se están moviendo en los círculos diplomáticos más altos» (Mills, 2013, pág. 251).

De esta manera, el ascenso al poder de la élite militar podría entenderse como un cambio de las tensiones en la red de poderes de los Estados Unidos. La decadencia de la diplomacia civil habría provocado una distensión en la red, situación aprovechada por los militares para atraer hacia sí nuevos beneficios, ya que «[a]l ser aceptadas por la minoría ciertas definiciones militares referentes a la realidad mundial, el diplomático profesional, tal como lo hemos conocido o imaginado, perdió toda eficacia en los círculos más elevados» (Mills, 2013, pág. 245).

Pero no sólo la diplomacia se ha visto transformada por estos procesos de militarización. La economía ha experimentado, a su vez, una reorganización de sus objetivos y de sus medios, a causa de la influencia de las minorías militares. Durante el siglo XX, el encuentro entre empresarios y militares fue ocasional, y se debió, en gran medida, a la coyuntura extraordinaria de las dos Guerras Mundiales. Pero, al

finalizar la segunda de ellas, la naturaleza de la guerra contemporánea había cambiado; además, las nuevas necesidades hegemónicas de los Estados Unidos requerían de métodos para *optimizar* los diversos aspectos de las formas de guerra recientemente ideadas. Todo ello aceleró el acercamiento entre militares y empresarios, pues

si los elementos militares no intervenían en las decisiones de las empresas, no podían estar seguros de que se pusieran en práctica sus planes, y si los caudillos de la riqueza corporativa no sabían algo de los planes bélicos, era imposible que organizaran la producción de guerra. Así, los generales aconsejaban a los presidentes corporativos y éstos, a su vez, asesoraban a los generales. (Mills, 2013, pág. 252)

De este modo, la influencia de la élite militar en la organización de los asuntos económicos se ha mantenido luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual «no es sorprendente que durante la última década muchos generales y almirantes se hayan convertido, en vez de jubilarse, en miembros de juntas directivas» (Mills, 2013, pág. 254). Para darnos una idea del ánimo militar con que a partir de entonces se asume la tarea de emprender negocios, podemos recurrir al periodismo económico de aquella época. En un reportaje de la revista *Business Week* se leía:

[E]n los círculos de los negocios ha surgido esta consigna: Búscate un general. ¿Qué rama del gobierno es la que gasta más dinero? La militar. ¿Quién es más experto en expedientes oficinescos, un general o un almirante? Así que háganlo presidente de la junta. (Cit. en Mills, 2013, pág. 255)

Ahora bien, los nuevos mecanismos de intromisión recíproca que caracterizan las relaciones entre empresarios y militares resultan, para Mills

(2013), los síntomas de un cambio más profundo: «[t]ras esta sustitución en las alturas y tras el aumento en el presupuesto militar sobre el que se apoya, está el gran cambio estructural del capitalismo norteamericano moderno hacia una economía bélica permanente» (pág. 255).

Resulta de suma importancia para nosotros subrayar que esta observación de Mills coincide con la idea planteada por Foucault en el sentido de que los cambios registrados en la organización de los ejercicios de poder responden al desarrollo del sistema capitalista. La evolución del capitalismo es posible en la medida en que se sostiene por una reconfiguración de las prácticas de poder, lo cual provoca, a su vez, un reacomodo de las funciones de cada élite y de sus propias interrelaciones.

La nueva dinámica —militarista, como hemos visto— del ejercicio de poder de las élites estadounidenses constituye un reflejo del nuevo papel que ese país ha de desempeñar durante el siglo XX: una de las grandes sociedades industriales del mundo y, asimismo, el mayor de los Estados militares. Y, con el fin de mantener su estatus, sus instituciones deben *diseminar* entre las nuevas generaciones los ideales que han hecho posible la «alianza» económico-militar. Por ello, «“El Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas”, que enseña las relaciones entre la guerra y la economía, se encuentra hoy en la cima del sistema educativo militar» (Mills, 2013, pág. 255).

Como puede observarse, el ejército estadounidense no sólo ha desplazado a la tradicional diplomacia civil e influido en la reorientación de la empresa moderna, sino que ha tratado de extender su poder para determinar las formas del saber y generalizar, con base en ello, la «cultura de las armas». Desde hace mucho tiempo sabemos, gracias a un antiguo proverbio, que «*saber es poder*», y desde Foucault sabemos también que el *poder* es capaz, a su vez, de producir *saber*. La milicia ha querido apoderarse, en primer lugar, de la ciencia:

Desde la segunda Guerra Mundial, la tendencia general de la investigación puramente científica ha sido señalada por las consideraciones militares; sus mayores inversiones proceden del fondo bélico, y son muy pocos los hombres consagrados a la investigación científica fundamental que no trabajan bajo la dirección militar. (Mills, 2013, págs. 256-257)

En este mismo sentido, el propio Mills (2013) agrega que

[l]a tendencia general a militarizar la ciencia siguió prevaleciendo en la época de paz. Este hecho ha causado, como dijo claramente la National Science Foundation, el relativo descuido de la «ciencia fundamental». Del presupuesto científico de 2000 millones en 1955, sólo 120 millones (6%) se aplicaron a la investigación básica, pero como ya hemos dicho, 85% se destinó a la tecnología militar. (Mills, 2013, pág. 257)

Pero, en última instancia, el objetivo principal de las minorías militares consiste en «instalarse» en la cultura general de los ciudadanos, y,

[p]ara conseguir estos fines, los jefes militares de Washington disponen de una vasta red de comunicaciones y relaciones públicas. Diariamente, en tiempos de paz y de guerra, envían crónicas y artículos a la prensa y a las tres o cuatro docenas de periodistas instalados en la sala de información del Pentágono, preparan guiones cinematográficos, hacen grabaciones, y toman películas para los programas de radio y de televisión; sostienen el mayor estudio cinematográfico en el Este [...]. Están dispuestos a mandar a los directores de revistas material completo. Arreglan conferencias para el personal militar y suministran los discursos. Establecen enlaces con importantes instituciones nacionales, organizan conferencias de orientación y viajes experimentales

para sus líderes, así como para ejecutivos y gente clave en los negocios, y en el mundo educativo, religioso o de las diversiones. Han dispuesto en unas 600 comunidades «comités consultivos» que abren camino a sus mensajes y les comunican las reacciones desfavorables. (Mills, 2013, pág. 261)

La diseminación de la cultura militar a través de todos los espacios sociales disponibles —y la eventual «ocupación» de todos ellos— puede interpretarse como un proceso de *normalización* de los ciudadanos, un ejercicio mediante el cual se asimilan los valores del ejército y cuyo resultado radica en que la forma civil de la realidad comienza a parecer una *anormalidad*.

2.3.3. Conclusión

Puede resumirse que, al «militarizar» la realidad, el ejército logró transformar el *edificio* del poder de los Estados Unidos. En medio de los escenarios bélicos de las dos Guerras Mundiales, «la hostilidad tradicional del Congreso [estadounidense] hacia los militares se ha convertido en una especie de sumisión “confiada y amistosa”» (Mills, 2013, pág. 244), lo cual muestra la propiedad *reversible* del poder: en todo momento las prácticas de poder pueden reorientarse y cambiar la dirección con la cual se ponen en marcha, de tal forma que los *sometidos* pueden modificar su estatus en el momento en que encuentran (o *producen*) las condiciones propicias para ocupar el lugar de *dominadores*.

En cuanto a su relación con la élite económica, esta *alianza* ha convertido a la sociedad estadounidense en una potencia industrial y militar, y, con el fin de sostener tal asociación, los futuros soldados «están siendo educados intensiva y explícitamente para mantenerla» (Mills, 2013, pág. 255). Al igual que la élite corporativa, el proceso de transformación de los líderes militares también pasa por la educación:

[h]oy día hay muchos colegios y universidades ávidos de establecer programas de enseñanza e investigación militar. Esto les da prestigio y provechos económicos. [...] [L]a lista de militares que, sin preparación pedagógica especial, han llegado a directores de escuelas y a otros puestos educativos es impresionante. (Mills, 2013, pág. 259)

Esta élite busca transformar un mundo que ha *caído en desgracia* debido a la gestión de dos clases de seres «anormales»: los *civiles* y los *mercaderes*; por ello, ha contraído la «misión» de transformar la sociedad, devolviéndole su *normalidad*. Con ello, «los señores de la guerra [...] intentan arraigar sólidamente su metafísica entre toda la población del país» (Mills, 2013, pág. 260).

Para legitimar y consolidar su decisivo papel en la cotidianidad cívica, la élite militar ha debido reconstruir su imagen. Sus estrategias han sido variadas: desde su mecenazgo hacia la más reciente ciencia «militar» —en detrimento de la ciencia «general»—, hasta la construcción de discursos que propagan la «cultura» de la milicia, pasando por el apoderamiento de la industria de los espectáculos y el ejercicio administrativo de los gobiernos estatales. Es decir, una transformación de su estatus frente al mundo civil. Esto es así porque «[l]os militares no pueden exigir con éxito un lugar entre los civiles si no poseen o no se cree que tienen poder» (Mills, 2013, pág. 264).

No obstante, si bien es cierto que un buen número de los ejercicios de poder del ejército estadounidense pueden interpretarse como un triunfo de su élite sobre los intereses de empresarios y políticos, Mills (2013) realiza una observación de suma importancia. Más allá de su influencia sobre la vida de los ciudadanos estadounidenses, existe «una *coincidencia de intereses y una coordinación de objetivos* entre personajes económicos y políticos así como militares» (pág. 265. [Énfasis nuestro]). Así, el autor afirma, obviamente, la existencia de una minoría de origen militar; sin embargo, como él mismo señala, «sería más propio

llamarla la minoría poderosa, pues se compone de hombres económicos, políticos y militares, de hombres cuyos intereses han ido coincidiendo cada vez más», y «[a] fin de comprender el papel desempeñado por los militares dentro de esta minoría es preciso que entendamos el papel que representan también en ella el presidente corporativo y el político» (Mills, 2013, pág. 265).

2.4. LA ÉLITE DEL PODER

2.4.1. Una «cuarta» minoría

De las tres élites que hemos analizado hasta aquí, ninguna podría considerarse la que encabeza las redes de poder estadounidenses. Si en algunas ocasiones pareciera que la minoría empresarial determina la dinámica imperante dentro de la correlación de fuerzas, es porque las otras élites desempeñan el papel «permisivo» que les corresponde, siempre en arreglo con la corporación. De igual modo, la influencia del ejército pareciera limitarse a «proteger» los intereses de políticos y empresarios, pero, como hemos visto, tal imagen resulta falsa en cuanto nos damos cuenta de que las fuerzas militares son capaces de construir, por medio de un *activo* despliegue de poder, un mundo a favor de sus intereses.

Por tanto, no son las minorías empresariales ni los políticos quienes gobiernan el moderno sistema de poder de los Estados Unidos. Tampoco lo es la minoría armada. La actual lógica que organiza la red de los poderes en la sociedad estadounidense es impuesta, según las observaciones de Mills, por la *élite del poder* —la «cuarta» élite—, una minoría entre minorías conformada por los integrantes más selectos de las élites políticas, empresariales y militares.

Estos integrantes de la élite del poder

se encuentran en todo el país y se trata de una coalición de generales que desempeñan el papel de directores corporativos, de políticos disfrazados de almirantes, de directores corporativos que actúan como políticos, de empleados civiles que llegan a alcaldes, de vicealmirantes que son también colaboradores de un funcionario del gabinete, el cual es, de paso, realmente un miembro de la minoría directora. (Mills, 2013, pág. 322)

Entre los factores que permiten la existencia de la élite del poder y posibilitan su cohesión, el de mayor importancia radica en «la coincidencia de intereses entre los que dominan los principales medios de producción y los que controlan los instrumentos de violencia recientemente incrementados» (Mills, 2013, pág. 320). Sin embargo, la prioridad con que se persiguen los intereses corporativos y los militares sería imposible de explicar sin recurrir a otros dos factores. En primer lugar, a «la decadencia del político profesional y el ascenso al mando político de los dirigentes corporativos y los militares profesionales»; en segundo término, a «la falta de un auténtico servicio civil adiestrado e íntegro, independiente de los intereses creados» (Mills, 2013, pág. 320).

Otros factores que nos permiten reconocer la existencia y la cohesión de la élite poderosa son «la similitud de los miembros que la integran, [...] las relaciones oficiales e individuales entre éstos, y [...] sus afinidades sociales y psicológicas» (Mills, 2013, pág. 323). Además, Mills aclara que la élite del poder no alude solamente a las instituciones sociales, políticas y económicas entre las cuales se desarrolla, sino también al origen común de sus integrantes y a las carreras profesionales que realizan (Mills, 2013, pág. 325).

2.4.2. *Historia de la élite del poder*

Para Mills, esta élite del poder ha ido transformándose con el paso del tiempo y a causa de diversos acontecimientos históricos. Con base en tales cambios, es posible contar su «evolución», a través de cinco épocas en que la correlación de fuerzas entre los grupos minoritarios, o bien se vuelve más equilibrada y homogénea, o bien se inclina hacia alguno de ellos.

Las primeras dos etapas se caracterizaron por un equilibrio de poderes entre las élites de entonces, por lo que ninguna de ellas alcanzó a dominar o imponer sus intereses al resto. Aquellas minorías estaban encabezadas por hombre cultos, competentes en la administración de los bienes materiales y en la organización política. La relación armónica entre las élites tenía su origen en la homogeneidad y el «buen gobierno» de sus integrantes. La Guerra de Secesión acabaría con aquel equilibrio y marcaría el comienzo de una nueva época.

Las épocas tercera y cuarta se distinguen, en cambio, por una tensión creciente entre las minorías. La tercera época vio el ascenso de la élite corporativa y su dominio sobre la agenda política y la planeación militar. La cuarta época, la del New Deal, vería durante la década de 1930 el surgimiento de nuevas formaciones gubernamentales, es decir, un Estado creciente y con instituciones fortalecidas. Al menos durante algunos años, aquel Estado lograría oponer resistencia a la hegemonía empresarial (Mills, 2013, págs. 313-318).

2.4.3. *Actualidad de la élite del poder*

La quinta época de la élite del poder, la era actual, se origina a partir de la Segunda Guerra Mundial y es provocada por la nueva situación experimentada en varias esferas de la vida estadounidense. Hay tres rasgos fundamentales que la distinguen y que configuran su forma

reciente: 1) desde el punto de vista político, la clave de la élite del poder se encuentra en la decadencia gubernamental. Los mecanismos de la actual política estadounidense resultan débiles, y la burocracia encargada de hacerlos funcionar se halla arrinconada por otras fuerzas. «La vieja tendencia de que el gobierno y los negocios se entretrejan intrincada y profundamente cada vez ha llegado en la quinta época a su más clara evolución» y esta tendencia ha desembocado en «el ascenso del hombre corporativo como eminencia política» (Mills, 2013, pág. 319).

2) Desde una perspectiva estratégica, esto es, militar, el elemento más importante que permite el despliegue de la élite del poder radica en la transformación de los Estados Unidos en una potencia mundial, y, por ello, en un Estado militar. Esta transformación puede explicarse, a su vez, por un hecho: luego de 1939, la mayor preocupación de la élite del poder no estaría ya en los problemas internos, sino en los asuntos de carácter internacional. Los Estados Unidos decidieron defender su posición hegemónica en el mundo mediante la estrategia militar, sobre todo frente a la nueva amenaza soviética.

3) Finalmente, desde un ángulo económico, la élite del poder tiene su fundamento actual en la militarización del sistema capitalista, es decir, en el despliegue de una economía regida por las corporaciones privadas y por un estado de guerra permanente. Hoy en día,

la relación más importante entre la gran corporación y el Estado se funda en la coincidencia de intereses de las necesidades militares y corporativas, tal como las definen los señores de la guerra y los señores de las corporaciones. (Mills, 2013, pág. 320)

De esta caracterización de la actual élite del poder, puede concluirse que

[e]l político profesional es quien más ha perdido, tanto que al examinar los acontecimientos y las decisiones sentimos la tentación

de hablar de un vacío político, donde gobiernan la riqueza corporativa y el señor de la guerra, con intereses coincidentes. (Mills, 2013, pág. 321)

2.4.4. Conclusión

El descubrimiento de la élite del poder permite a Mills explicar la dinámica del poder estadounidense sin caer en reduccionismos. Considera que todas aquellas explicaciones que perciben un solo actor detrás del despliegue del poder están incurriendo en una inaceptable simplificación del fenómeno. De esa manera, se niega a aceptar criterios como el *marxista simple*, por el cual el sujeto de poder es siempre el empresario, la clase burguesa poseedora de los medios de producción; o el criterio *liberal*, «que hace del político la cabeza del sistema de poder» (Mills, 2013, pág. 321). Tampoco acepta la lógica que interpreta los juegos de poder como determinados por un gran dictador, o como impulsados por un permanente *sentimiento* de guerra.

Mediante la élite del poder, Mills entiende los ejercicios de poder como el producto de una red de intereses diversos, y que logran resolverse a través de distintas formas de «pacto». Por ello, sostiene que «[e]l concepto de la élite del poder [...] se apoya en el desarrollo paralelo y la coincidencia de intereses entre las organizaciones económicas, políticas y militares», así como «en la similitud de origen y de visión, y el contacto social y personal entre los altos círculos de cada una de dichas jerarquías dominantes». (Mills, 2013, pág. 337)

La coincidencia de intereses entre los integrantes puede también ilustrarnos sobre el modo de resolver las posibles disputas que surjan al interior, pues «[c]uál de los tres tipos gobierna es cosa que depende de “las tareas del momento”, como dicen los integrantes de la élite» (Mills, 2013, pág. 321). Y es justamente esa coincidencia de intereses la condición que permite hablar de una «conciencia de clase» entre los

miembros de esa minoría, aunque el propio autor aclara que «por conciencia de clase, como hecho psicológico, se entiende que el miembro de una “clase” sólo acepta a aquellos hombres aceptados por su propio círculo como representativos de la imagen que él tiene de sí mismo» (Mills, 2013, pág. 328).

Por último, no debemos olvidar otros dos importantes aspectos acerca de la actual red de poder en los Estados Unidos. Por un lado, el hecho de que «el directorio político, los ricos de las corporaciones y la influencia militar se han unido en la élite del poder, y las jerarquías ampliadas y centralizadas que encabezan han usurpado los viejos equilibrios relegándolos a los niveles medios del poder», y, por el otro, que «el auge de la élite del poder se funda en la transformación del pueblo de los Estados Unidos en una sociedad de masas» (Mills, 2013, pág. 342).

CAPÍTULO 3

LOS EJERCICIOS DE PODER DE LAS ÉLITES EN MÉXICO

3.1. LA ÉLITE POLÍTICA MEXICANA

La constitución y el comportamiento de las élites políticas en nuestro país ha experimentado notables cambios una vez concluido el periodo revolucionario. Estos cambios pueden observarse tanto en los ejercicios de poder de las élites sobre la población, como en la forma en que acceden al gobierno y mantienen su posición en él (Suárez, 1991, pág. 225). Una de las características más interesantes en la conformación de las élites de poder en México durante el siglo XX es la modelación de los sujetos políticos que forman parte de ellas.

Durante la primera mitad, la tarea de formar a los gobernantes fue asumida casi en su totalidad por el ejército, pero desde mediados de la década de 1940 dicha labor ha comenzado a ser realizada por «las universidades e instituciones de educación superior y, en fechas últimas, [...] la burocracia federal» (Suárez, 1991, pág. 226). Aunque la influencia militar haya disminuido desde entonces, no debemos olvidar, sin embargo, el alcance que tuvo en la «producción» de actores de poder, pues

[p]arte importante de la experiencia para el liderazgo se obtiene en el ejercicio de una actividad que —como en el entrenamiento de tipo militar [...]— es fuente alternativa de formación política

y de capacidad de mando sobre grupos y personas». (Suárez, 1991, pág. 237)

En 1937 el entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, «lanza un manifiesto que [...] habría de fijar las bases para el futuro de las relaciones entre el régimen civil y el todavía actuante sector militar» (Ibarrola, 2003, pág. 18). Con la conformación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y la transformación de la antigua Secretaría de Guerra y Marina en la Secretaría de la Defensa Nacional, Cárdenas daba inicio al civilismo posrevolucionario a través del cual la influencia de la élite militar sobre la política mexicana sería cada vez menor.

Tres años después, el sucesor de Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho, durante su primer informe de gobierno, ordena «el retiro de los miembros del ejército y la armada de los organismos de acción política a que pertenecían [...]; la idea de esta disposición fue dar cumplimiento a los preceptos constitucionales que vedan a la milicia el ejercicio de actividades políticas» (Ibarrola, 2003, pág. 18). Con ello, la élite militar mexicana será erigida como garante de las instituciones y los procesos democráticos, y se verá alejada paulatinamente del ejercicio del poder y la toma de decisiones.

Así pues, a partir del fin de la revolución

[l]a movilidad política [...] se ha basado, en primer término, en la renovación de la élite por medio de la integración de nuevos elementos procedentes de los estratos medios y bajos del gobierno, y, en segundo lugar, por el cambio cualitativo en las características formales y sociales de las nuevas élites. (Suárez, 1991, pág. 226)

3.1.1. *La élite «presidencialista» mexicana*

Desde una perspectiva general, el comportamiento de la élite política mexicana no es distinto al del resto de las élites latinoamericanas, y su desarrollo puede analizarse en estrecha relación con los cambios experimentados por estas últimas. Hacia finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, el ejercicio político en América Latina se caracterizaba por las tendencias autoritarias de dominación llevadas a cabo por sus respectivas minorías oligárquicas, como puede observarse en la actuación de los ejércitos. Hoy en día, la influencia política de las élites no se realiza a través de la vieja fórmula del autoritarismo, sino en una nueva práctica: el *presidencialismo* (Suárez, 1991, pág. 232). Pero, a pesar del *aire* de novedad que representa el presidencialismo, éste no sería sino una renovación de las prácticas autoritarias: el presidencialismo constituiría la continuación del autoritarismo, pero por otros medios.

Con base «en un pluralismo y democracia restringidas» el presidencialismo «se caracteriza por la existencia de un jefe de gobierno fuerte o una élite política relativamente pequeña que ejerce el poder sin límites institucionales definidos» (Suárez, 1991, pág. 232). De esta forma, las transiciones entre la élite gobernante y sus sucesiones al frente de los gobiernos son resultado de un «pacto», de una alternancia negociada por las distintas fuerzas políticas y sus respectivas oposiciones (Suárez, 1991, pág. 232).

La élite política mexicana no es ajena a estas prácticas, y a partir de la segunda mitad del siglo XX su actuación puede representarse como «[u]n centro de poder monolítico, eje sobre el que gira la dominación de la camarilla política presidencialista», que fija «los parámetros institucionales y formales de acceso y movilidad hacia la élite» (Suárez, 1991, págs. 232-233).

3.1.2. *La burocracia*

La organización burocrática moderna representa el espacio donde los futuros integrantes de la élite adquieren sus primeras experiencias políticas, y por esa razón su estudio reviste especial interés. El propio Suárez (1991) sostiene que

[l]a experiencia política y gubernamental se adquiere a partir de la primera vinculación formal con un partido, con la administración pública o con actividades de carácter político en general, hasta el momento de llegar a la élite en cuestión». (pág. 234)

Si bien este primer contacto se realiza con cierta independencia de las circunstancias originarias de los futuros miembros —estrato social, formación, etcétera—, éstos, una vez integrados a la élite, tenderán «a favorecer a políticos con características similares, reforzando los mecanismos de selección y reclutamiento» (Suárez, 1991, pág. 227). Así ocurre, por ejemplo, con el grupo tecnocrático al interior de la élite, donde

[s]er miembro de la élite es determinado, en parte, por poseer características profesionales o experiencias «necesarias» en la solución de tal o cual situación, al igual que por factores como la camarilla burocrática, experiencia compartida en órganos legislativos y familia política, entre otros. (Suárez, 1991, pág. 227)

Para Max Weber, la burocracia constituye el ejercicio administrativo «en manos de oficiales poseedores de características y conocimiento técnico», por lo cual estos funcionarios terminan por ser «más conocedores y poderosos que sus superiores, a menos que existan provisiones especiales para su supervisión» (Suárez, 1991, pág. 230). La burocracia ocupa, pues, un lugar privilegiado en el ejercicio del poder —al

momento de tomar decisiones, por ejemplo—, producto de un contacto más directo (y, a la postre, una mejor relación) con los gobernados. En estas condiciones, el personal burocrático podría configurar un grupo verdaderamente aparte, un conjunto «especial» dentro de la élite política, ya que

usa su conocimiento y capacidad para escapar del control e inspección de la dominación legal, lo que conlleva, en casos extremos, a un «absolutismo burocrático» en el que los poderes de creación de normas y toma de decisiones son usurpados de las instancias políticas y legislativas. (Suárez, 1991, págs. 230-231)

Así, la burocracia representa un mecanismo elitista de reciente descubrimiento, que se perpetúa a través de las actuaciones de sus propios integrantes, tal como lo hicieron décadas atrás las instituciones del ejército y, aún en nuestros días, las instituciones de educación. De este modo, «[e]l círculo interno de la élite mexicana reproduce los mecanismos de selección al integrar individuos psicológica y socialmente análogos, determinando, desde arriba, la forma y composición de la élite en su conjunto» (Suárez, 1991, pág. 227).

Esto nos permite entender que las élites políticas en México se encuentran determinadas por sus respectivos líderes, pues son ellos quienes se encargan de establecer los lineamientos fundamentales para reclutar nuevos integrantes. Los procesos de selección adquieren las características afines a los conocimientos, las experiencias, las necesidades y los lugares jerárquicos propios de los líderes de cada grupo (Suárez, 1991, pág. 227). Por ello, la manera en que se compone y se estructura la élite política mexicana —es decir, «la forma y “estilo” de enfrentar los problemas» y el poder de sus integrantes y de las burocracias que conforman— cambiará «al variar las instituciones y prácticas de reclutamiento» (Suárez, 1991, pág. 227). Si a cada forma de reclutamiento corresponde un estilo de élite específico, podría

decirse que la élite política en México está constituida por una red de pequeñas élites, grupúsculos o «micro-élites».

En este sentido,

el origen del líder de la camarilla determina las áreas de la burocracia y de la política que detentarán más o menos poder: si el líder es político, serán las organizaciones políticas y sus élites las que tenderán a acrecentar su poder; si es técnico, serán las organizaciones técnicas y burocráticas y la tecnocracia quienes verán aumentado su poder. (Suárez, 1991, pág. 227)

A partir de estas observaciones la élite política mexicana puede interpretarse como una prolongación del poder de su líder, un poder que se extiende a través del grupo al cual lidera, de tal suerte que la élite se convierte en una extensión de sí mismo.

3.1.3. La hegemonía de la élite política mexicana

Durante casi todo el siglo xx la élite presidencial —esto es, la élite que gobierna a través del poder Ejecutivo— ha buscado ejercer el control sobre el resto de los grupos de poder con quienes rivaliza, dominación que «se demuestra en el hecho de que una carrera política exitosa se reconoce con altos cargos en el gobierno y no con posiciones en los poderes Judicial o Legislativo» (Suárez, 1991, pág. 239). Como hemos visto, el elemento clave para entender la hegemonía de esta élite sobre otros grupos de poder descansa en la «burocratización» de la política. Para extender y profundizar su influencia, la élite presidencial otorga cargos administrativos de diversa índole a los integrantes de otros grupos de interés, de tal manera que «[q]uien ingresa al aparato político lo hace generalmente por alguna agencia de gobierno» (Suárez, 1991, pág. 242). Así, ha sido capaz de reducir la influencia del

grupo legislativo, a través del incremento de funciones para sí (Poder Ejecutivo), con lo cual privilegia al colectivo burocrático.

La élite constitutiva del gobierno federal es capaz de subsumir al resto de los actores políticos al determinar la selección y la movilidad, tanto de quienes integran al partido oficial —convirtiéndolo en una suerte de apéndice del Ejecutivo—, así como de quienes aspiran a alcanzar la gubernatura de algún municipio o estado. Todo ello nos permite entender cómo durante la casi totalidad del siglo XX —desde el fin de la guerra de Revolución— la gran mayoría de los gobiernos estatales y el federal son de una misma extracción partidista.

Pero la élite *federal* no sólo es capaz de controlar la mayor parte de los espacios *efectivos* del poder, sino que

[l]as relaciones entre los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo pueden estar formal y realmente subordinadas al gobierno federal [...]; o los vínculos entre el partido oficial y el gobierno pueden darse en forma casi secreta y confidencial [...], haciendo [...] imposible de identificar y de analizar las fronteras entre los distintos actores políticos. (Suárez, 1991, pág. 233)

Asimismo, su relación con el partido oficial se modela por medio de la misma asignación de cargos, lo cual lleva a sus miembros a transitar constantemente del gobierno al partido, y viceversa (Suárez, 1991, págs. 242-243). Esto último ha llevado a interpretar la relación entre gobierno y partido oficial como una *simbiosis* (Suárez, 1991, pág. 259). Dicha situación agrava aún más las dificultades para precisar los límites entre gobierno y partido y comprender las funciones de los diversos organismos políticos, dificultades que a su vez han inspirado a autores como James M. Malloy a calificar la política mexicana como una «democracia *sui generis*». (Suárez, 1991, pág. 259).

El monopolio del poder por parte de las élites gobernantes en el ámbito federal es tan omnipresente que termina por volverse *difuso*.

3.1.4. *La élite política y el partido oficial*

Entre las múltiples instituciones que determinan el rumbo político de nuestro país, diversos especialistas coinciden en subrayar la importancia de tres de ellas: «[e]l Partido Revolucionario Institucional (PRI), los cargos de elección popular y el gobierno federal» (Suárez, 1991, pág. 225). En efecto, la élite política mexicana ha convertido al partido oficial en una de sus instituciones «auxiliares», pues éste constituye uno de los «canales potenciales de reclutamiento y provisión de personal para la élite política» (Suárez, 1991, págs. 249-250). Así, al transformar al partido en un espacio de selección y *modelación* de los próximos dirigentes, se refuerzan los valores internos del grupo en el poder y se consolidan las similitudes de «formación, carrera y educación» entre sus miembros elegibles y los electores (Suárez, 1991, pág. 250). En estas circunstancias, el círculo del poder se cierra aún más.

Todo esto nos permite entender dos comportamientos característicos del Partido Revolucionario Institucional. En primer lugar, el hecho de que mantenga, hasta ahora, un indudable «control sobre la política electoral y sobre la gran mayoría de los cargos de elección popular» (Suárez, 1991, pág. 250). De hecho, tal como han sugerido algunos autores,

[p]uede afirmarse que las nominaciones a los cargos de elección popular —particularmente las diputaciones, senadurías y g[u]bernaturas— se otorgan como recompensa a la lealtad al sistema y al partido, después de largos años de probada fidelidad. (Suárez, 1991, págs. 250-251)

En segundo lugar, el hecho de que siga siendo «una institución de primer orden en la legitimación, cooptación, control y recompensa políticos» (Suárez, 1991, pág. 251).

3.1.5. Conclusión

Las instituciones públicas constituyen los espacios de la política mexicana donde la burocracia y la élite de gobierno cohabitan y se interrelacionan, llegando al punto de mezclarse entre sí. Todos los integrantes de estos grupos —desde los presidentes, los secretarios y subsecretarios de Estado, hasta los directores de bancos y empresas estatales— «se confunden institucional y formalmente en muy diversos casos», debido a que «[t]odo miembro de la fracción de la élite política en el gobierno es parte de la burocracia, su nombramiento deviene de un acto administrativo del presidente de la República como Jefe del Poder Ejecutivo, aunque la naturaleza de las funciones y roles del cargo sean cualitativamente diferentes entre ellos» (Suárez, 1991, pág. 230).

Resulta importante también destacar la incapacidad de establecer la forma y los límites del poder propios del comportamiento de la élite política mexicana. Este carácter difuso conduce, a su vez, a otro problema: «[d]esde la perspectiva de la teoría política y la técnica de la administración pública, la coincidencia de fronteras y canales organizativos de tránsito de la élite y la burocracia en México no ha sido resuelta satisfactoriamente» (Suárez, 1991, pág. 230).

Y si bien no debe olvidarse que «la localización de la élite política no se limita a la función y estructura burocrática, sino que abarca posiciones de gestoría política como los diputados, senadores y agentes de alto rango de partidos políticos, entre muchos otros», debemos advertir, no obstante, que «[e]xiste una clara indefinición de fronteras entre política y burocracia que ha llevado a algunos estudiosos de la política mexicana a conceptualizar a la élite como una “burocracia gobernante”» (Suárez, 1991, pág. 230). Y debido a la necesidad de «acomodar y legitimar las nuevas estructuras políticas, como en el caso [...] del gobierno federal en México», el crecimiento y la evolución de dicha «burocracia» ha derivado en un proceso de «centralización gubernamental» (Suárez, 1991, pág. 233).

Así pues, si la élite política mexicana pudo adquirir un amplio margen de autonomía y de control sobre el resto de los actores políticos en México, fue gracias a:

- 1) «la modernización de los mecanismos de selección de personal de alto rango»;
- 2) «la especialización de determinadas agencias políticas de reclutamiento»;
- 3) «la creación de centros de capacitación política y doctrinaria»;
- 4) el establecimiento de «requisitos no formales de ingreso al círculo político interno (como educación, familia política y camarilla)». (Suárez, 1991, pág. 233)

Todos estos factores han contribuido a reforzar el carácter excepcional y exclusivo de la élite mexicana, y a consolidar la brecha que los distancia del resto de la población (Suárez, 1991, págs. 233-234).

3.2. LA ÉLITE EMPRESARIAL MEXICANA

En México, las relaciones entre élites empresariales y políticas pueden caracterizarse por una permanente tensión que dificulta considerablemente su análisis. Podemos percibir una influencia mutua entre ambos grupos, pero resulta complicado establecer tanto los orígenes como los límites de dicha interrelación.

Por un lado, podría decirse que la élite política presidencial marca el destino de la interacción al imponer al grupo empresarial los cauces de su acción. Se puede estar de acuerdo con esta idea si, por ejemplo, se entiende que

[e]l sector público teme a un sector privado fuertemente independiente que opere en la arena política porque ello sacaría de

equilibrio otros factores políticos, de modo que el papel mediador del Estado se volvería cada vez más difícil. (Camp, 1990, pág. 69)

Por esta razón se vuelve comprensible que la élite política trate de mantener el control tanto de los recursos de poder como de sus competidores.

Sin embargo, también podría suponerse que, tal como ocurre en el caso estadounidense, es la élite económica la que determina la actuación de los políticos y condiciona las relaciones entre el resto de los grupos de interés. Si así fuese, podríamos entender cómo «[l]os grupos empresariales extranjeros como los nacionales tienen acceso al gabinete y a otros líderes y utilizan tal acceso para influir sobre la formulación de la política económica interna» (Camp, 1990, pág. 140).

Ambos casos ocurren, de hecho, pues es difícil imaginar una sociedad compleja donde la influencia de sus integrantes no resultase recíproca. Es claro que el empresariado mexicano constituye «un grupo de interés entre muchos que tratan de influir sobre la toma de decisiones estatales», sin embargo, también resulta evidente «el hecho de que la mayor parte de [...] la toma de decisiones reside en el poder ejecutivo, en particular en las manos del propio presidente» (Camp, 1990, pág. 252). En el presente apartado mostraremos precisamente cómo en nuestro país la influencia de las élites empresariales se ha visto supeditada por el control político.

3.2.1. *Antecedentes históricos*

Como hemos visto, el pacto civilista realizado por el general Lázaro Cárdenas habría de alterar el panorama político del siglo XX mexicano. Durante su gobierno, Cárdenas no sólo modificó las relaciones entre las élites militar y política, sino también los vínculos entre el grupo político y la élite empresarial. En ambos casos la élite política mexicana resultaría favorecida.

En aquel momento, hubo al menos dos decisiones importantes que afectaron el equilibrio entre políticos y empresarios. La primera fue la adopción del *giro keynesiano*, hecho que debilitó la capacidad del sector privado para influir en las decisiones del nuevo proyecto de Estado (Camp, 1990, pág. 35). La segunda fue la nacionalización de la industria petrolera, decisión que, por una parte, afianzó el poder del Estado en el contexto de la naciente configuración política, y, por la otra, redujo la presencia de los empresarios extranjeros, lo cual, a su vez, implicó la eliminación de competidores para el empresariado nacional (Camp, 1990, págs. 34-35). En este contexto nacionalista, la convivencia armónica entre ambos grupos parecía garantizada.

Sin embargo, Cárdenas tomó una tercera decisión: al adoptar una política migratoria de corte liberal, el gobierno mexicano abrió las puertas a la incursión de nuevos grupos extranjeros, algunos de los cuales «traían consigo pequeñas cantidades de capital y habilidades y espíritu de empresarios» (Camp, 1990, pág. 36). De esta manera,

[l]as decisiones políticas de Cárdenas marcaron el inicio de una separación estructural y filosófica entre dos grupos, permitiendo que la retórica gubernamental negara toda representación al sector privado, el que quedaba relegado [hacia] una posición política de segunda clase. (Camp, 1990, págs. 34-35)

Las tres décadas posteriores al cardenismo verían un reacomodo de la convivencia entre ambos grupos, a causa del nacimiento de una «sucesión presidencial con actores convencidos de que la industrialización era la clave del moderno crecimiento económico» (Camp, 1990, pág. 36). Dentro del sistema de creencias de aquel entonces, el proceso de industrialización llegó a considerarse como un valor bueno en sí mismo, por lo cual éste será el momento en que se abrirán las puertas de la política a los grupos empresariales del país. Sin embargo, hacia 1940 las capacidades del sector privado eran pocas, y la posibilidad de una

industrialización con base en capitales privados resultaba mínima. Así, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho decidió que el Estado debía intervenir y decretó la creación de las industrias paraestatales, con el objeto de llenar el vacío que suscitó la debilidad del sector empresarial privado. Tales industrias representaban un nuevo conjunto de instituciones del Estado cuya dirección, sin embargo, recaería en manos de altos dirigentes de la empresa privada.

Años después, durante la presidencia de Miguel Alemán, «el número de los colaboradores empresariales alcanzó el punto más alto» (Camp, 1990, pág. 37). Además, puede considerarse este momento como el de la creación del moderno sujeto de poder político: el «hombre público profesional» (Camp, 1990, pág. 37). Finalmente, en ese mismo sexenio las relaciones entre el poder político y los empresarios alcanzaron una nueva dinámica, hasta entonces ajena a los regímenes postrevolucionarios, pues tanto el presidente como su equipo de trabajo «usaron el poder estatal para apoyar las metas de la creciente comunidad empresarial» (Camp, 1990, pág. 38).

Hacia la década de 1950, el sucesor de Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, daría continuidad a la estrategia político-económica del gobierno y enfatizaría la idea de «la inversión pública como estímulo al crecimiento industrial» (Camp, 1990, pág. 38). De este modo, la «buena» relación entre el Estado y la empresa privada permanecería estable hasta la llegada de los gobiernos populistas. Si en el transcurso de la década de 1960, durante los sexenios de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, algunas fisuras comenzaron a erosionar el equilibrio entre ambos grupos, será la década de 1970 la que nos entregue una interrelación ya prácticamente rota (Camp, 1990, págs. 38-39).

El año de 1968 representa una crisis estatal que puso en riesgo la estabilidad del país. Para salvaguardar al Estado mexicano y mantener la estabilidad política, la élite presidencial llevó a cabo al menos dos acciones que generarían una ruptura con el sector privado: 1) expandir el sector público, con el objeto de mantener el control de la mayor

parte de los espacios de poder en el país, y 2) emprender una estrategia populista de incremento del gasto público, para aumentar —o al menos sostener— el papel activo de la élite gubernamental a través del Estado (Camp, 1990, págs. 39-41). Comenzaba entonces una década de protagonismo estatal que tuvo un elevado costo económico y político, pues, entre otras cosas, produjo un repliegue de la mayoría de los grupos empresariales. No habría de pasar mucho tiempo para que esta retirada se convirtiese en una franca oposición del empresariado en contra del régimen, pues durante el sexenio de José López Portillo, por ejemplo, «algunos empresarios consideraron seriamente la fundación de un nuevo partido político» (Camp, 1990, pág. 45).

Al iniciar la década de 1980, Miguel de la Madrid comenzaría la reorganización del Estado mexicano en medio de una notable crisis económica y con escasa legitimidad política. En tales condiciones, «el restablecimiento de la salud de la economía» pasaba, en buena parte, por «el resurgimiento de la confianza del sector privado y la unificación del liderazgo político» (Camp, 1990, pág. 46). Las relaciones entre la élite presidencial y el capital privado entraban en una nueva etapa de reconciliación.

En síntesis, si bien al concluir la revolución «el sector privado dependía en gran medida del apoyo financiero del Estado» —dependencia que habría de prolongarse a lo largo de todo el siglo—, «la relación se había invertido para 1977», con lo cual «el Estado paso a depender del sector privado en términos económicos, por lo que el crecimiento económico que se obtuviera mediante una alianza con el sector privado legitimaría la vacilante posición del aparato estatal» (Camp, 1990, págs. 43-44).

Esta inversión de los actores —ejemplo de un ejercicio de poder y de resistencia frente a él— habría de caracterizar asimismo los dos últimos sexenios del siglo XX mexicano.

3.2.2. *Los empresarios frente a la élite política*

Los principales mecanismos y recursos de poder con que cuenta la élite empresarial pueden circunscribirse al ámbito económico. Estos recursos constituyen el arsenal que poseen los grupos corporativos «para imponer concesiones y limitar las alternativas del [E]stado» (Camp, 1990, pág. 270). Uno de estos recursos —seguramente el principal entre ellos— es el dinero: en cuanto medio para alcanzar diversos fines, el capital representa un extraordinario mecanismo de poder, de tal manera que «el control del capital por parte del sector privado constituye su amenaza más efectiva contra el estado» (Camp, 1990, pág. 270).

Lo anterior resulta aún más claro si se considera que la élite en el gobierno necesita detonar el crecimiento económico del Estado a través de la creación de industrias, la diversificación del comercio, la capacitación laboral, etc., actividades que requieren capitales superiores a los que pueden obtenerse mediante la recaudación fiscal. Es en ese momento cuando puede observarse a los grupos de interés económico en acción, mostrando su mayor o menor eficacia para lograr tales fines, sobre todo durante las últimas décadas del siglo xx mexicano, cuando ha sido «el sector privado, y no el gobierno, quien ha proveído la mayor parte de la inversión nacional» (Camp, 1990, pág. 270). Esta dinámica puede explicarnos por qué «[e]n los años 80, cuando la comunidad empresarial empezó a perder su confianza en la capacidad del gobierno para controlar la inflación, salieron del país más de 23 mil millones de dólares de ahorros e inversiones» (Camp, 1990, págs. 270-271).

De hecho, a principios de la década de 1980 tuvo lugar un acontecimiento interesante: la nacionalización del sistema bancario nacional. Esto tuvo como consecuencia tanto la *eliminación* del sector financiero —uno de los dos grandes actores de la iniciativa privada— como el consecuente fortalecimiento del sector industrial. Así, «la eliminación de los financieros como actores políticos impulsó a los industriales a una

posición más sobresaliente, ya que hablaban con una voz un poco más unificada por todo el sector privado» (Camp, 1990, pág. 134).

Además de las actividades relacionadas con el capital, existen otras que permiten a los actores económicos influir en las decisiones del gobierno; ejemplo de ello es «la suspensión temporal de actividades productivas mediante las huelgas» (Camp, 1990, pág. 271). Este mecanismo de presión ha sido practicado sólo ocasionalmente, sin recibir apoyo nacional ni de otros sectores económicos. Sin embargo, pese a que no pueda considerarse como «una amenaza con consecuencias probadas», la huelga por parte de empresarios en nuestro país no deja de ser «un arma potencial» (Camp, 1990, pág. 271).

Todos estos recursos pueden traducirse en ejercicios de poder político, de tal manera que los grupos empresariales tienen la fuerza suficiente para influir en la designación o remoción de los integrantes del gabinete de gobierno (Camp, 1990, pág. 271). Además, sus habilidades de organización y su capacidad financiera les permiten «apoyar a partidos de oposición antagónicos y vociferantes, [...] a fin de privar de legitimidad al partido oficial y a la ideología del estado» (Camp, 1990, pág. 272). Estos hechos nos permiten observar la capacidad de las élites privadas para oponer resistencia al poder ejercido por el Estado, pues donde hay un despliegue de poder —al decir de Foucault— hay también la posibilidad de resistir ese poder.

Al hacer uso de estas prácticas en las décadas recientes, los sectores empresariales se han hecho más visibles, y esta visibilidad es asequible aun cuando no desarrollen un activismo político directo, pues poseen la alternativa de la práctica publicitaria, una estrategia que, por ahora, les ha resultado más redituable (Camp, 1990, pág. 273). En efecto, más allá de «las demostraciones físicas o las presiones económicas» (Camp, 1990, pág. 273), los hombres de negocios han encontrado en el despliegue de su ideología a través de los medios de comunicación masivos un valioso mecanismo de resistencia frente a la élite

gobernante, además de un instrumento para *normalizar* sus propios sistemas de ideas ante la sociedad.

Hacia la década de 1970, los empresarios mexicanos habrían comenzado a realizar protestas públicas a través de los grandes medios de difusión (Camp, 1990, pág. 273). No obstante, estas primeras manifestaciones contra diversas medidas gubernamentales no alcanzaron los efectos deseados debido a la característica división interna de la élite empresarial. Tales divergencia quedan ejemplificadas no sólo por la natural oposición de intereses que lanza a la competencia a los distintos grupos económicos, sino por su desacuerdo en torno a los límites de la función estatal. En nuestro país, algunos grupos consideran apropiado —e incluso benéfico— el papel activo del Estado en la economía, mientras que para otros esta participación resulta indeseable (Camp, 1990, pág. 279). El propio Camp sostiene que «[s]i el sector privado puede superar sus divisiones internas, se obtendrá un gran potencial para el uso de los medios en la creación de una imagen favorable de sí mismo y de sus valores», de forma tal que las élites privadas han logrado percibir «la importancia de la publicidad en sus batallas con el Estado mexicano» (Camp, 1990, pág. 273).

Por último, debemos recordar que al lado de estos recursos de poder *patentes* la élite empresarial cuenta, además, con otros mecanismos *latentes*, no visibles, pero que incrementan asimismo su capacidad de influir en la toma de decisiones: «la comunidad empresarial tiene en potencia un gran número de aliados entre los pequeños empresarios» (Camp, 1990, pág. 272). Los propios líderes empresariales mexicanos «admiten que el único grupo que tiene alguna influencia real sobre el estado es el sector privado» y «atribuyen su poder a los recursos humanos y financieros» que no sólo poseen, sino que son capaces de producir (Camp, 1990, pág. 272).

3.2.3. *La influencia política sobre la élite empresarial*

Sin embargo, si bien es cierto que la élite empresarial posee recursos importantes para encauzar el comportamiento de las clases políticas, estas últimas tienen, a su vez, valiosos medios para controlar a los grupos empresariales. Por ejemplo, «[e]l Estado mexicano ha usado desde hace largo tiempo su control del crédito como un premio o un castigo con el sector privado», y al momento de nacionalizar el sector bancario «el gobierno adquirió el control casi exclusivo de todas las fuentes de crédito internas», con lo cual «[s]u capacidad para asignar recursos a un empresario y negárselo a otro es una importante arma económica» (Camp, 1990, pág. 268).

Además de la capacidad de otorgar créditos a sus socios más entusiastas, la élite política se da la facultad de asignar subsidios en diversos sectores, según sus necesidades de reivindicación. Así, «[p]odría afirmarse que el gobierno crea una relación de dependencia entre el sector privado y el Estado al poner estos recursos a disposición de empresarios privilegiados», de donde resulta que «gran parte del éxito del sector privado depende de los servicios públicos y las materias primas que proveen las empresas paraestatales con subsidios» (Camp, 1990, pág. 269). (Para comprobar la realidad de esta *maniobra*, puede consultarse la obra de Jorge Zepeda Patterson (2011), donde se explora la idea de que la fortuna de once empresarios mexicanos ha sido lograda, salvo en alguna ocasión, gracias a sus vínculos con el gobierno en turno durante los años recientes.)

Estas relaciones de dependencia creadas por la clase política mexicana, esta red de poderes desplegada por la élite presidencial, termina por encerrar al empresario en un dilema:

si no coopera con el gobierno podría colocarse en desventaja con sus competidores, pero si coopera se dirá que los empresarios

traicionan su propia condición, ya que ayudan al gobierno a alcanzar su meta en relación con el sector privado. (Camp, 1990, pág. 269)

De esta manera, la élite política transforma al empresario —alguna vez «enemigo» natural— en un colaborador capaz de actuar, incluso, contra su propia naturaleza.

Por otro lado, la aparente división entre los integrantes de la élite empresarial mexicana puede considerarse como un signo de debilidad frente a otros grupos de poder, en especial, frente a la clase gobernante (Camp, 1990, pág. 273). Esto es así porque, a fin de cuentas, una de las «virtudes» de la élite frente a la no-élite radica en la capacidad de organización, con la consecuente fuerza para mantener sus intereses en común; de tal modo que la división interna de la élite empresarial reduce su fuerza frente a la mejor capacidad organizativa de las otras élites.

Finalmente, la variedad de asociaciones, intereses e ideologías propia del sector privado mexicano es otro factor que imposibilita un mayor y mejor ejercicio del poder de la élite empresarial, porque «[el] estado advierte el valor político potencial de estas divisiones, y las usa en su provecho cuando [es] necesario, enfrentando a un grupo empresarial con el otro» (Camp, 1990, pág. 279).

3.2.4. *Conclusión*

En México, las relaciones entre la élite empresarial y la élite política resultan frágiles debido al carácter autoritario del gobierno y su ejercicio casi monopólico del poder. Debido a su necesidad de subsidiar ciertas actividades económicas sin perder el control político que éstas conllevan, el Estado tiende a producir «vigorosos y dinámicos sectores [...] empresariales» que al alcanzar «un cierto nivel de refinamiento y poder,

desearán materializar metas y sueños que no corresponderán necesariamente a los de su mentor» (Camp, 1990, pág. 278). Porque

[c]uando el Estado controla una gran cantidad de recursos y los distribuye para alimentar a un conjunto de actores que deben desempeñar las funciones necesarias para que el propio Estado crezca y sobreviva, introduce en la relación una bomba de tiempo autodestructiva que tarde o temprano habrá de explotar. (Camp, 1990, pág. 278)

Pero, si bien la presión de la élite política tiende a tensar su convivencia con el empresariado, existen otros factores que contribuyen al distanciamiento entre ambas. Uno de ellos es la influencia del sector empresarial estadounidense sobre la élite económica de nuestro país, influencia que ya ha empezado a modificar la manera como ésta percibe al Estado, a sus instituciones y a su actuación. Un ejemplo de este cambio radica en el sistema de creencias desde el cual el sector privado interpreta su propia situación. Además de una imagen independiente de sí mismo —tal como ocurre con la autoimagen del corporativo estadounidense—, el empresariado mexicano considera «a los burócratas mexicanos como flojos y excesivamente remunerados», valoración negativa acerca del servicio público que «dificulta en gran medida que se considere al Estado de manera objetiva» (Camp, 1990, págs. 61-62).

Esta concepción del Estado ha conducido a la élite empresarial a mantenerse alejada de él a lo largo de prácticamente todo el siglo XX. Y este alejamiento ha ocasionado, además, que los grupos de interés económico hayan «quedado sustancialmente detrás de otros grupos», como, por ejemplo, los sindicatos, los intelectuales o ciertas fuerzas políticas de oposición (Camp, 1990, pág. 64). De esta forma, el sector privado en México va alejándose, paulatinamente, de las usuales formas de relación con el gobierno, al grado de exigir a éste último que

«reduzca su papel tradicional y permita que los empresarios se vuelvan más poderosos y sean independientes» (Camp, 1990, págs. 278-279).

A lo anterior debe añadirse que la *confusión* de ideas sobre los actores del poder y del proyecto de nación en México ha tenido consecuencias no sólo entre las élites de la vida política, sino también, como era de esperarse, entre los integrantes del poder económico. Al igual que como ocurría con el ejercicio de poder de la élite presidencial, que «premiaba» con cargos públicos la lealtad mostrada al Partido Revolucionario Institucional, así también esa «lealtad» afectó las relaciones entre gobiernos y empresarios. A lo largo del siglo xx, diversos políticos se abstuvieron de «alentar la participación del sector privado» opuesto a los intereses del gobierno en turno, «a causa de una creencia falsa, pero aceptada, de lo que significaba ser leal a México, que en ese entonces definía la lealtad a México como la lealtad al gobierno o al PRI» (Camp, 1990, pág. 69). Todo ello nos permite corroborar que en el caso mexicano la élite presidencial ejerce un poder capaz de limitar el del resto de los grupos de interés y, con ello, de determinar su comportamiento.

Así pues, las iniciativas emprendidas por el gobierno representan, «la clave para comprender la relación entre el Estado y el sector privado», lo cual «implica que el Estado tiene el control de la relación y que la pauta entre los dos grupos no está determinada por las reacciones del gobierno a las demandas del sector privado como por medidas políticas que el propio gobierno origina» (Camp, 1990, pág. 249).

Como hemos visto, una buena parte del proyecto de nación mexicano del siglo xx se ha construido en torno a dos principios fundamentales: la estabilidad política y el desarrollo económico. La elección de ambos se explica cuando advertimos, en primer lugar, que «[e]l gobierno considera que su papel consiste en alentar la inversión privada y la actividad estatal» y, en segundo lugar, que «no solo creen los políticos que el crecimiento económico es intrínsecamente importante, sino que advierten que la clave de la estabilidad política y de su propio liderazgo es una economía creciente» (Camp, 1990, pág. 249). Es la

profunda interrelación de ambos principios lo que nos permite apreciar la tensión constante de los ejercicios de poder entre el Estado mexicano y sus élites empresariales.

En resumen, hemos visto que la actuación de la élite política mexicana ejerce tal poder que son pocos los resquicios disponibles para el resto de los grupos con los cuales debe convivir. De hecho, podría decirse que esos pocos espacios «vacíos» dentro del cuerpo estatal se deben, antes que al contrapoder del resto de las élites, al propio exceso de poder del Estado. Por el contrario, lo que caracteriza la debilidad de la élite económica estriba no sólo en su deber de confrontarse contra la capacidad hegemónica del Estado —es decir, contra un poder superior al suyo—, sino sus propias fisuras interiores; el ejercicio de poder desde el Estado parece, además de hegemónico, *homogéneo*; no así el de las élites empresariales.

Por último, debemos recordar que aun cuando el empresariado mexicano se ha visto influido por el estadounidense, la organización del poder en ambos Estados es distinta, de tal manera que los mecanismos de poder en aquel país —donde las características de la competición elitista parecen más claras y unidireccionales— no producen los mismos resultados en el nuestro.

3.3. LA ÉLITE MILITAR MEXICANA

3.3.1. *Antecedentes históricos*

A lo largo del siglo XX mexicano el poder de las fuerzas militares ha atravesado por tres distintas etapas. La primera de ellas se sitúa, una vez más, en el contexto del pacto civilista del general Lázaro Cárdenas, y representa el declive de una élite militar que había alcanzado su cenit durante los años que van del Porfiriato hasta la primera mitad de la

Revolución. Algunos datos al respecto pueden mostrarnos este declive de las fuerzas militares en relación con la vida política del país:

En 1885-88, en los albores de la administración porfirista, el 55 por ciento de los altos funcionarios eran militares. Su máxima histórica se dio en 1914 y 1915, los años más cruentos de la revolución, cuando este porcentaje alcanzó el 64 por ciento. Después, ya con Lázaro Cárdenas a la cabeza del gobierno, sólo el 25 por ciento de los funcionarios de nivel superior provenían de la milicia; la mínima histórica se tuvo durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en que esa cifra descendió al cinco por ciento». (Castro y Ledesma, 2000, pág. 18)

A partir de entonces, el desgaste que sufrieron las fuerzas armadas tuvo como consecuencia la pérdida de su protagonismo en la vida política nacional, lo cual provocó un vacío que la élite política se apresuró a ocupar. La clase política integró en su programa político a las deterioradas fuerzas del ejército, y tal integración «dio lugar a un escenario que permitía el intercambio fructífero de cuadros entre milicia y administración civil» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 34).

Lo anterior resulta importante porque nos permite advertir el surgimiento de un nuevo tipo de agente de poder político, «el llamado “oficial político-militar” que aseguraba canales de comunicación y entendimiento entre los grupos dirigentes civiles y militares», de tal manera que, «el pacto cívico militar se convirtió en un complejo sistema de acuerdos para asegurar la transición [política]» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 34).

Además de este condicionamiento político a lo largo del sexenio cardenista, el ejército mexicano tuvo que afrontar un proceso de reorganización durante el siguiente periodo presidencial. Hacia el final de su mandato, Manuel Ávila Camacho «dispuso el retiro de más de 500 generales y miles de jefes y oficiales que habían llegado a la edad

límite», y desde ese momento «el presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional se redujo de manera paulatina hasta llegar a su nivel más bajo [...] en 1980, en una aparente declinación de la influencia de los militares en la toma de grandes decisiones nacionales» (Ibarrola, 2003, pág. 44).

Luego de este alejamiento de la vida política de nuestro país, el ejército mexicano entrará en una segunda etapa en la cual comenzará a actuar dentro de los cauces que le impone la clase política. Durante su mandato, Miguel Alemán creó un órgano de seguridad nacional cuya función, en manos de personal castrense, resultaba una suerte de guardia personal. A medida que avanzó el sexenio,

este órgano de seguridad cambió [...] y su nueva función sería la de un organismo de inteligencia para informar oportuna y verazmente, en forma cotidiana, al presidente y al secretario de gobernación, de los diferentes problemas, así como del origen y causa de los mismos, para que con esta información se pudiera prever la evolución de los conflictos y evitar colapsos económicos y sociales, manteniéndolos informados en relación con la vida de la nación y las fuerzas sociales. (Ibarrola, 2003, pág. 64)

Así, la actuación de la élite militar comenzó a adquirir la forma que los requerimientos de la clase política exigían, y le fue encomendada la *vigilancia* del Estado, que produjo una especie de militarización «suave» o silenciosa.

Durante los siguientes sexenios, el pacto entre militares y gobierno discurriría por los mismos cauces de la seguridad nacional y su única ampliación sería la de la participación del ejército en algunos otros programas cívicos, como los de reforestación, atención médica, construcción de puentes y carreteras, etcétera (Ibarrola, 2003, pág. 49). Pero a mediados de la década de 1980 la situación del país, precisamente en materia de seguridad, habría de complicarse a tal grado que la clase

política debió recurrir una vez más al ejército. Así comenzaría la tercera etapa en la historia del quehacer militar en nuestro país, etapa que, por cierto, ha desbordado el siglo XX mexicano y que puede observarse aún en nuestros días.

Esta tercera etapa se ha interpretado como un proceso de remilitarización, y cobra su dimensión más apremiante al inicio de los noventa, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando «oficiales del ejército, fuerza aérea y armada, unos en activo y otros retirados, ocuparon altos cargos en los cuerpos de seguridad pública» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 18). Aunado a ello, se produjo «una sobrecarga de misiones encomendadas a las fuerzas armadas», debido a que «entró en grave crisis la seguridad pública, se incrementó de modo alarmante el narcotráfico y reaparecieron los movimientos armados» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 18). Para el siguiente sexenio, la situación no habría de mejorar mucho y, por tal razón, «Ernesto Zedillo llama al ejército para que participara directamente en el combate a la delincuencia organizada, [en] la entonces recién creada Policía Federal Preventiva (PFP)» (Ibarrola, 2003, págs. 57-58).

De esta manera, el ejército mexicano dejó de ser «vigilante» de la seguridad nacional para convertirse en «combatiente», esto es, en parte activa de la estrategia gubernamental para recuperar el control del país. En los siguientes párrafos, abordaremos con mayor detalle los procesos de transformación de la élite militar, los cuales nos permitirán interpretar su actual fisonomía y los cauces donde puede manifestarse el despliegue de su poder.

3.3.2. Transformación de la élite militar mexicana

Como hemos visto, el siglo XX mexicano se caracteriza por una desmilitarización *parcial* y progresiva de las estructuras de poder, porque la nueva agenda de las élites militares no depende ya de los objetivos

ni de las necesidades estrictamente castrenses —si acaso alguna vez las hubo—, sino de los fines y de las exigencias de la élite política. Al incorporar los deseos de la milicia a su naciente proyecto de Estado, el PRI «absorbió» la fuerza de un ejército debilitado por la guerra de revolución, y sustituyó los principios de la acción militar por los de la acción política (Castro y Ledesma, 2000, pág. 27). El resultado de todo este procedimiento parece coincidir con aquella «inversión» practicada por Foucault a la tesis de von Clausewitz: la capacidad de la guerra, normalizada y transformada por el poder político, puede desarrollarse por otros medios. En este caso, por medio de la competición política civil, por ejemplo.

Pero el proyecto de democratización iniciado por el PRI a través del viejo pacto civil cardenista no prescindió del poder militar. Esto ha colocado al ejército en una situación contradictoria: por un lado, se le exige replegarse en aras de la desmilitarización del país, pero, por el otro, debe mantener su capacidad militar para satisfacer las necesidades de la propia élite política. Así,

[l]as fuerzas armadas mexicanas están atrapadas en contradicciones que no le son inherentes, sino producto de las debilidades de otras estructuras del estado mexicano, y de que los requerimientos del gobierno federal las obligan a cumplir las misiones correspondientes. (Castro y Ledesma, 2000, pág. 28)

Por su parte, la operación «civilizatoria» efectuada sobre los ejercicios de poder militares nos permite entender cómo es que el ejército mexicano nunca representó un factor de inestabilidad política para la élite gobernante posrevolucionaria y su proyecto de nación. La razón estriba en la falta de autonomía militar en relación con el sistema político dominante. A diferencia de lo ocurrido con la mayor parte de las élites militares en América Latina, el ejército mexicano «[s]e subordinó al presidente dándole reconocimiento de mando supremo constitucional»,

razón por la cual «[l]os analistas señalan que las fuerzas armadas, dada la gran capacidad del sistema político, cumplen un papel “residual”, pues se emplean excepcionalmente, y, sin dejar de ser una especie de brazo armado del PRI, también son una de las fuentes de estabilidad del sistema político» (Castro y Ledesma, 2000, págs. 16-17). Así, la capacidad transformadora de la élite presidencial convirtió en una *virtud* lo que pudo ser un obstáculo.

La democratización del país encuentra en el poder militar una excepción, porque

la modernización y profesionalización de las fuerzas armadas mexicanas no depende de ellas mismas, sino del proceso de transición —sea éste exitoso o no—, y de que muchos conflictos y problemas queden resueltos en el futuro o su solución se deje en manos de otras dependencias del Estado. (Castro y Ledesma, 2000, pág. 27)

El PRI —esto es, la élite partidista al mando del gobierno— ha reorientado con sus propios intereses la actuación militar, con el fin de efectuar los «procesos» de remilitarización de la vida nacional. Los fracasos de las estrategias de gobernación y mantenimiento de la seguridad en amplias regiones de nuestro territorio quedan ocultas por la presencia del ejército y sus operativos, un conjunto de «misiones que hoy llevan a cabo las fuerzas armadas a causa de la debilidad de los cuerpos policíacos» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 28).

Pero, una vez planteada la supeditación a que se ve orillado el poder militar, debemos observar que detrás de ella puede entreverse una «función» complementaria del ejército mexicano. Hasta ahora hemos hablado de una institución que pareciera permanecer pasiva ante el poder del resto de los actores de la escena política; sin embargo, nada más lejos de la realidad que una élite militar tan sólo «receptiva» en el tejido de poderes del siglo XX mexicano. En la medida en que

responde a los objetivos de la agenda política, las fuerzas armadas parecen comprometidas con la protección y defensa no de un proyecto de nación, sino del *status quo* propicio para la élite presidencial: al someterse a los principios de la clase gobernante, la élite militar participa *activamente* en la resolución de los problemas de gobernabilidad del grupo en el poder. Así, las fuerzas armadas nos muestran que el poder puede ejercerse de otras formas, distintas a la confrontación directa con otros competidores.

3.3.3. *El «poder militar» de la élite política*

¿Cómo fue posible para la élite política mexicana haber sido «la única que permaneció en el poder de manera ininterrumpida durante 71 años sin alternancia de partidos opositores»? (Garduño, 2008, pág. 218.) Para el propio Guillermo Garduño, la mejor respuesta será sólo aquella que nos remita a dos aspectos fundamentales: por un lado, a la parte clara y visible de los ejercicios de poder políticos, es decir, al aspecto conformado por «los mecanismos que han propiciado el consenso y ciertas formas de legitimidad», y, por otro lado, a la parte «oculta» y latente del poder ejecutivo, que es «la cara oscura del ejercicio de la violencia legítima como instrumento de coerción y disuasión, desarrollado por medio del órgano que posee este papel, el ejército» (Garduño, 2008, pág. 218).

Desde luego, no debe perderse de vista que el PRI fue fundado por actores militares. Y aun cuando la presencia de los generales en los gabinetes de gobierno a lo largo de setenta años haya sido intermitente, y pese a mostrar señales de disolución en varias ocasiones, la vinculación natural entre ambas élites explica el apoyo de la clase militar al ejecutivo, al menos, en situaciones concretas. Así ocurrió «durante las huelgas ferrocarrileras de 1958 o cuando enfrentó al movimiento estudiantil de 1968» (Castro y Ledesma, 2000, pág.

16), o también cuando se trataba de contener a las guerrillas rurales, durante la década de 1970, o al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. En todas esas ocasiones «el ejército sólo intervenía temporalmente, a fin de salvar la situación, y rápidamente se replegaba a sus cuarteles», y, debido a que actuaba «a petición de parte», el pacto político entre el ejército y el PRI en la presidencia «nunca se rompió ni alteró» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 16).

La restitución de la paz en la vida nacional y la eliminación de las amenazas contra el estatus del poder político constituyen pequeños paréntesis de calma en la siempre tensa lucha por el poder. Durante esos lapsos puede apreciarse claramente un hecho: «cuando las instituciones del país logran por sí mismas, sin recurrir a la violencia, canalizar y resolver la conflictividad política, son momentos de reposo y profesionalización de las fuerzas armadas: el sistema político se desmilitariza» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 18). Pero más allá de la paz momentánea que introducen, estos episodios de «ausencia» militar nos permiten apreciar con mayor nitidez la funcionalidad política del ejercicio de poder militar, porque

[c]uando ese hijo bien logrado de la revolución, el PRI, comienza a envejecer, las tendencias a la inestabilidad aparecen en distintos segmentos y regiones del país y se recurre a las fuerzas armadas como factor de contención [...], de disuasión o de apoyo a otros cuerpos de seguridad, como ha ocurrido en los noventa. (Castro y Ledesma, 2000, pág. 19)

Es cierto que, en materia política, siempre debe esperarse una determinada actuación por parte del ejército, ya que éste constituye un actor del entramado político. Pero la conducta que de él se espera se basa en el compromiso con el proyecto de nación y no con la agenda de un determinado partido, pues «[d]octrinariamente [las fuerzas armadas] son instituciones profesionales y asumen misiones de estado, no de

gobierno, o sea que están [...] desvinculadas de su [...] nacimiento con el PRI»; sin embargo, «numerosos críticos señalan que» el comportamiento de la élite militar mexicana «responde a las necesidades de ese partido» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 28).

Todos estos datos nos conducen a una última observación que parece sintomática de la peculiar forma de organización del poder entre las élites mexicanas. Hemos visto cómo tanto políticos como empresarios mexicanos «intercambian», sin diferenciarlos demasiado, conceptos como «Estado» y «partido», y pasan fácilmente de un *proyecto de nación* a un *proyecto presidencial*. En ese sentido, la élite militar no es la excepción, pues «en México, entre las fuerzas armadas, no ha habido una doctrina oficial de la seguridad nacional, sino un apoyo incondicional a la fuente del poder del país, representado por el presidencialismo», lo cual ha traído como consecuencia que «muchos errores de las fuerzas armadas hayan sido cometidos por su obediencia ciega al ejecutivo» (Garduño, 2008, pág. 90).

Así, la élite en la presidencia somete a las fuerzas armadas a transformaciones constantes con la intención *explícita* de contener las amenazas a la seguridad nacional, en especial, las relacionadas con el narcotráfico y con el resto de las manifestaciones del crimen organizado. No obstante, la finalidad *implícita* de estas transformaciones responde a una lógica diferente, pues «el panorama parece estar siendo configurado para mantener vigente, a toda costa, el modelo económico contractivo que caracterizó al gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que continuó profundizándose durante el de Ernesto Zedillo» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 86).

En este contexto político puede observarse la relación entre las élites militares y los grupos políticos y económicos. Por un lado, sabemos que las élites políticas tienen la necesidad de mantener el control frente al resto de los grupos de poder; por el otro, necesitan asimismo implantar una serie de medidas con el fin de orientar su proyecto de Estado en dirección de un determinado modelo económico. En

ambos casos, el resultado es una tensión de las relaciones de poder entre los actores que se disputan su control. En el primer caso, por el descontento generado entre las otras fuerzas políticas, que buscarán revertir sus desventajas y debilitar a la élite en la presidencia; en el segundo caso, por el descontento que surge entre los distintos grupos empresariales, y entre la misma población en general, a causa de no ver resueltas sus demandas en la aplicación del modelo económico implantado por la élite.

Es entonces cuando se explica con mayor claridad —al menos, en el caso específico de nuestro país— la estrategia de militarización que efectúa la élite en el gobierno. En este sentido, entendemos el concepto de *militarización* como «todo aquello que refuerza la tendencia a recurrir a la violencia organizada como una manera de resolver los conflictos sociales y mantener el control social» (Castro y Ledesma, 2000, págs. 241-242).

Aun cuando ocurran de manera poco evidente —y he ahí, quizá, una de sus mayores «virtudes»—, las estrategias de militarización han comenzado a *normalizarse* en diversos ámbitos de la vida nacional. Por una parte, podemos observar un proceso de militarización *jurídica*, esto es, la producción de una «atmósfera» militar dentro de los límites de la legalidad estatal. Una de sus principales manifestaciones es

la creación y fabricación al vapor de normas jurídicas e institucionales para reforzar el papel autoritario de las fuerzas de seguridad, y la utilización que se hace de las instituciones de procuración y administración de justicia con un fin distinto al que fueron concebidas. (Castro y Ledesma, 2000, pág. 242)

Pero al margen de esta militarización jurídica, la élite en el gobierno ha sido capaz de producir una militarización paralela, cuya naturaleza es *extrajurídica* y que es llevada a la práctica por un nuevo sujeto de poder: los grupos paramilitares. Estas fuerzas paramilitares son

«grupos armados [...] que actúan al margen de la ley y que están ligados de alguna forma a las elites políticas y económicas regionales; entrenados, pertrechados y tolerados por la autoridad y el Ejército Mexicano u otros grupos de seguridad», y que cumplen «un papel importante en la guerra de baja intensidad y de redes», tanto «en la lucha contrainsurgente» como «en las comunidades indígenas» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 242).

3.3.4. *Conclusión*

Todo estudio acerca de la conformación y el comportamiento de la élite militar en nuestro país debe sortear un primer obstáculo: el hecho de que «[l]as fuerzas armadas mexicanas son instituciones del Estado prácticamente desconocidas», y que «ninguna de las tres armas que las integran —ejército, fuerza aérea y armada— están sujetas al escrutinio público» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 15). Ya sea para resguardar los asuntos relativos a las estrategias militares, o como argucia de la élite política para ocultar las motivaciones reales de su brazo armado, lo cierto es que «[h]asta inicios de la década de los noventa [...], solo unos cuantos analistas en México y en el extranjero se habían encargado de estudiar [las fuerzas armadas] y desde el mismo Estado se inhibe su conocimiento» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 15).

Por otro lado, hemos visto que la militarización de la vida nacional ocurre no sólo dentro de los límites del Estado de Derecho, sino también al margen de ellos, en una suerte de militarización de naturaleza extrajurídica. Pero además de adquirir estos rasgos, la militarización de la vida política y social en nuestro país viene acompañada de un discurso oficial, una falacia mediante la cual la élite en el poder presenta sus propios intereses como si se tratara de los valores nacionales por excelencia. Porque construye discursos en torno a ideas como la soberanía y la seguridad nacionales, ya sea con el objetivo de

justificar los procesos de militarización, o bien de «evitar críticas y desviar el debate sobre la persistente y sistemática violación a los derechos humanos perpetrada por las fuerzas policiacas, principalmente por el ejército» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 242). Con la divulgación de estos discursos, «[p]erversamente se confunde la seguridad nacional con la seguridad del gobierno, la seguridad interior con la seguridad pública y la función política, el ejército con la función administrativa del cuerpo policiaco», con lo cual la élite del Ejecutivo puede «justificar sus intereses» y hacerlos pasar «como los de la nación» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 242).

Por medio de estas prácticas de poder, de transformación y de normalización sobre el ejército podemos observar el sentido en que actúa la élite política mexicana y la determinación del rumbo que le ha impuesto a las fuerzas militares, porque, según Castro y Ledesma, «lo que sucede en México y la zozobra en que vivimos es una política de Estado que recurre al terrorismo político, entendido como la práctica política del que recurre sistemáticamente a la violencia contra las personas, provocando el terror como instrumento del gobierno para mantenerse en el poder», una estrategia que, además —y en contra de lo que sostienen los discursos oficiales en torno a ella—, «ha desembocado [...] en una sistemática y persistente violación a los derechos humanos» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 242).

Finalmente, se puede sintetizar el encuentro entre las élites políticas, empresariales y militares en México, precisamente en torno a la aparición de manifestaciones de insatisfacción que se suscitan cuando la élite en el poder aplica un conjunto específico de medidas económicas, es decir, en torno a la constitución de un nuevo tramado de relaciones de poder —y de nuevas formas de ejercerlo— a causa de la adopción de formas de organización económica distintas. Si es verdad que con el fin de «acallar los reclamos [...] por la aplicación de [...] políticas económicas neoliberales» se vuelve necesario «un aumento drástico en la presencia y participación de los militares

en la sociedad» (Castro y Ledesma, 2000, pág. 242), puede afirmarse, entonces, que la élite militar representa un intermediario clave que facilita la aplicación de los nuevos acuerdos de poder de la clase política y sus socios empresariales.

Al respecto, vale la pena recordar, nuevamente, la idea foucaultiana de que, a partir del siglo XVI, las innovaciones en los ejercicios de poder guardan una estrecha relación con el auge del sistema capitalista. Y en ese mismo sentido, recordemos también que uno de los primeros desencuentros entre la élite política y los empresarios, al finalizar la Revolución mexicana, tuvo que ver con la decisión de Cárdenas de optar por una política económica de corte keynesiano. En ambos casos, las formas de la organización económica contribuyeron a —y, al mismo tiempo, requirieron de— la conformación de nuevas formas de ejercer el poder. Así, no resulta extraño que la transición del modelo económico keynesiano al neoliberal, hacia las décadas de 1970 y 1980, haya exigido una similar renovación de los mecanismos de poder. Finalmente, debemos decir que esta reorganización del poder en México es muy similar a la ocurrida entre militares y empresarios estadounidenses, generada por las nuevas tendencias del capitalismo estadounidense al final de la Segunda Guerra Mundial.

Así, hemos visto que a partir del final de la Revolución, el siglo XX mexicano puede considerarse un siglo de desmilitarizaciones/remilitarizaciones del país realizadas por la élite política. Esta situación podría hacernos suponer que el ejército mexicano de nuestro tiempo es una creación de la política. Y si bien es cierto que «[l]as fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, —ejército, fuerza aérea y armada—, tienen estructuras, reglamentos, doctrinas y modalidades institucionales», también lo es que tales «bases se establecieron en los años treinta», es decir, que «[a]unque han registrado cambios, éstos no han tocado su esencia» (Castro y Ledesma, 2000, págs. 22-23). Pese a las transformaciones democráticas por las que ha tenido que atravesar la élite

presidencial mexicana —entre las cuales debe incluirse, ni más ni menos, la transición política y la pérdida de la presidencia—, ésta se reserva la transformación de *su* brazo armado.

CONCLUSIONES

La hipótesis de nuestra investigación afirmaba que era posible explicar la dinámica de las élites estadounidenses y mexicanas hacia finales del siglo XX, a partir de la lógica del poder propuesta por Michel Foucault. En este sentido, la lectura en torno al comportamiento de las élites expuesto por los diversos autores revisados nos permite confirmar la validez de las ideas de Foucault para comprender los ejercicios de poder en el siglo XX. De conformidad con su propia interpretación, hemos visto cómo todas las élites analizadas tienen su rasgo fundamental en la capacidad de ejercer el poder. Por esa razón, nuestra conclusión coincide con la crítica foucaultiana al *postulado de la esencia*, en el sentido de que las élites *no poseen* el poder, sino una serie de recursos que les permiten *ejercerlo*.

LOS EJERCICIOS DE PODER DE LAS ÉLITES: *DESLOCALIZACIÓN Y RESISTENCIA*

Si bien la organización política, económica y sociocultural de cada uno de los países analizados condiciona la actuación de sus respectivas minorías, este despliegue responde, igualmente, a la organización

interna de cada élite y al carácter de sus propios integrantes. Así, la élite política mexicana representa el grupo minoritario más influyente en la configuración de los ejercicios de poder en nuestro país durante el pasado siglo, pues ha determinado los márgenes de maniobra de los grupos empresariales y militares, lo cual provoca una mayor rigidez en la red de poderes de México.

De este modo, la actual correlación de fuerzas en nuestro país ha experimentado apenas algunas variaciones durante el siglo XX, hecho que puede apreciarse en al menos dos aspectos: por un lado, en el comportamiento de la élite presidencial y sus prácticas autoritarias; por el otro, en el hecho de que el único cambio importante en la cima de la organización política fue la alternancia de una administración militar hacia otra de carácter civil, a partir del sexenio de Lázaro Cárdenas.

En los Estados Unidos, por el contrario, la realización del poder por parte de la élite política permanece limitada por la influencia del empresariado y la milicia; en aquel país, la élite corporativa y el círculo castrense tienen la misma capacidad que la minoría política para influir en la red del poder, lo cual repercute en la conformación de una arquitectura de poder político más flexible.

Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial provocó la proyección de los Estados Unidos como potencia mundial, hecho que, a su vez, trajo consigo un reacomodo de fuerzas en su política interna. Esto permitió que los distintos grupos de interés conformaran la élite de poder, una minoría que ejecuta y condiciona los ejercicios de poder de la sociedad estadounidense, de tal manera que la élite política juega en ella un papel subordinado a los intereses de otros grupos.

Así, puede decirse que, al permitir la interacción de diversas élites, la organización del poder en los Estados Unidos provoca el surgimiento de numerosos contrapesos entre cada minoría. Por el contrario, en México es la élite presidencial la que determina el juego del poder, ante la casi total inexistencia de contrapeso alguno.

Esta misma situación nos permite también hablar de la capacidad *reversible* del poder, porque las minorías corporativas y militares estadounidenses han encontrado los mecanismos adecuados para oponer resistencia al poder político, y crear una atmósfera favorable a sus propias necesidades, en detrimento de la agenda gubernamental.

En nuestro país, por el contrario, empresarios y militares nunca encontraron la manera de revertir el control hegemónico de la élite presidencial. Es verdad que ambas élites han podido convivir con el poder político, y se han beneficiado de esa cercanía, pero ninguna de ellas ha logrado ocupar una posición privilegiada que les permita ejercer mayor presión sobre los actores políticos. Por ejemplo, pese a su participación mediante inversiones, la élite empresarial mexicana no ha podido consolidar un poder tal que le permita una mayor participación en la toma de decisiones de la vida nacional. Esto se debe a su permanente confrontación con la élite política, en específico con el grupo presidencial.

En ese sentido, Roderic Ai Camp señala:

La historia proporciona una explicación importante de la causa por la cual no coinciden las concesiones que tienen del Estado los empresarios estadounidense y los mexicanos, ya que México no tuvo una clase empresarial genuina sino mucho después de la revolución de 1910 [...]; en Estados Unidos y Europa estos grupos crecieron por su propia iniciativa, mientras que en México el Estado desempeñó un papel protagónico en su formación. (Camp, 1990, pág. 50)

Así, durante el siglo XX la élite empresarial mexicana ha encontrado en el Estado y sus gobernantes el límite de su poder e influencia.

En cuanto a los ejercicios de poder militares, debemos recordar que la actuación de la milicia estadounidense va más allá de una participación conjunta con las minorías empresariales y políticas. Como

hemos visto, el ejército ha sido capaz de transformar la vida institucional, de naturaleza diplomática y civil, en una realidad donde imperan los valores de la guerra. Esta «metafísica militar» ha provisto a las fuerzas armadas de un lugar dentro de la actual red de poderes no sólo de aquel país, sino del mundo entero, debido a su papel protagónico a partir de la Segunda Guerra Mundial. El ejército mexicano, por el contrario, ha visto su poder limitado a las exigencias de los intereses empresariales y, sobre todo, a las necesidades del poder político.

Finalmente, podemos concluir que el desenvolvimiento de las minorías aquí estudiadas nos permite confirmar la crítica de Foucault contra el postulado de la *localización*, porque resulta casi imposible, y hasta inconveniente para el análisis, ubicar los múltiples ejercicios de poder de las élites en un lugar único y específico. Como hemos visto, el despliegue de poder y la influencia de los diversos grupos de interés se extiende por toda la red de fuerzas, desbordando los límites que la tradición habría considerado insuperables. Al diseminarse a través de todos los ámbitos de la vida social, el poder de las élites, tal como lo señalaría el propio Foucault, se vuelve *difuso*.

LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y TRANSFORMADORA DE LAS ÉLITES

Asimismo, luego de observar las acciones realizadas por los grupos minoritarios de cada país podemos convenir con la crítica de Foucault en torno a la creencia de que la *modalidad* fundamental del poder radica en su carácter represivo. Como hemos dicho, nuestro autor considera que además de obedecer a una finalidad represiva, el poder responde igualmente a una lógica productiva, creadora de sujetos. Aplicada a nuestro análisis, la naturaleza productora del poder nos ha permitido apreciar cómo las élites de ambos países forman parte activa de los procesos de *transformación* y *producción* de sus propios integrantes, con lo cual crean las condiciones que les permiten reproducirse a sí mismas.

Tanto en nuestro país como en los Estados Unidos, el control sobre las burocracias resulta fundamental; en el caso mexicano, porque constituye el espacio donde se somete a los futuros miembros de la minoría política a los procesos de transformación y normalización necesarios, con el fin de perpetuar la hegemonía del partido en el poder. En el caso estadounidense, porque la falta de una burocracia *auténtica* ha permitido utilizar los espacios de la función pública como accesos para el *intruso político* proveniente de los círculos empresariales y militares, y quien termina por establecer los lineamientos de la agenda política, conforme a sus propios intereses. En última instancia, y utilizando la expresión acuñada por Mills, podríamos preguntarnos si acaso no todas las élites han sido capaces de llevar a cabo la *intrusión* en el poder.

Además de mantener los espacios burocráticos reservados como premios y promociones a sus más leales adeptos, las élites empresarial y militar de los Estados Unidos han desplegado un vasto aparato de *normalización*, con el objeto de adiestrar a los futuros miembros en las ideas y los valores propios de la minoría. El empresariado reclama para sí la administración de los asuntos públicos por considerarse el grupo más apto en materia de organización. El ejército, por su parte, ha transformado la cotidianidad estadounidense mediante la imposición de una metafísica militar, lo cual ha resultado en una interpretación de la realidad a través de los valores de la guerra, en detrimento de la cultura cívica. Las dos minorías alimentan la variante contemporánea, hegemónica y militar, del sistema económico capitalista estadounidense.

En México, las transformaciones del sistema económico también han repercutido en el reordenamiento de las relaciones de poder. Las transiciones de una economía porfirista a otra posrevolucionaria, y de ésta hacia la globalización capitalista, trajeron consigo nuevos equilibrios en la red del poder nacional. Si bien la influencia de los grupos empresariales y castrenses del país depende de los márgenes de acción que los grupos políticos les permiten alcanzar, han sido capaces, no

obstante, de encontrar en esos espacios una forma de sobrevivir a las luchas por el poder. De hecho, puede decirse que en el empresariado y en la milicia la élite política ha encontrado los instrumentos para transformar el país, en consonancia con sus propios intereses: mientras las élites empresariales les procuran crecimiento económico, las estrategias militares les permiten imponer sus objetivos políticos como si se tratara de los valores compartidos por toda la nación.

En ambos casos, pues, los líderes de las distintas élites ejercen un poder que *produce* sujetos, *normaliza* sus sistemas ideológicos y *transforma* todos los ámbitos de la realidad social.

UNA LÓGICA DEL PODER ALTERNATIVA A LA TRADICIÓN

Todos los aspectos mencionados anteriormente nos permiten afirmar que la lógica del poder descrita por Foucault resulta útil para explicar la actuación de las élites en el siglo xx. De hecho, nuestra investigación nos ha permitido encontrar una semejanza muy interesante entre las interpretaciones del poder en Michel Foucault y en C. Wright Mills. Este último autor ha afirmado (2013) que no son

los políticos del gobierno *visible*, sino los altos directivos que se sientan en el directorio político [...] los que, por acción o por omisión, tienen el poder y los medios para defender los privilegios de su mundo corporativo. Si no reinan, gobiernan muchos de los puntos vitales de la vida cotidiana de los Estados Unidos, y ningún poder los contrarresta de un modo efectivo y consecuente. (págs. 155-156 [Énfasis nuestro])

Esta idea de Mills coincide con la interpretación de Foucault en cuanto a la presencia de un poder *invisible*, *latente*, de naturaleza extrajurídica y difusa; un poder capaz de realizarse fuera del marco meramente

institucional, y, con ello, capaz de condicionar las decisiones gubernamentales. (Contrariamente a lo que ocurre con el análisis de Mills, la recopilación de material que describiera las prácticas de los grupos elitistas de nuestro país se vio complicada en muchos casos debido a la perspectiva *estatista* de sus autores, lo cual dificultaba la observación del comportamiento *extrajurídico* de tales grupos. Así, la bibliografía disponible resulta escasa en términos de un análisis de las prácticas extrajurídicas de las élites mexicanas.)

Por ello, nuestra investigación nos lleva a sostener, con Foucault, la crítica contra el *postulado de la legalidad*, esto es, contra la idea de que el poder se ejerce sólo a través de los cuerpos del Estado legalmente constituidos. Como hemos observado, la falta de una burocracia *auténtica* —conformada por políticos profesionales y servidores públicos de carrera— ha traído como consecuencia, tanto en México como en los Estados Unidos, la debilidad de las instituciones del Estado, y ha hecho posible la llegada del *intruso político*. Todo esto nos permite poner en duda aquellas interpretaciones tradicionales basadas en la idea de un Estado como sujeto/actor *exclusivo* del poder, y nos lleva a cuestionar la pertinencia de una explicación sobre el poder político que, frente a las prácticas de los grupos elitistas a lo largo del siglo XX, soslaya la influencia de fuerzas extrajurídicas.

Así, la genealogía del poder descubierta por Foucault constituye un valioso instrumento para entender la actuación de las élites, al margen de los análisis tradicionales. Porque si a partir del siglo XX el poder se gesta en espacios extrajurídicos —desde los cuales ejerce su influencia sobre la sociedad entera—, cabe preguntarnos si es válido un método que se limitara a observar tan sólo aquellas manifestaciones del poder que acontecen en el ámbito jurídico del Derecho y sus leyes, del Estado y sus instituciones. Si se acepta la posibilidad de que el poder posea un cariz *paralegal*, y que su realización pueda ocurrir en el terreno de la «ilegalidad», tanto como en el de la legalidad, entonces la interpretación planteada por Michel Foucault resulta pertinente no

sólo como negación o superación de los clásicos, sino, en un sentido más modesto, como una lectura que complementa nuestras ideas tradicionales a cerca del poder.

BIBLIOGRAFÍA

LECTURAS BÁSICAS

Béjar, Helena. (1982), «Rousseau: opinión pública y voluntad general» (versión electrónica), *Reis*, núm. 18, págs. 69-82. Recuperado de: <http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=articulo&ktitulo=132&autor=HELENA+B%C9JAR>

Camp, Roderic Ai. (1990), *Los empresarios y la política en México: Una visión contemporánea*, trad. de Eduardo I. Suárez. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Camp, Roderic Ai. (2008), *Las elites del poder en México. Perfil de una elite de poder para el siglo XXI*, trad. de Bertha Ruiz de la Concha, 1ª reimp. Ciudad de México: Siglo XXI.

Castro Soto, Gustavo E. y Ernesto Ledesma Arronte. (2000), *Siempre cerca, siempre lejos: las fuerzas armadas en México*. Ciudad de San Francisco: Global Exchange.

Demarchi, Franco y Aldo Ellena (Dirs.). (1986), *Diccionario de sociología*, 2 tomos. Adaptación española de Juan González-Anleo, trad.

de Eloy Requena, Alfonso Ortiz y Julián Aguirre. Madrid: Ediciones Paulinas.

Díaz, Esther A. (2010), *La filosofía de Michel Foucault*, 4ª ed. Buenos Aires: Biblos.

Foucault, Michel. (2012), *El poder, una bestia magnífica: Sobre el poder, la prisión y la vida*, ed. al cuidado de Edgardo Castro, trad. de Horacio Pons. Ciudad de Buenos Aires: Siglo XXI.

Foucault, Michel. (1979), *Microfísica del poder*, trad. de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría, 2ª ed. Madrid: Las Ediciones de La Piqueta.

Foucault, Michel. (2010), *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*, trad. de Aurelio Garzón del Camino, 1ª reimp., 2ª ed. revisada y corregida. Ciudad de México: Siglo XXI.

Garduño Valero, Guillermo J. R. (2008), *El ejército mexicano, entre la guerra y la política*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Ibarrola, Javier. (2003), *El ejército y el poder: impacto e influencia política en el México moderno*. Ciudad de México: Océano.

Mills, C. Wright. (2013), *La élite del poder*, trad. de Florentino M. Torner y Ernestina de Champourcín, 2ª ed. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Mosca, Gaetano. (1984), *La clase política*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

- Savater, Fernando. (2010), «Michel Foucault, otra forma de ser filósofo», en Savater, Fernando, *La aventura de Pensar*. 2ª reimp., 1ª ed. Ciudad de México: Debate / Random House Mondadori. Págs. 372-383.
- Suárez Farías, Francisco J. (1991), *Élite, tecnocracia y movilidad política*, Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Weber, Max, (2002). *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. 2ª reimp., 2ª ed, ed. de Johannes Winckelmann, trad. de José Medina E. et al. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Zapata, Francisco. (2013), «Nota introductoria», en Mills, C. Wright. (2013).

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

- Ávalos Tenorio, Gerardo. (2014), *Pensamiento político contemporáneo*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Ayala Blanco, Fernando y Salvador Mora Velázquez (Comps.). (2010), *Grupos de poder. La toma de decisiones en un modelo democrático*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Babb, Sarah. (2003), *Proyecto: México. Los economistas del nacionalismo al liberalismo*, trad. de Ofelia Arruti. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino. (2011), *Diccionario de política*, 2 vols., trad. de Raúl Crisafio et al., 11ª reimpr., 3ª ed. Ciudad de México: Siglo XXI.

Calderón Quindós, Fernando. (2001), «Lo público y lo privado en la obra de Jean-Jacques Rousseau», *Isegoría*, núm. 24, págs. 213-221. Recuperado de:

<http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/613/614>

Canetti, Elías. (2009), *Masa y poder*, trad. de Horst Vogel, 5ª reimp., 1ª ed. Madrid: Alianza.

Castro, Edgardo (2004), *El vocabulario de Michel Foucault: Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y autores*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Foucault, Michel. (1988, jul.-sep.), «El sujeto y el poder» (versión electrónica), trad. de Corina de Iturbe. *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 50, núm. 3, págs. 3-20. Recuperado de:

https://docs.google.com/document/d/1UaWyEs9sAXpse5972NKKdZW-f0YUpcaMBOejOPA3Pktc/edit?hl=en_US&pli=1

García Canal, María Inés. (2005), *Foucault y el poder*, 1ª reimp., 1ª ed. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Hernández Estrada, Mara, José del Tronco y Gabriela Sánchez Gutiérrez (Coords.). (2009), *Un congreso sin mayorías: Mejores prácticas en negociación y construcción de acuerdos*. Ciudad de México: Flacso / Centro de Colaboración Cívica.

Rousseau, Jean-Jacques. (2014), *Discurso sobre las ciencias y las artes. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. El contrato social*, estudio introd. de Sergio Sevilla, trads. de Salustiano Masó y Consuelo Bergés. Madrid: Gredos / Barcelona: RBA.

Sánchez Azcona, Jorge. (2002), *Ética y poder*, 4ª ed. Ciudad de México: Porrúa.

Silva Michelena, José A. (2007), *Política y bloques de poder. Crisis en el sistema mundial*, 14ª ed. Ciudad de México: Siglo XXI.

Terán, Óscar. (1976, julio), «Foucault: genealogía y microfísica del poder» (versión electrónica), *Dialéctica*, (Revista de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla), Año I, núm. 1, págs. 59-75. Recuperado de:
<http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/getdoc.php?id=130&article=140&mode=pdf>

Zepeda Patterson, Jorge (Coord.). (2011), *Los amos de México. ¡Por sus nombres los conoceréis!* Ciudad de México: Temas de hoy.